CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA

Sesión del Pleno

celebrada el lunes, 10 de diciembre de 2007

ORDEN DEL DÍA:

Primero

ACTAS

— Lectura y aprobación, si procede de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 20 y 21 de noviembre de 2007.

Segundo

AUTORIZACIÓN DEL PLENO PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA

— Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Núm. exp. S. 621/000141) (Núm. exp. C. D. 121/000151).

Tercero

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— De la Comisión de Presupuestos en relación con Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 136 DEL REGLAMENTO DEL

SENADO. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 136, de fecha 10 de diciembre de 2007). (Núm. exp. S. 621/000136) (Núm. exp. C. D. 121/000149).

- De la Comisión de Cultura en relación con el Proyecto de Ley del Cine. **SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.** (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 138, de fecha 10 de diciembre de 2007). (Núm. exp. S. 621/000138) (Núm. exp. C. D. 121/000138).
 - De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 133, de fecha 3 de diciembre de 2007). (Núm. exp. S. 621/000133) (Núm. exp. C. D. 121/000099).
-

SUMARIO

Se abre la sesión a las once horas.

ACTAS Página
8838

Lectura y aprobación, si procede de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 20 y 21 de noviembre de 2007 Página
8838

Se aprueban las actas. Página

AUTORIZACIÓN DEL PLENO PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA 8838

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

La Cámara aprueba por asentimiento la autorización para que dicho proyecto de ley se tramite directamente y en lectura única.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Página
8838

De la Comisión de Presupuestos en relación con Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 136 DEL REGLAMENTO DEL SENADO Página
8838

El señor Fernández Cucurull, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.

El señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), presenta el proyecto de ley.

Consumen un turno de defensa de la propuesta de veto número 6, a la Sección 27, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, los señores Gasòliba i Böhm y García Ballesteró.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Bru Parra.

En turno de portavoces, intervienen los señores Sampol i Mas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Gasòliba i Böhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Albistur Marin, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Bru Parra, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sánchez Sánchez-Seco, por el Grupo Parlamentario Popular.

Se aprueba la propuesta de veto número 6, por 137 votos a favor y 117 en contra.

El señor presidente anuncia a la Cámara que se dará traslado de dicha aprobación al Gobierno y al Congreso de los Diputados.

Se suspende la sesión a las trece horas y cuarenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos. Página

De la Comisión de Cultura en relación con el Proyecto de Ley del Cine. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA 8858

La señora Flores Fernández, Presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.

En turno a favor hace uso de la palabra la señora Navarro Lafita.

Comienza el debate del articulado.

El señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 3 a 13.

La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas números 85 a 90, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Maqueda Lafuente defiende las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 37 a 84, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

La señora Gallego Esperanza defiende las enmiendas números 14 a 36, del Grupo Parlamentario Popular.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Navarro Lafita.

En turno de portavoces, intervienen los señores Perestelo Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Mixto; Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Álvarez Fernández, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Van-Halen-Acedo, por el Grupo Parlamentario Popular.

Se procede a votar.

Se aprueba la propuesta de modificación número 101892 por asentimiento de la Cámara.

Se aprueba la propuesta de modificación número 101893 por 132 votos a favor y 117 en contra.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 101894 por 133 votos a favor y 116 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 3 a 9 y 12, del Grupo Parlamentario Mixto, por 20 votos a favor y 229 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 10 y 13, del Grupo Parlamentario Mixto, por 21 votos a favor y 229 en contra.

Se rechaza la enmienda número 86, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 19 votos a favor, 229 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 89, del mismo grupo parlamentario, por 18 votos a favor y 231 en contra.

Se aprueba la enmienda número 90, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 136 votos a favor y 114 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 20 votos a favor, 229 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 71 y 78, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 36 votos a favor y 214 en contra.

Se aprueba la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 131 votos a favor, 106 en contra y 13 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 14, 29, 31 a 33, 35 y 36, del Grupo Parlamentario Popular, por 116 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 30, del Grupo Parlamentario Popular, por 248 votos a favor y 1 en contra.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Popular por 117 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 247 votos a favor.

El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Página

De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

8871

El señor López Carrasco, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.

El señor Bofill Abelló defiende la propuesta de veto número 2, de los señores Bofill Abelló, Aragonès Delgado de Torres, Esquerda Segués y Bonet i Revés.

El señor Muñoz-Alonso Ledo defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Rubial Cachorro.

En turno de portavoces, intervienen los señores Sampol i Mas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el señor Molas i Baillori, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Granada Paniagua, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo Parlamentario Popular.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, de los señores Bofill Abelló, Aragonès Delgado de Torres, Esquerda Segués y Bonet i Revés, por 5 votos a favor y 243 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular, por 117 votos a favor y 131 en contra.

Comienza el debate del dictamen de la comisión.

El señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 28 a 34.

El señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la enmienda número 35.

El señor Urrutia Elorza defiende las enmiendas números 1 a 18, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Tuñón San Martín defiende la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Casas i Bedós da por defendidas en sus propios términos las enmiendas números 59 y 60, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

La señora Etxegoyen Gaztelumendi defiende la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 66 a 112, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, retirando las números 61 a 65.

El señor Van-Halen Acedo defiende las enmiendas números 37 a 56, del Grupo Parlamentario Popular.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Castillo Jiménez.

En turno de portavoces, intervienen los señores Jorquera Caselas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Porta Cantoni, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Van-Halen Acedo, por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor Jorquera Caselas hace uso de la palabra por el artículo 87.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 33 y 34, del señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 15 votos a favor, 227 en contra y 4 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del señor Sampol i Mas, por 18 votos a favor y 228 en contra.

Se rechaza la enmienda número 35, del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 21 votos a favor y 225 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 18, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Urrutia Elorza, por 18 votos a favor y 228 en contra.

Se rechaza la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por el señor Tuñón San Martín, por 15 votos a favor y 230 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 59 y 60, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 226 en contra y 3 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 20 votos a favor y 226 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 66 a 112, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 7 votos a favor, 226 en contra y 11 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 37 a 56, del Grupo Parlamentario Popular, por 115 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 127 votos a favor y 119 en contra.

El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales este proyecto de ley.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y treinta y cinco minutos.

Se abre la sesión a las once horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión.

ACTAS:

— LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2007.

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Actas. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 20 y 21 de noviembre de 2007.

¿Alguna observación a las mismas? (*Pausa.*) Entiendo que no.

¿Se pueden aprobar por asentimiento? (*Asentimiento.*)
Quedan aprobadas.

AUTORIZACIÓN DEL PLENO PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA.

— PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 621/000141) (C.D. 121/000151).

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Autorización del Pleno para tramitación en lectura única. Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Se tramita por el procedimiento de urgencia.

La Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, ha resuelto proponer al Pleno de la Cámara que acuerde, por este proyecto de ley, se tramite directamente y en lectura única de conformidad con el artículo 129 del Reglamento.

¿Está de acuerdo la Cámara? (*Asentimiento.*)

Se aprueba por asentimiento.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

— DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 136 DEL REGLAMENTO DEL SENADO (S. 621/000136) (C.D. 121/000149).

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Se tramita por el procedimiento del artículo 136 del Reglamento del Senado.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Fernández Cucurull.

El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señor vicepresidente, señorías. Tengo el honor de presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Presupuestos del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado día 21 de noviembre de 2007, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha, ya se tramitó por el procedimiento de un mes. La Comisión de Presupuestos se reunió los días 22 y 23 de noviembre al objeto de designar la ponencia que había de informar sobre el proyecto, así como para celebrar las 32 comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios con la finalidad de dar información sobre el proyecto de ley que nos ocupa.

El plazo de presentación de enmiendas terminó el 27 de noviembre de 2007 a las 18 horas. A este proyecto de ley se han formulado tres propuestas de veto —la número 1, por el señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto; la número 2, por el Grupo Parlamentario Popular, y la número 3, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria—, así como 4.753 enmiendas, de las cuales, dos de las presentadas por el senador Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, tres del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 21 correspondientes al Grupo Parlamentario Popular, implican la impugnación completa de una sección y, por lo tanto, se tramitan como veto conforme a lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento de la Cámara.

En cuanto al resto de enmiendas presentadas, corresponden al señor Sampol i Mas de la número 1 a la número 20; al señor Urrutia Elorza, de la número 21 a la número 68; al señor Muñoz Martín, de la número 69 a la número 73; al señor Jorquera Caselas de la número 74 a la número 96 y al señor Mur Bernad de la número 97 a la número 123, todos ellos senadores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto. Por otra parte, corresponden al Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria de la número 3.088 a la número 3.171; al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió de la número 4.219 a la número 4.750; al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés de la número 3.187 a la número 4.167; a los grupos parlamentarios Socialista y de Senadores Nacionalistas Vascos de la número 3.172 a la número 3.186; al Grupo Parlamentario Socialista, Entesa Catalana de Progrés y Senadores Nacionalistas Vascos la número 4.168; al Grupo Parlamentario Socialista, de la

número 4.170 a la número 4.218 y al Grupo Parlamentario Popular, de la número 124 a la número 3.087.

El día 29 de noviembre, la ponencia emitió informe por el cual se incorporaba al texto remitido por el Congreso de los Diputados la enmienda número 4.168, a la vez que se introducían determinadas correcciones técnicas. No obstante, el día 4 de diciembre, la comisión dictaminó el proyecto de ley no adoptando el informe de la ponencia, aprobando como dictamen de la comisión la propuesta de veto número 6 de impugnación de la sección 27, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*.

Para su debate ante el Pleno se han formulado 13 votos particulares de todos los grupos parlamentarios, con el propósito de mantener sus vetos y enmiendas ante el Pleno.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación parlamentaria llevada a cabo por la Comisión de Presupuestos del Senado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor presidente, señorías, me corresponde hoy presentar ante esta Cámara el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 tras su aprobación por el Pleno del Congreso.

Soy consciente de que vengo a presentar los presupuestos con un veto aprobado en comisión a la sección 27, que será lo primero que se vote en la sesión de esta mañana. No obstante, creo que esta Cámara, por el respeto que merece, justifica que comparezca para explicar los objetivos fundamentales de los presupuestos.

La elaboración del presupuesto se ciñe estrictamente a los plazos y al procedimiento que resultan de las disposiciones legales. Su elaboración se ha sometido a criterios de prudencia, tanto en la previsión de las hipótesis macroeconómicas que subyacen bajo el mismo como en la estimación moderada de los ingresos que los respaldan, con el fin de asegurar que estas son robustas ante posibles variaciones del entorno macroeconómico, cosa que si era posible en el mes de julio cuando se inició el debate, es más probable en este momento.

Asimismo, y como no podía ser de otra forma, estos presupuestos se ajustan al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado por los plenos de las dos Cámaras en junio de este año, objetivo que prevé un superávit del 0,3 por ciento del PIB para la Administración central y un 1,15 por ciento para el saldo positivo del conjunto de las administraciones públicas.

Este es un presupuesto cuyo crecimiento, en línea con el previsto para el PIB nominal, sigue profundizando en las mismas prioridades que vienen siendo referencia para la política presupuestaria desde hace cuatro años: estabilidad

presupuestaria, reforzamiento de la dimensión productiva y solidaria del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios públicos.

En el año 2004 nuestro Gobierno se comprometió a hacer de la estabilidad presupuestaria uno de los ejes fundamentales de la acción política en materia económica. El resultado final no ofrece lugar a dudas: tenemos un superávit total de 1,8 por ciento del PIB donde antes había déficit y al final de la legislatura habremos reducido la ratio deuda-PIB en unos 12 puntos porcentuales. Por lo tanto, hemos conseguido un proceso de consolidación fiscal liderado por la Administración central en el año 2007 y se mantiene como previsión para el año 2008.

La acción de gobierno ha venido acompañada por un sólido esfuerzo en materia de productividad. La inversión pública, con un impulso notable a los programas de gasto en materia de infraestructuras, educación e I+D+i, se ha intensificado, de tal forma que ya pueden empezar a verse los resultados en investigación según los últimos datos relativos a 2006 facilitados por la encuesta del Instituto Nacional de Estadística.

En el año 2008 el Estado va a seguir liderando el esfuerzo inversor con un nuevo incremento de recursos para programas de investigación civil. La dotación, tras la tramitación parlamentaria de enmiendas del Congreso de los Diputados, asciende a 7.768 millones de euros, un 18,8 por ciento más que en el ejercicio anterior. Con la dotación prevista para el año 2008, el presupuesto de I+D+i habrá alcanzado el 0,69 por ciento del PIB.

En el ámbito educativo, los créditos para el año próximo, después de enmiendas, ascienden a 2.933 millones de euros con un crecimiento del 18 por ciento, lo que supondrá, después de cuatro años, un incremento de las dotaciones de un 92,3 por ciento. Aproximadamente la mitad de esta cantidad se destina a becas y a ayudas a estudiantes, becas que, después de cuatro años de legislatura, se han visto mejoradas tanto en su cuantía, con un incremento medio de un 25 por ciento, como en el número de beneficiarios, que ha llegado a alcanzar en el curso 2007-2008 los 250.000 becarios. Además, aumentan un 77,4 por ciento los recursos destinados al desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley Orgánica de Educación. Principalmente se ha visto incrementada la dotación destinada a financiar la gratuidad de la educación infantil, tanto en su segundo ciclo de tres a seis años, al que se destinan 428 millones de euros, como en el ciclo de cero a tres años, para el que se han dotado, vía enmienda, 100 millones de euros.

La tercera gran línea relacionada con la productividad es la de las infraestructuras. En esta legislatura hemos vivido un proceso de inversión sin precedentes recientemente tanto en el ámbito público como en el privado. Hoy España invierte más de un 30 por ciento de su PIB, el registro más alto de los países desarrollados de nuestro entorno. Son cifras propias de un país con confianza en su futuro, el cual se está asentando en bases sólidas. El resultado final es que el *stock* de capital de la economía española se ha expandido de forma notable, con efectos posi-

vos sobre nuestras perspectivas económicas a medio plazo y sobre la productividad. España es hoy prácticamente el país desarrollado que más invierte en proporción al PIB.

En concreto, para la política de infraestructuras que gestione directamente el Estado en 2008, se destinan 15.170 millones de euros. Si a ello se añade la inversión que realiza el sector público empresarial, la cifra aumenta hasta los 24.121 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,9 por ciento respecto del presupuesto de este año 2007. Como no podía ser de otra forma, los Presupuestos Generales del Estado continúan reforzando la cohesión social, contribuyendo a que los beneficios del crecimiento se repartan entre todos los ciudadanos, con especial énfasis en los sectores más favorecidos. Por cuarto año consecutivo, más de la mitad de los recursos del presupuesto consolidado —es decir, 158.844 millones de euros— se destinará a políticas sociales, —un 7,8 por ciento más que en el año 2007—. Con ello van a seguirse garantizando las pensiones actuales y futuras y reforzando los niveles de cobertura social ya alcanzados, mejorando algunas prestaciones y ampliando la protección social, como en el caso de la dependencia, donde las dotaciones por parte del Estado, por ejemplo, se han venido duplicando cada año hasta alcanzar para el ejercicio de 2008 los 871 millones de euros.

Para incrementar la calidad de los servicios públicos se vienen contemplando dos líneas de actuación: por una parte, una más eficiente organización de la Administración que permita modernizar los servicios públicos y mejorar la atención a los ciudadanos y, por otra, un incremento de las dotaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del personal de la administración de Justicia con la finalidad de mejorar esos servicios y, especialmente, la seguridad ciudadana. En concreto, entre los años 2005 y 2008 se han incrementado los recursos destinados a la administración de Justicia un 43,3 por ciento y en seguridad ciudadana un 47 por ciento, lo que permitirá la creación de un total de 1.090 plazas de jueces y fiscales y la incorporación de 41.000 nuevas plazas de policías y guardias civiles.

Señorías, no quiero concluir este capítulo sin hacer una breve referencia al esfuerzo que viene realizando el Estado para mejorar la financiación de la Administración territorial, destinataria de más del 37 por ciento del presupuesto de gastos no financieros del Estado. En concreto, después de cuatro años de legislatura, las transferencias a las administraciones territoriales se han incrementado en un 46,07 por ciento y debemos destacar entre otras medidas las siguientes: en primer lugar, mejora de la financiación sanitaria —el Estado ha repartido entre las comunidades autónomas, incluidos los anticipos de Tesorería, fondos por valor de 1.091 millones de euros en 2005, por valor de 3.386 millones de euros en 2006 y por valor de 4.702 millones de euros en 2007—; en segundo lugar, la aprobación en el año 2005 de una compensación adicional de 120 millones de euros a las entidades locales para la reforma del impuesto sobre actividades económicas, y a partir del año 2007 esta compensación se ha incorporado

a la participación de estas entidades en los ingresos del Estado evolucionando con la misma; en tercer lugar, la creación desde el año 2007 de un fondo dotado con 40 millones de euros a favor de los municipios con población no superior a 20.000 habitantes, así como la instrumentación de planes concretos para el desarrollo de territorios con necesidades específicas, y me refiero a Extremadura, Galicia, Soria, Teruel y Jaén; por último, mejora de la financiación de las corporaciones locales mediante la puesta a disposición de anticipos de Tesorería correspondiente a la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del ejercicio inmediatamente anterior, lo que ha supuesto anticipar un año fondos por importe de 957 millones de euros en el año 2007.

En definitiva, señorías, los presupuestos para el año 2008 continúan poniendo el énfasis en aquellos gastos más susceptibles de generar un impacto positivo en la productividad, en el crecimiento y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en el marco de una nueva reducción de impuestos y sin menoscabar la apuesta del Gobierno por la estabilidad presupuestaria.

Señorías, los presupuestos que hoy presento ante esta Cámara son continuidad de lo que hemos venido haciendo en los últimos cuatro años. Son unos presupuestos coherentes con los compromisos que asumimos tanto en lo relativo al volumen de gasto como a su distribución. Precisamente porque son unos presupuestos coherentes y han contado con la colaboración de esta Cámara para reforzarlos en años anteriores, es difícil entender que prospere un veto, a no ser por el momento político en que nos encontramos.

En el Congreso se han aprobado enmiendas que implicaban una clara superación del techo de gasto, techo que fue aprobado por el propio Congreso y al que todos debemos atender, tanto el Gobierno como las Cortes, en la presentación de enmiendas. Por ello, este año esta Cámara tiene la responsabilidad añadida de articular correctamente algunas de las modificaciones introducidas en el Congreso.

Como he manifestado al comienzo de esta presentación, el veto a la sección 27, relativa al Ministerio de Vivienda, se va a debatir esta mañana. Señorías, es sorprendente que haya prosperado un veto precisamente en un área en la que este Gobierno, como sus señorías conocen bien, ha volcado grandes esfuerzos y sobre el que seguiremos trabajando en el futuro si los ciudadanos con su voto así lo deciden.

Por ello, me permitirán que me refiera de forma específica al presupuesto de este departamento. En el necesario marco que deriva del límite de gasto no financiero del Estado aprobado por los plenos de las dos Cámaras en junio de este año, el presupuesto de este ministerio aumenta de forma muy superior a la cifra del 6,7 por ciento correspondiente al techo de gasto. Se trata, además, del cuarto año consecutivo de incremento superior a la media. Estos datos son reveladores de la asunción de la vivienda como una de las prioridades de este Gobierno.

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno remitió a las Cortes reflejaba además

unos componentes de las dotaciones para vivienda acordes con el necesario diseño de las actuaciones en esta materia. Entre otros, destacan el esfuerzo inversor, el impulso del acceso a la vivienda por todos los ciudadanos y la adecuación a la estructura competencial del Estado de las Autonomías. Ello deriva de la estructura económica del presupuesto de Vivienda, en la que la mayor parte de las dotaciones se destinan al capítulo 7, transferencias de capital, y, además, el Plan Estatal de Vivienda, con una cifra de 1.200 millones de euros, absorbe un 10 por ciento más de recursos que el pasado año.

El proyecto de ley de presupuestos ha sido modificado en su tramitación en el Congreso con distintas previsiones para el fomento del alquiler, como la deducción por alquiler de la vivienda habitual o la consideración como créditos ampliables de las ayudas para renta de emancipación de los jóvenes, subsidiación de intereses y préstamos y otros apoyos a la vivienda. Además, se han aprobado modificaciones al presupuesto en la sección 27 relativas a obras de rehabilitación y remodelación de distintos edificios y barrios, muchos de ellos en Cataluña. Por tanto, se trata de un presupuesto que crece de forma muy superior a la media respetando el marco competencial y que ha sido modificado en el Congreso con una serie de mejoras, algunas de ellas también beneficiosas para alguna comunidad específica y especialmente para Cataluña. Este es el particular contexto de la aprobación de un veto a esta sección precisamente del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.

Me gustaría recordar un aspecto que no por ser obvio debe dejar de ser citado. La votación a favor de un veto, ya sea a esta sección, ya se trate de otros de los mantenidos para su defensa en Pleno, supone en última instancia el apoyo a la prórroga de los presupuestos de este año a lo largo del ejercicio siguiente; por tanto, se estaría evitando el adecuado reflejo presupuestario de las distintas medidas y acuerdos adoptados a favor de los ciudadanos, y que están recogidos en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2008, y concretamente el cumplimiento del Estatuto de Cataluña en el ámbito de las inversiones. Yo creo que, de acuerdo con esta lógica, cada uno de los grupos debe adoptar sus decisiones y explicarlas de forma correcta posteriormente.

En definitiva, señorías, con estos presupuestos se cierra el ciclo presupuestario de la legislatura. Ha sido un período de indudable éxito en el ámbito de las finanzas públicas, con cuatro años consecutivos de superávit y una importante reducción del peso de la deuda pública en el PIB del entorno de 12 puntos porcentuales; un período de intensa modernización de las estructuras económicas del país que hoy está más preparado para afrontar los retos del futuro, sean los educativos, los medioambientales o los relacionados con el conocimiento y la investigación.

Por todo ello, espero que, con su voto, manifiesten su apoyo para que este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 continúe su tramitación parlamentaria y se pueda aplicar el próximo año.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Gracia, señor ministro.

Pasamos a continuación al debate de la propuesta de veto número 6, a la sección 27, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Tiene la palabra el senador Gasòliba.

El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.

Señorías, con mi intervención o mis intervenciones en este debate parlamentario cierro un ciclo que inicié hace 27 años —en el Congreso de los Diputados ya me ocupé de los presupuestos en 1980—. He buscado ese *Diario de Sesiones* y he podido recordar que se cerró con un debate sobre una enmienda que venía del Senado relativa al impuesto sobre el tráfico de empresas, y en el cual intervinimos Ernest Lluch, en nombre de los socialistas catalanes, al cual de nuevo quiero rendir homenaje porque pagó con su vida —víctima del terrorismo— la defensa de la libertad y de la democracia; Barón Crespo, que está en el Parlamento Europeo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; García-Margallo, en nombre del grupo centrista, que también está ahora en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Economía; y Pérez Royo, que asimismo estaba en el Parlamento Europeo y que me precedió, porque, al acabar el mandato anterior, habló en nombre del Grupo Comunista y yo en nombre del Grupo Minoría Catalana. Como ven, estas intervenciones en los presupuestos me vienen de lejos y cierro, como digo, un ciclo que empecé interviniendo también, entre otras materias en el ámbito presupuestario. Y lamento realmente que lo que previsiblemente será mi última o una de mis últimas intervenciones —este veto a la sección 27, Ministerio de Vivienda—, no tenga un tenor positivo, porque se propone un veto y, por lo tanto, se rechaza una propuesta presupuestaria; lo lamento porque, —siguiendo la línea que me enseñó el presidente Pujol— es mejor sumar que restar, es mejor construir que destruir, y, evidentemente, lo que nos anima es contribuir a mejorar nuestra sociedad, pero entendemos que lo primero que hay que hacer para la defensa de esta mejora es respetar las leyes, y los Estatutos de Autonomía son de las leyes más importantes.

La primera razón por la cual nosotros proponemos el rechazo de la sección 27 es que este ministerio no respeta las competencias atribuidas en el Estatuto de Cataluña. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para que funcione bien una democracia es ser respetuoso con los mandatos y con las leyes; además, si estas leyes tienen el rango y el nivel de un Estatuto de Autonomía, aún más. Pero, desgraciadamente, el Gobierno y la ministra responsable de este ministerio no hacen caso, al igual que el Ministerio de Economía y el Gobierno con respecto a dos mandatos de este Senado para publicar las balanzas fiscales.

Por eso, lo primero que hacemos es una defensa en positivo de las competencias que están contenidas en el Estatuto catalán. Y, es más, no lo decimos solo nosotros. Tengo unas declaraciones del consejero de Economía, Antoni Castells, respecto a una de las propuestas que se desarrollan para el próximo año, y que han sido anunciadas por la

titular de este ministerio, la señora Chacón, en las cuales él mismo denuncia la invasión de competencias. También tengo una nota oficial del Gobierno catalán donde se explica que las atribuciones y el programa de mejora para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes en unos ciertos tramos de ingresos son mejores los del Gobierno catalán que los que ha ofrecido a bombo y platillo hace unas semanas la ministra Chacón. Evidentemente ahí hay una contradicción, un solape, una intromisión. Yo entiendo, que va a haber elecciones en el mes de marzo y hay gente que instrumentaliza y distorsiona algunos aspectos por unas políticas que creen que pueden llegar a tener un respaldo o una repercusión más favorable en la opinión pública, pero que esto lo haga una ministra que ha sido propuesta precisamente como candidata del Partido Socialista de Cataluña en Barcelona, que se entiende que será la cabeza de lista por este partido en Cataluña, es aún más grave; que sea la candidata del PSC por Barcelona, que de alguna manera es cabeza de lista en la candidatura catalana, y la titular de un ministerio la que conculque unos derechos reconocidos en el Estatuto, aún es más grave.

Este principio básico es lo que nos mueve: la defensa del Estatuto y el cumplimiento de las competencias atribuidas. Por otra parte, cuando se aprobó en el Senado el Estatuto catalán, el Gobierno del presidente Zapatero hizo una gran loa y se sintió absolutamente comprometido, tanto —y ahí están los anales— que fue fruto de un acuerdo con el líder de *Convergència i Unió*, Artur Mas. Por lo tanto, hay una contradicción evidente entre lo que se compromete, se firma y se aprueba con un alto rango legislativo y luego no se cumple.

Pero, además, hay que tener en cuenta las políticas en sí y después de casi cuatro años de Gobierno socialista y a pesar de la extraordinaria expansión de la construcción el problema de acceso a la vivienda continúa siendo el mismo. No se ha cumplido lo que dijo en el discurso de investidura el presidente Zapatero. Anunció que su Gobierno iba a afrontar en forma decidida el mayor problema de millones de familias españolas: la imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones razonables, pero esta dificultad con la que conviven millones de familias españolas no solo no se ha solucionado sino que se ha agravado. El coste de las hipotecas es más elevado, la dificultad de acceso para los jóvenes es mayor, las perspectivas económicas son peores y el paro está aumentando. Todo ello no ofrece precisamente el mejor panorama para animar a nuestros jóvenes, con unos salarios de media más bajos que antes, y facilitarles el acceso a una vivienda.

Nosotros tenemos una idea absolutamente diferente de lo que se plasma como política de la vivienda para el año que viene y en absoluto estamos de acuerdo, señor vicepresidente y ministro Solbes. Usted ha hecho una mención muy especial que no acostumbra a hacer cuando presenta los presupuestos. Me refiero a que ha puesto la venda antes que la herida, supongo que intentando contestar a la defensa que va a hacer. Si usted analiza los números, puede comprobar que lo que nosotros defendemos ahora, como siempre hemos hecho —de hecho, así lo manifesta-

mos en el debate a la totalidad de los presupuestos y hubiera resultado conveniente que tomase nota de ello entonces—, es que no necesitamos medidas puntuales, mediáticas y electoralistas anunciadas cuatro o cinco meses antes de unas elecciones. Lo que necesitamos realmente son políticas integrales de acceso a la vivienda; políticas dirigidas a la compra, al alquiler, a la rehabilitación, a agilizar los trámites de la justicia en caso de impago de alquileres, a crear fondos sociales para quienes necesitan recursos para no perder su vivienda. Todas estas políticas deben ser arbitradas y gestionadas por las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia para ello, aunque el Ministerio de Vivienda no quiera reconocerlo. Efectivamente, al Estado le corresponde contribuir a su financiación, y las medidas adoptadas por este Gobierno, como es la creación de la Agencia de Alquiler o las ayudas a los jóvenes de la ministra Chacón, no tienen ningún calado y afectan únicamente a una parte muy limitada de la población; una parte mucho más limitada que aquella a la que se dirige lo ofrecido por el Gobierno catalán. Pero, es más, algunas de estas propuestas no se pueden aplicar en Cataluña, y por tanto, son absolutamente vacuas. Nosotros no estamos para colaborar, para favorecer ni para apoyar esta clase de políticas, y aquí estamos hablando de la contribución del Ministerio de la Vivienda, etcétera.

El presupuesto del ministerio ha aumentado con las nuevas propuestas en 100 millones de euros, que es una cifra parecida, como bien sabe usted, señor ministro, a la del presupuesto del Ministerio de Economía para inversión en sus edificios. La gran aportación del Ministerio de la Vivienda para el próximo año destinada a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda es de cien millones de euros, que es lo previsto para el Ministerio de Economía, y todos estaremos de acuerdo en que ello no tiene la dimensión social ni la repercusión que debería en unos presupuestos que, como ha dicho el señor ministro, quieren tener de nuevo —y lo acentúa— una dimensión social.

Si hacemos un repaso de la legislatura podremos ver que, por ejemplo, en Cataluña la anterior ministra Trujillo anuncia en enero de 2005 la movilización del suelo público del Estado con una operación insignia: la Operación Campamento en Madrid. ¿Saben sus señorías que desde 2005 hasta ahora hay 30 cuarteles desocupados de la Guardia Civil en Cataluña y que no ha habido ni un metro cuadrado más disponible, motivo por el cual los municipios catalanes en los que están estos cuarteles no pueden hacer lo que se les pide, que es facilitar suelo urbano para construir viviendas fundamentalmente de carácter social?

En julio de 2005 sale un nuevo Plan de Vivienda 2005-2008, un plan —e insisto en ello— que cuando se aplica invade las competencias de las comunidades autónomas y cuyo resultado está por ver. Y tenemos también la creación de la Sociedad Pública de Alquiler, de naturaleza nuevamente centralista e invasora de competencias, que, al parecer, ha intermediado en unos 5.000 contratos. ¿Cuánto ha costado —no lo sabemos— intermediar en cada contrato y por qué se duplican unas competencias en las que administraciones como la catalana han demostrado su eficacia?

Por otra parte hay dos grandes aspectos: no hay política para las grandes ciudades, y el propio alcalde de Barcelona, el señor Hereu, lo ha dicho en público y ha intervenido no hace mucho en un debate dedicado a estos temas en el Ayuntamiento de Barcelona para explicar las limitaciones que tiene para aplicar en el ayuntamiento una política ambiciosa de construcción de viviendas de carácter social. Y por otra parte hay una incapacidad absoluta para desarrollar el tema de las viviendas de alquiler, para lo que hemos hecho una serie de propuestas de forma reiterada para atacar eficazmente algo que constituye un grave problema para la sociedad española no resuelto, y que tampoco se resolverá con la propuesta hecha para el ejercicio 2008. De ahí, señorías, que nosotros hayamos planteado un veto a esta sección.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Ballester.

El señor GARCÍA BALLESTERO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señor ministro. Nos encontramos en el debate del dictamen de la Comisión de Presupuestos, del veto a la sección 27, relativa a vivienda, que se ha convertido, según el Reglamento de la propia Cámara, en un veto a los Presupuestos Generales del Estado. Vayan mis primeras palabras para desearle al senador Gasòliba todo tipo de éxitos, después de tantos y tantos años interviniendo en las Cortes Generales.

El Grupo Popular también ha presentado un veto a los Presupuestos Generales del Estado y coincidimos en la mayoría de los argumentos que ha expuesto aquí el senador Gasòliba. Es verdad que no se respetan las competencias, pero nosotros decimos que no se respetan las competencias de todas y cada una de las comunidades autónomas que conforman la nación española. Se trata de un ministerio que no respeta ni ha respetado durante estos cuatro años las competencias de las comunidades autónomas, ni tampoco ha contado con ellas para realizar muchas de las iniciativas que se están llevando a cabo. La última, el famoso plan de emancipación que se ha puesto encima de la mesa, ni siquiera se ha consensuado, aunque ahora sí se está metiendo mucha prisa para que la legislación de las comunidades autónomas esté preparada y se empiecen a recibir las ayudas el día 1 de enero.

Hemos dicho, señorías, durante toda la legislatura que este es un ministerio que no tiene competencias, que las competencias están transferidas a las distintas comunidades autónomas, que en sus estatutos de autonomía tienen la competencia en vivienda, en urbanismo y ordenación del territorio. En estos presupuestos, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, el 90 por ciento —el 90 por ciento— va destinado a transferencias a las distintas comunidades autónomas. Y si importante es el presupuesto, que lo es, más importante es su ejecución, y el Ministerio de Vivienda, desgraciadamente, es el minis-

terio que menor ejecución presupuestaria tiene de todos los ministerios del Gobierno de España. La ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda está en torno al 4 o 5 por ciento, y eso no es serio.

Dice el señor ministro que su Gobierno ha realizado grandes esfuerzos económicos durante esta legislatura, grandes esfuerzos con los resultados que todos sabemos, y es que solo para la Comunidad de Madrid en los presupuestos del año 2008 hay casi 700 millones de euros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que solamente la Comunidad de Madrid tiene aproximadamente el 50 por ciento del presupuesto que tiene el Ministerio de Vivienda para toda España. Una sola comunidad, la Comunidad de Madrid, tiene el 50 por ciento de todo un ministerio para toda España.

Señorías, el presidente del Gobierno, el señor Zapatero, en su discurso de investidura afirmó que uno de los retos más importantes —y lo ha dicho aquí el senador Gasòliba— que tenía que afrontar esta legislatura era el problema del acceso a la vivienda. Eso fue a lo que se comprometió el señor Rodríguez Zapatero durante esta legislatura y para eso fue para lo que creó un ministerio; un ministerio que ha funcionado tan bien durante estos cuatro años, que la principal apuesta del señor Zapatero hoy está en su casa.

Nosotros siempre hemos pensado que este ministerio estaba más cerca de una ocurrencia que de dar soluciones a los ciudadanos. Hoy, después de cuatro años, no solamente lo piensa el Partido Popular, sino también todos los ciudadanos españoles. Este es un ministerio en el que se han producido y ha producido durante estos años contradicciones, rectificaciones y declaraciones que más tarde han sido rectificadas por el propio Gobierno; un ministerio al que le han sobrado ocurrencias y ha tenido una gran falta de talento en la concreción de medidas, lo que ha sido tan alarmante que incluso algunas veces —y ustedes lo saben— ha rayado en el ridículo.

Este ministerio solo establece el importe y el diseño de las ayudas para adquirir suelo, promover la edificación, la compra o el alquiler, pero saben sus señorías que quienes ejecutan verdaderamente todos estos fondos, los distribuyen y buscan soluciones son las administraciones locales y autonómicas. Por lo tanto, señorías, el Estado no puede promover ni una sola obra en esta materia, y así se puede comprobar en estos Presupuestos Generales del Estado —ya lo he dicho anteriormente—, en los que el 90 por ciento de los presupuestos correspondientes al Ministerio de Vivienda son transferencias a las comunidades autónomas.

Por tanto, hoy estamos en condiciones de decir que el Ministerio de Vivienda es la historia y tiene la historia de un rotundo fracaso por parte del Gobierno socialista. Y a los datos me refiero: hoy la vivienda en España es un 40 por ciento más cara que en el año 2003; los tipos de interés casi se han duplicado, pasando del 2,5 por ciento a más del 4,5 por ciento; el sector de la construcción está notando síntomas de agotamiento; los visados de obra nueva se han reducido un 13 por ciento y llevamos cuatro meses

consecutivos generando paro. Hoy, por comprar un piso en España te regalan la hipoteca, te regalan un coche, te regalan las vacaciones, cocinas amuebladas, mudanza gratuita o, por qué no, cheques de 12.000 euros en El Corte Inglés.

Y a todo esto se nos presentó en la puerta de La Moncloa el gran alumbramiento de la era moderna, vanguardista y, sobre todo, innovadora, de la señora ministra Chacón; una novedad tan innovadora que presentaron algo que ya estaba presentado. Se pone en marcha un plan que está copiado, que recorta derechos y que no está, según el subdirector del Ministerio de Vivienda, incluido en los Presupuestos Generales del Estado. Las ayudas que ha sacado el ministerio para la emancipación y el alquiler no están contenidas en los Presupuestos Generales del Estado, porque los setenta días y setenta noches que tardó la ministra en ponerlas en marcha fueron posteriores a la redacción de los propios Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, si se utiliza el argumento de que si se vetan estos presupuestos los jóvenes no van a tener acceso a las ayudas al alquiler, no se está ajustando a la verdad, porque eso no está en los Presupuestos Generales del Estado, dicho por el propio Gobierno, fórmula que se iba a poner en marcha mediante decreto y lo iban a incluir en el vigente Plan de Vivienda.

Por tanto, señorías, la vivienda hoy en España sigue siendo un problema y, quizá, con un acceso mucho más difícil que hace cuatro años. Hoy, los ciudadanos de España, según la encuesta del CIS, manifiestan en un 37 por ciento que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas. La vivienda se ha encarecido en un 40 por ciento. En el año 2004 el esfuerzo de una familia para pagar su vivienda era del 35 por ciento de su renta bruta, mientras que hoy está en el 45,4 por ciento, la cifra más alta de la serie histórica —estos son datos, señorías, del Banco de España—. La deuda por adquisición de vivienda ha aumentado hasta junio de este año un 17 por ciento. La deuda hipotecaria de los españoles en 2007 duplica a la del año 2003. Los tipos de interés también se han duplicado. La morosidad en los préstamos hipotecarios está en aumento. El precio de la vivienda en alquiler se encareció un 4,5 por ciento en los últimos doce meses, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La cifra de parados en la construcción sufre la cuarta subida mensual y acumula un aumento interanual de desempleo de más del 12 por ciento; y la inflación, señorías, también sigue subiendo.

Por tanto, el Gobierno, con sus presupuestos en materia de vivienda, con la ocurrencia del Ministerio de Vivienda, no solamente no ha facilitado el acceso a la misma sino que los ciudadanos que ya la tienen se encuentran con muchas más dificultades para pagarla; el 78 por ciento de las familias en la actualidad paga mucho más de lo que pagaba cuando contrataron su crédito.

Cuatro años de gestión, señorías, cuatro años de fracasos, de modificaciones, de rectificaciones, de planes copiados, de destituciones y, sobre todo, de vivienda más cara. Hoy, en materia de vivienda, señorías, podemos asegurar que estamos peor que hace cuatro años, es decir, no

es que en estos últimos cuatro años no se haya resuelto el problema, sino que se ha agravado.

Por consiguiente, señorías, vamos a apoyar el veto de *Convergència i Unió* por entender, repito, que el ministerio no solamente no ha resuelto el problema sino que lo ha agravado, porque consideramos que está invadiendo competencias de las comunidades autónomas y, fundamentalmente, que para distribuir el 90 por ciento del presupuesto entre las comunidades autónomas no hacía falta un ministerio.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno en contra. Tiene la palabra el senador Bru.

El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, senador Gasòliba, lamento tener que despedirle en este final de su larga, fructífera e intensa vida política con un turno en contra, y le agradezco sinceramente, y de forma muy especial como discípulo de Ernest Lluch, su cariñosa referencia a mi inolvidable maestro.

El senador Gasòliba, en su intervención, ha situado el veto presentado por *Convergència i Unió* y apoyado por el Grupo Parlamentario Popular —con quien usted simbólicamente ha accedido a compartir el turno en contra— en su auténtico contexto, y la defensa que usted ha efectuado del mismo no ha contribuido precisamente a despejar las dudas, la extrañeza, la perplejidad de este veto, este intento de obstaculizar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, que suscita dudas, extrañeza y perplejidad, y serán ustedes y no nosotros los que tendrán que despejar y explicar, sobre todo a la sociedad catalana, que contempla con asombro su incomprensible, su inesperada, su inexplicable e inexplicada oposición a que lleguen a buen término los Presupuestos Generales del Estado que contienen la mayor cifra de inversiones de toda la historia para Cataluña.

En cualquier caso, si nos situáramos ante la perspectiva de un balance de final de legislatura, puede que no tuviéramos tantos motivos para sorprendernos. CiU cierra la legislatura con una maniobra parlamentaria tan insólita en su concepción y ejecución como aquella con la que la comenzó: la inició votando en contra de los primeros presupuestos del Gobierno socialista; nunca había hecho tal cosa en su dilatada trayectoria parlamentaria. CiU siempre había votado a favor de los primeros presupuestos de todos los gobiernos en la reciente historia democrática española, incluidos, por supuesto, los dos gobiernos del Partido Popular. Era un hábito dar ese voto de confianza inicial, que formaba parte de su tradición política. Lo rompieron, y ustedes sabrán por qué, aunque yo lo barrunto, y lo barrunto en clave extrapresupuestaria, en clave catalana. Pero no voy a entrar en sus problemas internos, no es mi negociado. Mi preocupación es que esa clave catalana, ese, llamémosle —permítame la broma—, *código Mas*, les lleva con ansiedad, con precipitación, a perder la sindé-

sis, la capacidad de análisis, de valoración, y, por medio de unas tácticas un tanto burdas, a intentar forzar situaciones que les han conducido en este caso, de forma, por desgracia y lamento decirlo, irremediable, al *cul de sac*, al cariñoso abrazo de la muerte que el Partido Popular se ha apresurado a darles.

Señoría, la primera conclusión de carácter ético-político que deberían extraer y tener clara ahora y en el futuro, es que el Gobierno socialista y el grupo parlamentario que lo sustenta ni negocia ni cede ni se doblega bajo presión tan indebida e injusta como innecesaria e inconveniente. Espero que al menos, parafraseando al filósofo, pueda repetir metafóricamente aquello de que bienaventurado el dinero que perdemos porque compramos prudencia. O en términos más modernos, citando aquel refrán anglosajón: aprendan también que quien juega fuerte, como mínimo, se arriesga a hacerse daño.

Senador Gasdòliba, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 destina 4.365,3 millones de euros en infraestructuras para Cataluña, el 18,72 por ciento del total regionalizado. Una cifra impresionante, casi tres cuartos de billón de las antiguas pesetas de inversión en infraestructuras para Cataluña en un solo ejercicio. Unos Presupuestos Generales del Estado que contienen globalmente casi un 10 por ciento más que en 2007 para inversiones en infraestructuras en toda España; un 17,4 por ciento más para el gasto en inversión, más desarrollo, más innovación; 9.000 millones más en seguridad ciudadana; una reducción en la factura fiscal de las familias españolas de 2.300 millones de euros; unos Presupuestos Generales del Estado en los que más de la mitad del gasto, 157.000 millones de euros, se destina a políticas sociales; y frente a eso, la respuesta de CiU es un cierto maximalismo radical, además encubierto con el subterfugio de, sin atreverse a presentar un veto a la totalidad, presentar tres vetos sectoriales a las secciones más inversoras, sabiendo, por la fundamentación en que los basaban, que el Partido Popular no podía apoyarles ni en Fomento ni en Medio Ambiente, y que el veto triunfante iba a recaer precisamente en Vivienda, en el ministerio de Carme Chacón. Un ministerio de tremendo contenido social; un ministerio volcado en Cataluña por su propia problemática, por su gran densidad urbana, para paliar la ausencia de política social, de política de vivienda tras las dos décadas de venta de aire y humo, de mucha retórica patriótica y poca vivienda de protección oficial.

Como he dicho anteriormente, ya explicarán ustedes a la sociedad catalana su oposición por razones estrictamente extrapresupuestarias a estos presupuestos, a estas inversiones; ya se lo explicarán ustedes a los ciudadanos, a sus votantes, a los empresarios, a las Cámaras de Comercio, a los sindicatos. Estoy ansioso por oír sus explicaciones, por oír que por un quítame allá estas competencias justifican haber llegado a este punto sin retorno, porque saben ustedes perfectamente que el Ministerio de Vivienda actúa con total respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas, que actúa a través de convenios; que si esto ha sido siempre así en estos años, en la actualidad precisa-

mente la presencia de la ministra Carme Chacón es *per sé* una garantía adicional de este escrupuloso respeto competencial, aunque su condición de candidata en las próximas elecciones no sea ajena ni mucho menos a la presentación de este veto, y usted en su intervención lo ha dejado paladinamente claro, pese a todos los subterfugios competenciales esgrimidos.

Por otra parte, y parafraseando un famoso discurso del presidente Roosevelt, tendría poco sentido que nos pusiéramos a discutir, en plena tempestad y con alguien hundiéndose en el agua, sobre quién tiene la competencia para lanzarle un salvavidas, sobre todo cuando quien alega a grandes gritos tener la competencia lleva veinte años sentado cómodamente viendo cómo la gente, sobre todo los jóvenes, forcejean y luchan en la vorágine de su existencia, y sin hacer nada por ayudarles a desarrollar un proyecto de vida autónomo facilitándoles una vivienda digna y asequible.

En este punto, dadas las estrechas relaciones que existen entre el sector de la construcción como generador de empleo y el desarrollo económico general, sería como mínimo discutible que la Administración General del Estado careciera de título competencial para intervenir en el sector de la vivienda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.13.^a de la Constitución Española, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Además, las políticas que desarrolla el Ministerio de Vivienda por medio de la sección 27 tienen, entre otros objetivos, el de favorecer la movilidad geográfica de los ciudadanos y, en consecuencia, el de incrementar la eficacia del mercado de trabajo para la asignación de sus recursos, lo que repercute indudablemente en la mejora de la competitividad. En este sentido, las medidas que se han adoptado recientemente para facilitar el acceso a una vivienda digna en régimen de alquiler dinamizan el mercado de arrendamientos fomentando, además, la movilidad laboral.

La política de vivienda, para cumplir el objetivo prioritario de ordenación básica y planificación general de la economía, que corresponde a la Administración General del Estado, se desarrolla por medio de planes plurianuales de vivienda, que se articulan en convenios de colaboración con las comunidades autónomas y las entidades financieras. Se busca así equilibrar el desarrollo regional y estimular la distribución de la riqueza, como consecuencia de la planificación, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Española. Por otra parte, los incentivos a promotores y adquirentes que se contemplan en los planes de vivienda persiguen minorar el esfuerzo económico que a las familias con menos recursos les supone la adquisición de una vivienda y, a la vez, dinamizar el sector de la construcción como actividad generadora de empleo, estando, así, a lo establecido en el artículo 40.1 de la Constitución Española.

Finalmente, y para no extenderme más en cuanto a títulos competenciales, la política de vivienda asumida por la Administración General del Estado coadyuva a la conse-

cución del objetivo que el artículo 47 de la Constitución Española señala a los poderes públicos de garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Que el ministerio está realizando una importantísima tarea en el fomento del derecho a la vivienda lo evidencian las cifras récord de construcción anual de viviendas protegidas unas 100.000 al año, el 80 por ciento de las cuales las financia el Gobierno central; o el hecho de que, dentro del plan estatal de vivienda 2005-2008, se desarrollen una serie de objetivos estratégicos concretos, algunos con claro alcance de discriminación positiva, como la creación de programas específicos para determinados colectivos: jóvenes, discapacitados y víctimas de la violencia de género o del terrorismo. El interés que han suscitado estas ayudas dirigidas a los jóvenes, y en concreto las que contiene el real decreto que regula la renta básica de emancipación, se pone de manifiesto en la web del Ministerio de Vivienda en la que se informa de las mismas que, desde que se creó, el 5 de noviembre, ha recibido más de un millón de visitas.

El veto del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, apoyado por el Grupo Parlamentario Popular, va en contra de una política que intenta que el acceso a la vivienda deje de ser un problema para convertirse en un derecho efectivo. El veto a esta sección de los Presupuestos Generales del Estado se produce contra una política que está dando ayudas directas a los jóvenes y fomentando el desarrollo económico y social de muchos barrios degradados. El Grupo Parlamentario Popular les apoya en este veto a la sección 27, que ustedes fundamentan en la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de vivienda. Pero los populares, senador García Ballester, se limitan a reproducir lo mismo en su veto a la sección 27, como sucede con la mayor parte de sus otros vetos sectoriales, con el consabido latiguillo, idéntico al del año pasado, referido a que los créditos consignados no garantizan el crecimiento sostenido de la economía, la adecuada creación de empleo y la vertebración del territorio. Jamás han hablado en su veto a esta sección de que sea competencia exclusiva de comunidades autónomas; jamás, y me remito al *Diario de Sesiones* y a sus debates con el senador De Orduña. Han hablado de incremento de gastos de funcionamiento, de partidas innominadas, de sueldos excesivos, pero jamás se han referido a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, y repito que me remito al *Diario de Sesiones* del pasado año y anteriores.

Sin embargo, de repente, a la vista de su veto, ven la luz, vuelven *saulos*, se convierten en los mayores autonomistas de España y se suben al último tren desestabilizador de los Presupuestos Generales del Estado, olvidando que el señor Rajoy, don Mariano, está predicando que hay que recortar y recoger competencias autonómicas y fortalecer el Estado, y aquí vale todo con tal de liarla en el último momento.

En el ínterin, el Grupo Parlamentario Popular olvida que ha presentado nada menos que 104 enmiendas a la sección 27, muchas de las cuales son altamente simbólicas

territorialmente hablando, lo que indica que no tenían ni la menor intención de apoyar a priori ningún veto a esta sección. Veán, si no, un surtido florilegio de ellas: 3,7 millones para rehabilitación del Mercado Central de Valencia; 28 millones para vivienda social en Valladolid; 4,5 millones para rehabilitación de algunos barrios en Canarias, concretamente, La Candelaria y José Antonio, en Santa Cruz de Tenerife, y Moscardó, en Icod de los Vinos; 9,6 millones para rehabilitación integral del barrio de Entrevías, en Madrid, incluyendo el Pozo del Tío Raimundo, en colaboración con el ayuntamiento y la comunidad autónoma, que afectaría a 16.000 viviendas y 37.390 personas; 15 millones para plan de vivienda en Valencia, 20 millones para plan especial de vivienda en Baleares, 18 para promoción de suelo en Canarias y Baleares; 7,5 para plan de vivienda en Cataluña; 15 millones para plan de rehabilitación de viviendas en Barcelona; seis más para el barrio del Carmel; cinco para Ceuta; siete para Tarragona; 5,5 más para Canarias; 10 para el casco antiguo de Córdoba; 15 para el Museo Nacional de Urbanismo, en Barcelona, etcétera, etcétera. Todas estas enmiendas, que tienen su lógica dentro de una postura opositora de corte tradicional, saltan por los aires a la primera oportunidad que ustedes les brindan de ejercer la ruptura parlamentaria, y así, de forma entusiasta, les brindan su apoyo incondicional.

Pues, mire usted, senador Gasòliba, sobre este apoyo al Grupo Parlamentario Popular, permítame que les diga que van en una muy buena compañía para explicar su postura en Cataluña. Van ustedes de la mano de la coherencia y de la seriedad personificadas. Llevan ustedes como compañero de viaje a un grupo que basa en parte su veto global a los Presupuestos Generales del Estado en que Cataluña tiene un incremento en las inversiones presupuestadas del 45 por ciento respecto al ejercicio de 2007 y su veto a la sección 17 en que el Gobierno socialista paga peaje a sus socios nacionalistas, favoreciendo claramente a las comunidades nacionalistas, sobre todo, a Cataluña.

Por eso, para compensar, sus socios en esta aventura oportunista han presentado enmiendas para Madrid por importe de 2.440 millones de euros y 220 millones para los problemas de Barcelona, solo 20 millones más que para atender los problemas de la ganadería ovina y caprina, dicho sea simplemente para que tengan un punto de comparación y referencia. Llevan ustedes como compañero de viaje a un grupo tan coherente en sus planteamientos presupuestarios y fiscales que, para pasmo de propios y extraños, expresó en comisión su coincidencia casi absoluta con el veto de totalidad presentado por Eusko Alkartasuna, un veto que, entre otros asuntos no menores, solicita que las aportaciones vía cupo reviertan íntegramente al País Vasco, lo mismo, por cierto, que solicita el señor Rambla, vicepresidente de la Generalitat Valenciana, que, al calor reciente de las balanzas fiscales y el supuesto déficit fiscal valenciano, exige ya un equilibrio entre lo que aporta y recibe la comunidad, por cierto, un planteamiento que o se desautoriza o tendremos que situar al señor Camps en el mismo grupo en cuanto a sus planteamientos que al señor Carod-Rovira, porque dicen lo mismo. Llevan

ustedes como compañero de viaje a un grupo que, en suma, comenzó la legislatura votando el veto presentado por el senador Anxo Quintana en nombre del BNG, que era un completo memorial de agravios contra el abandono y la injuria presupuestaria en que la Xunta, presidida por don Manuel Fraga, y los Gobiernos del señor Aznar habían sumido a Galicia, y al *Diario de Sesiones* me remito. Y que ahora está dispuesto a apuntarse a un bombardeo para ver si puede culminar su estrategia de tensión y crispación, desestabilizando el proyecto de Presupuestos Generales del Estado votando lo que sea, con quien sea y al coste que sea.

Bien, pues miren ustedes, como, por una parte, parece que no es posible que quien tiene capacidad y posibilidad de recapacitar lo haga y, como, por otra, el Grupo Parlamentario Popular quiere demostrar o simplemente evidenciar que por los misterios del sistema mayoritario, pese a tener nueve millones y medio de votos —porque eso de los diez millones de votos es un bulo tan grande como las armas de destrucción masiva, o sea, millón y medio de votos menos que el Partido Socialista— tiene, sin embargo, en esta Cámara 25 senadores más; en breve, a la hora de votación, esta extrañísima unión temporal de grupos parlamentarios puede que consiga su objetivo de convertir nuevamente en esta legislatura a la Cámara alta en una transitoria Cámara de bloqueo legislativo, que puede que alcance la, sin duda, para algunos histórica meta de retrasar unos días la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Por supuesto que, con toda legitimidad, pueden ustedes votar lo que les plazca, es su privilegio y es su derecho, pero, por favor, explíqueno a la ciudadanía. Explíqueno.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Sampol.

El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre del PSM-EN, *Bloc per Mallorca*, intervengo para defender el voto contrario al veto. Y nuestro voto contrario al veto no es fruto de nuestro entusiasmo por los presupuestos, todo lo contrario, sino porque perdemos la oportunidad de defender y someter a votación algunas enmiendas que persiguen dos objetivos: el primero, demostrar a sus señorías lo injustos que han sido con las Illes Balears el Gobierno del Estado, el Congreso y el Senado, desde el año 1977, desde todo el período democrático, de antes no tenemos antecedentes. Segundo, corregir en parte la injusticia histórica mantenida a lo largo de estas décadas, culpable de que hoy los ciudadanos de las Illes Balears padezcamos la peor dotación de servicios públicos de todo el Estado.

Voy a aprovechar este turno, pues, para intentar cumplir el primer objetivo y recordarles que la solidaridad no es

unidireccional porque, señorías, hoy ya se da el caso de que algunas comunidades autónomas tienen una renta per cápita disponible superior a la de las Illes Balears y son receptoras netas de recursos. Lo cierto es que si analizamos las liquidaciones de los presupuestos desde 1977, cada año se repite la misma constante: las Illes Balears son la última comunidad en financiación autonómica por habitante, en distribución de fondos europeos. Por supuesto, estamos excluidos del Fondo de Compensación Interterritorial y somos los últimos en inversión a través de los Presupuestos Generales del Estado, también en los de este año.

Sumando estos cuatro conceptos, que son el mecanismo de redistribución de riqueza entre los territorios, los ciudadanos de las Illes Balears percibimos cada año 607 euros menos por habitante que la media de comunidades autónomas. Si nos comparamos con Extremadura, cada ciudadano de Balears recibe 1.331 euros menos que un extremeño. No niego la necesidad de solidaridad, pero lo que ustedes han estado practicando no es solidaridad. Solidaridad es que los territorios ricos aporten según su riqueza, que cada ciudadano pague según su riqueza, pero que todos los ciudadanos reciban por igual. ¿Por qué razón un pobre de Balears ha de tener menos servicios que otro pobre de cualquier otra comunidad? Tenemos un 17 por ciento de población que vive en la pobreza, y la expectativa de caer en la pobreza alcanza un 25 por ciento de nuestra población. ¿Por qué razón un pensionista de Balears ha de tener menos servicios públicos que el resto cuando la media de pensiones es la tercera más baja del Estado en las Illes Balears, siendo la vida un 7 por ciento más cara? ¿Por qué los jóvenes de Balears han de tener menos recursos que la media cuando necesitan el 80 por ciento de su sueldo para comprar una vivienda? ¿Por qué si contribuimos a financiar trenes de alta velocidad no recibimos su ayuda, la que deben aportar, para cumplir la Ley del Régimen Especial de las Illes Balears? ¿Por qué no recibimos ayuda para fomentar un modesto transporte ferroviario o un digno transporte público?

Señorías, hemos sido y somos los que más aportamos territorialmente al Estado. Ya sé que muchos de ustedes afirman que los territorios no pagan, que los que contribuyen son los ciudadanos. De acuerdo, si los ciudadanos son los que contribuyen, entonces ¿por qué todos los ciudadanos no reciben igual? ¿Por qué? ¿Por qué unos ciudadanos reciben más que otros? ¿Qué justicia es ésta? ¿Qué igualdad de todos ante la ley es esta que propugna la Constitución? Son muchas preguntas, demasiadas, que no tienen respuesta. Son muchos los problemas que tenemos en una comunidad que genera mucha riqueza, pero también muchas desigualdades y desequilibrios territoriales, y es hora de que una mayor parte de la riqueza que generamos se reinvierta en nuestros ciudadanos, especialmente en los más necesitados, se reinvierta en nuestro territorio, en nuestra cultura amenazada, en nuestro patrimonio histórico-artístico.

Vamos a perder esta oportunidad de defender unas enmiendas que intentaban paliar estos déficit. Tal vez nos

veamos el año que viene en una situación mejor. Lo cierto es que estos problemas, este déficit de financiación y de inversión pública, han sido reconocidos en esta Cámara por el propio vicepresidente del Gobierno, han sido reconocidos en las Illes Balears por el propio presidente del Gobierno, y, el otro día, en su discurso de conmemoración de la Constitución, el propio presidente de las Illes Balears reivindicó la necesidad de mejora de la financiación y de las inversiones públicas en las Illes Balears. Los tres son del mismo partido que está gobernando en el Estado español y en las Illes Balears, y no entendemos por qué hemos de esperar a después de unas elecciones para empezar a solucionar estos problemas. Ahora se ejerce el poder, ahora se tiene la responsabilidad, y después de las elecciones quién sabe.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el senador Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente del Gobierno, señorías, voy a aprovechar esta intervención para fijar la posición global del Bloque Nacionalista Galego con respecto a los presupuestos que se debaten en esta Cámara pues considero que es el momento procedimental oportuno.

El Bloque Nacionalista Galego discrepa de alguno de los aspectos globales de estos presupuestos. Como en el caso de ejercicios presupuestarios anteriores, consideramos que la necesidad de que las cuentas públicas arrojen superávit presupuestario ha supuesto que estos sigan siendo unos presupuestos excesivamente dependientes. Desde nuestro punto de vista, este tipo de políticas limita la necesidad de un ritmo inversor más fuerte en materia de infraestructuras y gasto social que corrija los desequilibrios preexistentes y sitúe el gasto social del Estado español en la media comunitaria, de la que aun está muy lejos. Además —si me permiten ustedes la digresión—, este tipo de políticas pueden verse agravadas por la carrera preelectoral en la que parecen instalados tanto el Partido Popular como el Partido Socialista a la hora de ver quién propone mayores rebajas fiscales.

El Bloque Nacionalista Galego considera que son necesarias políticas fuertes de inversión pública para corregir desequilibrios sociales y territoriales. Por lo tanto, una política que adelgace en exceso las políticas fiscales, así como una política presupuestaria excesivamente dependiente de la necesidad de arrojar superávit presupuestario pueden limitar la consecución de estos objetivos.

Discrepamos también —lo señalo aquí, pues el veto se ha presentado a esta sección— de alguno de los aspectos del reflejo presupuestario de la política de vivienda. En primer lugar, porque consideramos que alguno de ellos invade competencias atribuidas a las comunidades autónomas. Y, en segundo lugar, como ya hemos manifestado en debates sustanciados en esta Cámara, porque consideramos que estas políticas de vivienda no son eficaces, sobre

todo porque operan en el ámbito de la demanda de viviendas de alquiler en vez de operar en la oferta de las mismas. Entendemos que este tipo de ayudas puede tener efectos perniciosos tales como provocar indirectamente un crecimiento de los precios de las viviendas en alquiler.

En cualquier caso, el Bloque Nacionalista Galego tiene que hacer valoraciones de carácter global. Por lo tanto, consideramos que estos presupuestos son mejores que los de ejercicios precedentes y, sobre todo, mejores que en la legislatura anterior.

El Bloque Nacionalista Galego, como fuerza política gallega de carácter territorial, lógicamente, analiza y valora particularmente el significado de estos presupuestos para Galicia. En ese sentido, el Bloque Nacionalista Galego, durante la tramitación de los presupuestos en el Congreso de los Diputados, se fijó un objetivo básico: los Presupuestos Generales del Estado debían contemplar una inversión en infraestructuras para Galicia de, al menos, un 8 por ciento de la inversión territorial en materia de infraestructuras en el conjunto del Estado. ¿Por qué? Porque solo si se lleva a cabo una inversión en infraestructuras para Galicia superior a la que nos correspondería en razón de nuestro peso relativo por población o, incluso, en relación con nuestro peso relativo por producto interior bruto, se podrían ir corrigiendo los déficit históricos acumulados en materia de infraestructuras en Galicia durante años de marginación en las inversiones de infraestructuras efectuadas por el Estado. Por lo tanto, consideramos que es necesario este ritmo inversor para asegurar, en definitiva, que se vaya saldando la deuda histórica que padece Galicia en esta materia.

Además, le damos particular importancia a esta cuestión, porque Galicia parte de una posición más débil que otras comunidades autónomas en este terreno; comunidades autónomas que han conseguido reformar sus estatutos de autonomía, dotarse de nuevos estatutos y blindar en los mismos las inversiones del Estado en sus territorios. No ocurre así con nuestro Estatuto de Autonomía, dado que el proceso de reforma que se inició en el Parlamento gallego al final no prosperó por falta de acuerdo entre las formaciones políticas que lo configuran. De ahí que el Bloque Nacionalista Galego haya procurado hacerse fuerte en la negociación en el Congreso de los Diputados en una exigencia como ésta, que nosotros consideramos justa. Esta exigencia está recogida en estos presupuestos, y además se han incorporado a los presupuestos en su tramitación en el Congreso de los Diputados unas enmiendas del Bloque Nacionalista Galego que solicitaban un importe total de 104 millones de euros. De aprobarse estos presupuestos, una vez termine su tramitación parlamentaria, significaría dotar a Galicia de un ritmo inversor que duplicase lo que estaba contemplado en el famoso Plan Galicia, tan aireado por alguna fuerza política.

Estas son las razones que fundamentaron el apoyo que el Bloque Nacionalista Galego dio en el Congreso de los Diputados a los presupuestos, y son también las razones por las que el Bloque Nacionalista Galego no puede votar a favor del veto interpuesto a esta sección. Si prospera en

el trámite del Senado cualquier veto a cualquier sección, significa que se vetan los presupuestos y que, por tanto, se devuelven al Congreso. De adoptar una posición contraria a la que estoy manifestando, estaríamos incurriendo en una contradicción muy grave dado el apoyo global que nos merecen los presupuestos, pese a las objeciones que he reseñado al principio pero, sobre todo, y como muy bien manifestó mi compañero de grupo el senador Sampol, estaríamos impidiendo que en el Senado se pudieran introducir mejoras en estos presupuestos que nosotros seguimos considerando son necesarias.

Por ese motivo anuncio el voto en contra del Bloque Nacionalista Galego al veto interpuesto por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Belda.

El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente del Gobierno, señorías, en este turno de portavoces anunciamos, tal y como hicimos en comisión, que vamos a votar a favor de este veto a la sección 27 por los siguientes motivos: En primer lugar, porque éste es un veto parcial a una sección presupuestaria que, lógicamente, está incluida en los presupuestos, y nosotros, aunque sea por otros motivos, hemos presentado un veto a la totalidad del presupuesto. Por tanto, aunque sea por esos otros motivos, se podría decir que este veto está incluido en nuestro veto de totalidad. Pero recordemos cuál fue la razón fundamental de nuestro veto a la totalidad del presupuesto: fue básicamente el incumplimiento de la legislación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en concreto el artículo 96 de la Ley 20/1991, que dice textualmente: En cada ejercicio el programa de inversiones públicas que se ejecute en Canarias se distribuirá entre el Estado y la comunidad autónoma de tal modo que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de todas las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular.

Ya en comisión dimos los datos —y ahí está el *Diario de Sesiones*— de lo que suponían las inversiones del Estado en Canarias en estos presupuestos. Por tanto, no voy a repetirlos. Pero lo que está claro, en resumen, y como conclusión de todos esos datos, es que en el capítulo 6, de inversiones, existe una diferencia entre lo que hay y lo que debería haber con respecto a Canarias de más de 400 millones de euros, y sumando los capítulos 6 y 7 hay una diferencia también entre lo que hay y lo que debería haber de casi 300 millones de euros. Éstos son datos que están en el propio informe elaborado por la Universidad de La Laguna. Y, lógicamente, esta diferencia en inversión, también afecta a esta sección 27.

Mientras sucede esto, el Gobierno del Estado aparentemente sí cumple con los diferentes criterios de financia-

ción establecidos en los distintos estatutos de autonomía aprobados recientemente, lo cual, desde el punto de vista de Coalición Canaria, supone una asimetría legal sin precedentes porque, además, los datos nos dicen que la economía canaria está entrando, tras una fase de importante desarrollo, en una desaceleración más rápida que el resto del Estado y peligran los objetivos de convergencia con el resto del Estado y la propia estabilidad presupuestaria.

Los datos que cité en comisión y a los que me refería en cuanto al incumplimiento de los artículos 95 y 96 de la Ley 20/ 1991 de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias están, además, extraídos de los informes que han elaborado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna y el propio dictamen del Consejo Económico y Social de Canarias, en concreto, el 4/ 2007; todos ellos concluyen destacando el incumplimiento de la legislación del régimen económico y fiscal de Canarias en cuanto a las inversiones del Estado para Canarias; aunque, como bien recuerda el Grupo Parlamentario Socialista, para Canarias el capítulo 6 se incrementa un 20 por ciento, más que la media, también es cierto que la suma de los capítulos 6 y 7 de estos presupuestos para 2008 supone un incremento nada más que del 13 por ciento, que es inferior a la media de todas las demás comunidades autónomas.

En todo caso, la ley del REF no dice que el incremento de inversiones del Estado con respecto al presupuesto anterior tenga que ser superior a la media; no, señorías, eso no es lo que dice nuestra legislación del régimen económico y fiscal especial para Canarias; lo que dice esta legislación es que las inversiones del Estado en Canarias tienen que ser iguales al conjunto de la media de las comunidades autónomas y esto, con los datos objetivos, no se cumple por mucho que desde el Grupo Parlamentario Socialista se intente destacar ese incremento parcial con respecto al capítulo 6.

Para esto solamente tenemos que ver los datos que figuran en el informe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los datos sobre las inversiones, el porcentaje de inversión real, la comparación entre la recibida en el período 2002-2007 y la que se prevé en estos presupuestos, la variación comparativa entre el 2007 y 2008. Y resulta que en la media de todo este período de 2002 a 2007 Canarias estaba situada en el puesto número 11 de todas las comunidades autónomas, mientras que para estos presupuestos de 2008 la variación entre 2007 y 2008 va a suponer que Canarias va a estar situada en el puesto número 12; es decir, señorías, perdemos inversión con respecto a los presupuestos anteriores comparativamente hablando.

Por lo tanto, esta es la razón fundamental que nos lleva a apoyar este veto parcial, pero también hay otra razón y es una razón lógica y coherente con ese veto a la totalidad que hemos presentado. Vamos a votar a favor porque, como bien ha dicho el señor Jorquera, los efectos de la aprobación del veto parcial son exactamente los mismos que si se aprobara nuestro veto a la totalidad, es decir, la devolución de los presupuestos al Congreso. A nosotros nos hubiera gustado no tener que presentar un veto a la

totalidad, pero lo hemos tenido que hacer, básicamente, por este incumplimiento de lo que significa algo fundamental para Canarias, que además está protegido constitucionalmente por la disposición adicional tercera y que vía Presupuestos Generales del Estado se está vaciando de contenido sin ese informe previo de la propia comunidad autónoma.

Señores del Grupo Parlamentario Socialista, no nos digan que con este veto estamos en contra de las ayudas electoralistas a la vivienda de este Gobierno porque no es cierto. No nos digan que estamos en contra de la política de vivienda, porque la política de vivienda en Canarias tiene que estar en concordancia y en coherencia con esa política y, entre todos, Estado y comunidad autónoma, tratamos de solucionar este gran problema a los ciudadanos. Por eso no estamos en contra de la política, y esa afirmación que han hecho algunos miembros del Grupo Parlamentario Socialista es mentira. Son ustedes y sus socios los que no han dotado suficientemente para Canarias —como ya ha mencionado algún portavoz con anterioridad—, esta sección y, en concreto, en lo que se refiere a la rehabilitación de viviendas.

Ustedes saben que estos presupuestos, en comparación con lo que deberían ser, son un castigo para Canarias porque su partido no gobierna en Canarias. Ustedes saben también que posiblemente este veto lo levantará el Congreso de los Diputados, pero son ustedes y sus socios, señorías, quienes han vaciado y descuadrado la sección 31 con enmiendas absolutamente clientelares que vamos a ver cómo se aplican si los fondos de donde proceden no existen.

En definitiva, señorías, y para concluir, son el Gobierno y los grupos que lo apoyan quienes han creado este problema y quienes tendrán que solucionarlo, porque si no me temo que todas esas enmiendas aprobadas en el Congreso de los Diputados con cargo a esta sección 31 quedarán total y absolutamente en agua de borrajas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, tiene la palabra el senador Gasòliba.

El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, utilizo este turno de portavoces en realidad para contestar a algunas de las consideraciones que ha hecho el senador Bru, quien de una manera dialéctica ha utilizado los términos de duda, extrañeza y perplejidad. Dada la contundencia con la cual acostumbra a expresarse, este uso es puramente, como digo, dialéctico, pero intentaré despejar algunas de esas dudas que le llevan a esta extrañeza y perplejidad.

En primer lugar, hay varias fuerzas políticas que apoyarán —ya se han manifestado algunas— este veto. Además, usted verá que el apoyo a este veto no se reduce al Grupo Popular, sino que está representado el arco parlamentario.

En segundo lugar, cuando usted se refiere a que la sociedad catalana contempla con asombro, no sé cuál es su percepción de la sociedad catalana, pero lo que la sociedad catalana contempla con asombro es que hace cinco meses hubiera un túnel que solamente podía tener dos carriles y cinco meses después ya funcione y haya tres carriles. Lo que la sociedad catalana contempla con asombro es que una ministra se comprometa a que llegue el tren de alta velocidad, el AVE, dando una fecha concreta, el 21 de diciembre, y que no se sepa ahora, aún, cuándo llegará. Lo que la sociedad catalana contempla con asombro es que unas obras afecten al normal funcionamiento de los ferrocarriles de la *Generalitat*. Lo que la sociedad catalana contempla con asombro es que miles de ciudadanos en la ciudad de Barcelona se queden sin electricidad durante días. Lo que la sociedad catalana contempla con asombro es que no haya una dotación suficiente en las instalaciones de educación y haya estudiantes que durante años tengan que estar en instalaciones provisionales. Lo que la sociedad catalana contempla con asombro es que se permita y haya una tolerancia increíble en cualquier país avanzado y civilizado en el cual miles de personas queden afectadas y bloqueadas en un aeropuerto internacional. Todo esto es lo que contempla la sociedad con asombro, y todo esto está bajo la responsabilidad de entidades del Estado. Añado que la sociedad catalana contempla con asombro que ustedes dejen 46 días dos líneas de tren de Cercanías sin funcionar, afectando a 160.000 personas en horas punta.

Por lo tanto, no sé que información tiene usted de Cataluña para intuir lo que se contempla con asombro, pero esto es lo que asombra, es decir, que en una sociedad desarrollada, entidades del Estado que se comprometen entre otras cosas a ofrecer y asegurar unos servicios públicos propios de una sociedad desarrollada, ustedes, el Gobierno socialista sean incapaces de asegurarlo.

No debe de leer los periódicos porque centenares de entidades catalanas, expresaron muy claramente su rechazo en una manifestación el día 1 de este mes.

Si hace usted balance final de la legislatura —como lo ha intentado hacer, aunque no ha habido posibilidad de extendernos en ello—, usted verá que las condiciones precisamente en vivienda, son peores ahora que al principio de legislatura. Y, si hace referencia a la posición de *Convergència i Unió* en el apoyo a los gobiernos, también en los presupuestos, tiene razón, porque el sentido de Estado de *Convergència i Unió* ha sido reconocido reiteradamente. Otro de mis maestros parlamentarios, Miquel Roca i Junyent, acuñó el principio de la gobernabilidad que, por cierto, a ustedes les fue muy bien de 1993 a 1996 y también para la consolidación democrática desde 1977 hasta 1982. Por lo tanto, no cite las cosas de manera sesgada. *Convergència i Unió* tiene una larga trayectoria de apoyo a la gobernabilidad y de una actitud responsable para las cuestiones de Estado. Usted dice que hay falta de confianza. Es verdad, hay una falta de confianza enorme. Y no lo decimos nosotros. Fomento del Trabajo Nacional, la patronal catalana, acaba de realizar un informe en el cual se demuestra que de cada cinco años, uno se lo ahorra el

Gobierno en inversiones en Cataluña; esto está demostrado, ha hecho un largo estudio y, claro, cada cuatro años, uno le salimos gratis. Por lo tanto, claro que tenemos desconfianza. Una cosa es contemplar una partida en los presupuestos y otra ejecutarla, e incluso licitarla porque algunos años han dejado de licitar el 30 por ciento de lo comprometido en los presupuestos. Así que, obviamente, tenemos desconfianza, pero no solo nosotros.

Usted propone que se lo explique a la sociedad catalana, cuando en realidad la sociedad catalana se lo ha explicado a ustedes. Tuvo lugar una reunión en el IESE en la que de manera expresa no hubo ningún representante político y donde los operadores económicos y sociales, incluidos los sindicatos que usted ha citado, denunciaron la falta de inversiones en Cataluña. Y puestos a decir si se cumple o no y si tenemos confianza o no, sepa usted que faltan 1.500 millones de euros en los presupuestos del año 2008 si tenemos en cuenta el compromiso previsto en el Estatuto y lo que no se ha cumplido. Por tanto, resulta obvio que hay falta de confianza.

Por otra parte, le recomiendo que no descalifique tanto nuestras políticas de alianzas porque igual en el mes de abril les parecen de perlas nuestras políticas de alianzas.

También le pido que no barrunte más. Nuestra posición es la del respeto al Estatuto, a lo que este contempla y a lo que tenemos derecho. Recuerdo que en el debate llevado a cabo en el Congreso el ministro Solbes dijo que eran unos presupuestos generosos con Cataluña, pero perdone que le diga que no lo son, que eso es lo que marca el Estatuto y que aún faltan 1.500 millones de euros.

Ha calificado de táctica burda nuestra posición. Entonces, debe ser una táctica burda defender el Estatuto; debe ser una táctica burda denunciar que el mandato del Senado en balanzas fiscales no se cumple. Esto debe ser taticismo y a lo mejor es lo que ustedes saben hacer: tácticas, y les parece que los demás también las aplican, pero no es así. Quiero recordar que la palabra burdo se la oí a un secretario de Estado del Ministerio de Economía —no diré cuál de los dos— cuando manifestó que ese cálculo de las balanzas fiscales era burdo. Pero ese cálculo burdo de las balanzas fiscales lo hizo el conseller Castells, consejero de Economía del Gobierno catalán. Debe ser que a los que se mueven cerca del Ministerio de Economía les gusta el calificativo burdo y lo aplican cuando no les parece bien algo.

Usted se ha referido a las dos décadas de Gobierno catalán, a las dos décadas de Gobierno de Convergència i Unió, si bien no son dos décadas, son 23 años. Pero la nueva coalición, el llamado tripartito, lleva cuatro años y algún día tendrán que empezar a olvidarse de los 23; o sea, a medida que vayan acumulando años, aunque no creo que duren mucho, tendrán que dejar de utilizar este argumento por dos razones. En primer lugar, porque en estos cuatro años el nuevo Gobierno catalán no ha realizado ni una sola inversión nueva en Cataluña y, en segundo lugar, porque las cámaras de comercio, Fomento del Trabajo Nacional y sindicatos están proponiendo una serie de proyectos a los que hacen oídos sordos. En este sentido, no quiero

hacer ninguna broma fácil sobre cómo va la gestión, aquello de los hechos y no las palabras del actual presidente del Gobierno de Cataluña; desde luego, si nos fijamos en los hechos vemos que este último año ha sido un desastre.

Además, ya que hace tanta alusión a la opinión pública catalana, quiero recordarle que en las últimas elecciones catalanas el Partido Socialista perdió 250.000 votos y unos cuantos diputados. Lo que sí es verdad es que no respetó a la fuerza más votada y con más diputados en el Parlamento y formó un Gobierno de coalición. Por cierto, los dos socios de los socialistas en el Gobierno catalán estaban en la manifestación del 1 de diciembre, lo digo para que aduzca temas de coherencia política cuando hable de las coaliciones.

Y finalmente, y ya que habla de la opinión pública de Cataluña y menciona a la ministra Chacón, le ruego que se lea la opinión de un columnista llamado Xavier Bru de Sala, que ha sido publicada hoy, lunes 10 de diciembre de 2007, en la página 17 del diario La Vanguardia, donde hace un repaso de los diversos candidatos a las próximas elecciones generales, siendo una de ellas la señora Chacón. Y dice así: «En cuanto a los candidatos catalanes, la debutante Carme Chacón empieza tan brillante como arrogante. Incapaz de admitir errores, viene montada en la soberbia, la divinización olímpica de su partido y la descalificación del resto del universo, lo cual nunca es bueno, y menos en estos momentos.»

No es bueno descalificar, no es bueno estar en el olimpismo del partido y de las posiciones; es bueno escuchar, es bueno mirar los hechos, es bueno pensar en el futuro y es bueno ser coherente y no alimentar la desconfianza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Albistur.

El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que todos estamos hoy de despedida, y es que esta va a ser mi última intervención como senador defendiendo los presupuestos y una de las últimas que haga en el Senado, pues no tengo la fortuna de tener a un señor presidente que me proponga continuidad si gana las elecciones. Así pues, y pase lo que pase, uno viene ya de despedida; peina canas, aunque no tiene muchos años, pero está vivo y todavía puede hacer muchas cosas.

Como decía, vengo a esta última intervención, tras 28 años en la vida política y siete defendiendo las posiciones del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sobre los presupuestos, con la intención de recopilar aquellos aspectos que han sido nuestro *leitmotiv*, pues entiendo que el señor vicepresidente no se acordará de lo que uno dice todos los años. Así, debo insistir, en primer lugar, en el poco hacer del Gobierno en materias clave para la vida social y económica con lo que yo siempre he calificado como una timorata y engañosa actuación en materia energética, donde verdaderamente no se acaban de

ver políticas decididas sobre la reducción de la dependencia energética, la introducción de las renovables; una timorata e indecisa posición pese a todas las declaraciones públicas que se hacen en el cumplimiento de Kioto y en lo que mañana van a ser los acuerdos de Bali, si mejoran lo de Kioto.

Asimismo quisiera animar a que se lleve a cabo un toda-vía mayor esfuerzo en cuanto a los recursos destinados a las políticas de investigación y desarrollo que deberían estar plasmadas como un pacto de Estado. Porque el Gobierno hace planes cada vez más coordinados con las comunidades autónomas, pero son estas las que impulsan, junto con empresas, universidades y centros tecnológicos, la investigación científica y tecnológica.

En los temas que acabo de citar —energías renovables, ciencia y tecnología— caben pocas políticas restrictivas, y más aún con esa nueva situación del ciclo económico y de modificación de la composición del producto interior bruto, debiendo volver a recuperar peso la producción industrial de alta y media tecnología que en estos últimos años no ha mejorado su aportación al producto interior bruto. Es verdad que se han hecho esfuerzos políticos en este sentido, pero todavía queda mucho por hacer.

No soy optimista con los gobiernos del Partido Socialista, tampoco lo soy con los del Partido Popular en estas materias, pero este es un asunto que todavía seguirá pendiente durante mucho tiempo. Reconozco que ustedes han mejorado en sus políticas, pero la distancia con la Unión Europea sigue siendo grande, por no decir enorme, y que el Gobierno va detrás de la iniciativa de comunidades autónomas y de la iniciativa privada y podría ser más coadyuvante. En esta misma Cámara y en este mismo hemicycle hemos aprobado una parte de esa política, como era la posibilidad de mejorar las aportaciones a los centros tecnológicos para el desarrollo del conocimiento propio acumulado en los proyectos de investigación realizados en estos últimos veinte años, porque la aportación del Gobierno es escasa en relación con la que realizan la iniciativa privada y la iniciativa pública de las comunidades autónomas. Este hecho —simplemente poder incrementar esta aportación, a lo que se ha negado después de una larga negociación el Gobierno, teniendo en cuenta que había una posición positiva por parte del Ministerio de Industria— podría ser más coadyuvante para ampliar la actividad investigadora en las políticas de ciencia y tecnología.

En segundo lugar, insistiré en lo que, a nuestro modo de ver, es un grave problema político y lo venimos diciendo todos los años. A finales del verano y principios del otoño ha tenido lugar un debate sobre la pérdida de peso de los salarios en la composición del producto interior bruto y también sobre el deterioro respecto al poder adquisitivo. Ha sido corroborado este hecho por el crecimiento de la inflación en el último trimestre, pero tenemos la sensación, si no la confirmación, de que el Gobierno se ha quedado impávido, prácticamente impasible y con algunas declaraciones que tienen un tinte derrotista. Se han apoyado medidas generales, intervenciones e investigaciones en la línea de buscar conductas de los

canales de distribución, pero mal explicadas, poco inteligibles y mal comunicadas al ciudadano a nuestro modo de ver.

Porque pese a todo lo que se dice respecto al crecimiento o a la influencia de determinados ítem, como son, por ejemplo, los cereales y sus derivados, en los precios de los alimentos, en un cuadro publicado por El País este miércoles, de 10 ítem, que van desde el aceite de girasol a los espaguetis, donde son significativas las subidas, seis nada tienen que ver con la cebada, ni con el trigo, ni con los cereales. El atún claro sube un 23 por ciento, las naranjas casi un 20 por ciento, las cebollas un 19 por ciento, etcétera. Es decir, afectan al 90 por ciento de las familias y poco tienen que ver con la subida de algunos, como la leche o los cereales, por culpa del incremento de producción, en este caso de los cereales, de los biodiésel, que de alguna forma han sido los culpables de toda esta situación. España, que solamente consume el 1,5 por ciento total de la producción de cereal que tiene en biodiésel, de alguna forma está experimentando de forma significativa crecimientos en la alimentación que resultan —hay que decirlo— escandalosos e inexplicables.

El incremento del número de familias con dificultades para llegar a fin de mes es una realidad que también figura en las estadísticas y que afecta a jubilados y jóvenes, donde se reduce su poder adquisitivo de forma importante. Sobre todo y particularmente quiero destacar a los jóvenes, cuya participación en la población activa alcanza prácticamente cotas de más del 80 por ciento, con sueldos y contratos que no están de acuerdo con la riqueza generada en el conjunto del Estado durante estas últimas décadas. España crece, pero no un elevado porcentaje de sus ciudadanos crece en su riqueza de forma similar. Y esto no supone una preocupación para el Gobierno. No hay sensibilidad ni la ha habido en estos cuatro años. No hay solución alguna. Yo sigo insistiendo en que esta cuestión supone un grave problema político al que no se le ha planteado solución.

España es de los pocos países, por no decir el único, que entre el año 2000 y el año 2006 ha visto crecer su presión fiscal, desde el punto de vista del incremento del total de los ingresos tributarios, en el porcentaje del producto interior bruto. Mientras que en los países más desarrollados de la Unión Europea, que debían ser nuestra referencia, no crece, sino que decrece la participación de los ingresos en el PIB, en España crece de forma significativa.

Habría que hablar de muchas cosas, como de las políticas y de las tasas municipales, que tienen un claro efecto inflacionista, pero diría que el fuerte crecimiento de los impuestos no ha sido contrarrestado con las reformas fiscales, lo que se ha traducido en un incremento, como digo, de la presión fiscal; y la inflación ha desempeñado el papel de un impuesto silencioso, principalmente sobre las rentas del trabajo y, por tanto, sobre aquellos trabajadores que no cuentan con más fuentes de ingresos que sus propios salarios, que son el 90 por ciento de los ciudadanos del Estado.

La falta de actualización para las tarifas y las deducciones del IRPF, según la inflación observada, ha mermado la

capacidad adquisitiva real de los contribuyentes españoles en el período 2003-2007 que estamos terminando en estos momentos.

Dicho esto, que son los temas en los que hemos incidido durante estos cuatro años y en los que incidimos también durante la legislatura anterior, tengo que mostrarle mi reconocimiento, señor vicepresidente. Reconocimiento porque finalmente no solamente hemos llegado durante esta legislatura a acuerdos en materia presupuestaria, sino también porque se han alcanzado acuerdos significativos, duramente negociados, pero que verdaderamente han supuesto hitos para la economía vasca. Me refiero a los acuerdos en materia de financiación en la «Y» vasca, la red del tren de alta velocidad, a la renovación del concierto y consolidación de la metodología de confección del cupo y al reconocimiento de la especificidad del establecimiento del equilibrio presupuestario para la comunidad autónoma vasca. Tenemos un tema pendiente por resolver al que no se le ha encontrado solución: el reconocimiento como ley de las normas forales aprobadas por las Juntas Generales. En esta línea existe una iniciativa reciente en el Parlamento vasco, firmada por todos los grupos y que será presentada en las Cortes Generales por una representación de todos los grupos políticos presentes en el Parlamento, que será un asunto para la próxima legislatura, aunque desde estos momentos reclamamos respeto y acuerdo para lo que los grupos políticos, por unanimidad, han decidido en el Parlamento vasco.

Finalmente, quisiera aprovechar estos tres minutos que me quedan para despedir a todos los miembros de esta Cámara. En primer lugar, a los compañeros de mi grupo parlamentario por el buen trabajo realizado en equipo, por la buena armonía y, sobre todo y lo que es más importante, por haber sido buenos compañeros. A todos los senadores, a los presentes y a los que están siguiendo el Pleno en sus despachos o están por los pasillos —no me importa, por el hecho de poder decir que uno ha conseguido tener no solo conocidos sino amigos en todos los grupos políticos.

Asimismo, quisiera dar las gracias a los servicios de la Cámara, empezando por la Secretaría General, a las direcciones y a los servicios de Informática, con el orgullo de haber aportado ideas para disponer de un buen servicio para el trabajo de los senadores. Animo a avanzar y a mejorar estos aspectos en próximas legislaturas. Lo mismo diría a las secretarías, a las taquimecanógrafas, a los ujieres, a los miembros de la cafetería y restaurante, a los responsables del garaje, a los policías de seguridad, a todo lo que hoy compone este Senado.

Lamento la solución que va a tener este debate presupuestario con este veto presentado por Convergència i Unió pero ganado por el Grupo Popular. No voy a hacer más comentario al veto. Quien sepa leer y escuchar ya sabrá sacar las conclusiones.

Nuestro grupo parlamentario va a votar en contra por catorce razones; catorce razones que afectan, fundamentalmente, al Laboratorio de Salud Pública para Álava; al Centro de Interpretación de la Ciencia y la Tecnología para Vizcaya; al Parque Científico de la Universidad del

País Vasco; a la Fundación Leia, en Álava; a la Unidad de Alto Rendimiento en Tecnologías Aerodinámicas, también en Álava; al Centro de Investigaciones Tecnológicas; a la Asociación para la Innovación y Desarrollo de las Energías Renovables; a la Fundación Donosti International Physics Center; al Parque de Innovación Empresarial; al Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación; al Programa Ingema para la tercera edad; a la Quincena Musical de Donosti; a la rehabilitación del Palacio de Justicia de Tolosa; y al Sukalde, también Centro de Investigación Alimentaria.

Eran cuatro proyectos para Álava, con 5 millones de euros; tres para Vizcaya, con 5 millones, y 6 para Guipúzcoa, con 3 millones 390.000 euros. Puede parecer poca cosa, pero corroboraban el esfuerzo de mucha gente. No ha podido ser. Habrá que trabajar en los programas que los diferentes ministerios van a aprobar con los presupuestos del Congreso.

En nombre de todos ellos, quiero reconocer el trabajo realizado por nuestro grupo parlamentario, la disposición del Grupo Parlamentario Socialista a alcanzar este acuerdo; y de nuevo, al señor vicepresidente, por su buen trabajo realizado en los años que le conozco. En nombre de todo el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, muchas gracias. *(Aplausos.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.

La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Gracias, señor vicepresidente, por su presencia en la Cámara en la presentación de este proyecto de ley.

Entesa Catalana de Progrés no tiene una posición común sobre el dictamen de la Comisión de Presupuestos. Los senadores de Esquerra Republicana de Entesa Catalana de Progrés votarán a favor en aplicación de nuestro protocolo, y habida cuenta de la posición de su grupo en el Congreso. Por tanto, señorías, intervengo en nombre de la mayoría que votará en contra del dictamen.

El contenido de este dictamen que debatimos hoy procede, como saben sus señorías, de la aprobación del veto de Convergència i Unió a la sección 27, que a su vez formaba parte en su contenido de la enmienda a la totalidad presentada por este grupo parlamentario en el Congreso, y que ya fue debatido y rebatido por el Grupo Parlamentario Socialista, entre otros, y la mayoría de Entesa Catalana de Progrés se mantiene en esa misma línea.

A nivel general, valoramos positivamente la política de vivienda contenida en la sección 27 en su orientación y en el esfuerzo de gasto e inversión que contiene.

Compartimos las políticas desarrolladas por el Ministerio de Vivienda a través de la sección 27 a partir del objetivo central de garantizar el acceso de todos a una vivienda digna y adecuada, y que pretende, entre otros objetivos, favorecer la movilidad geográfica de los ciudadanos y, en consecuencia, incrementar la eficacia del mercado de tra-

bajo para la asignación de sus recursos, lo que indudablemente repercutirá en una mejora de la competitividad y el empleo.

En este sentido, consideramos que las recientes medidas adoptadas para contribuir a facilitar el acceso a una vivienda digna en régimen de alquiler dinamizarán el mercado de arrendamientos, fomentando además una mayor movilidad laboral, y favorecerán —lo que valora especialmente nuestro grupo— el acceso a la vivienda de los más jóvenes.

En lo relativo a la distribución competencial y a la actuación de las distintas administraciones públicas, es evidente que una política eficaz de vivienda requiere coordinación y cooperación, respetando las competencias de cada una de ellas mediante la utilización de los mecanismos existentes, como son los convenios o la conferencia sectorial que, a nuestro juicio, funcionan adecuadamente; en el caso de que se produzcan disfuncionalidades, consideramos que pueden corregirse perfectamente a través de estos mecanismos.

Señorías, quiero señalar que el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, conjuntamente con el Grupo Parlamentario Socialista, ha presentado una enmienda importante a esta sección que contempla una dotación de 3 millones de euros para poner en marcha un plan de rehabilitación de los barrios de Barcelona y L' Hospitalet afectados por las obras del AVE. El plan tiene un importe de más de 32 millones de euros, a ejecutar en cuatro años, y afectará a 30.000 viviendas. Es una enmienda, señorías, que va en la buena dirección de compensar a los ciudadanos por los perjuicios y molestias producidos a lo largo de estos años.

Señorías, nos parece que el camino a seguir en este aspecto concreto y en otros es el de anteponer los intereses de los ciudadanos a cualquier otra consideración, y no nos parece un buen camino devolver los presupuestos al Congreso de los Diputados, que es lo que significaría aprobar el dictamen de la comisión en los términos actuales.

Por ello, me permito solicitar a los grupos parlamentarios que lo apoyan que consideren las consecuencias de su aprobación definitiva y, en consecuencia, pueda haber una rectificación de sus posiciones.

Señorías, no quiero acabar sin introducir un dato general, un dato objetivo, que excede a esta sección pero que ha estado presente en el debate, relativo a las dotaciones presupuestarias en términos globales destinadas a Cataluña para el ejercicio 2008; este dato es el acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya para dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias.

Señorías, afirmo que las cifras contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 en inversiones y en política de gasto cumplen adecuadamente la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña, como ha manifestado clara y solemnemente el Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Y esto, que es un gran motivo de satisfacción para el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, quisiera que fuera compartido por todos los

grupos parlamentarios puesto que de esta manera se va a poder por fin afrontar los graves problemas que afectan a Cataluña y a sus ciudadanos, todo ello sin perjuicio de la solidaridad que Cataluña mantiene y quiere seguir manteniendo con el conjunto de España.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Bru.

El señor BRU PARRA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor vicepresidente, voy a ser muy breve para concluir con el debate. Como de forma mayoritaria los intervinientes estamos utilizando los turnos como despedida, voy a aprovechar también mi intervención para despedirme, y por mor de economía procesal, puesto que el senador Albistur ha hecho una sentida intervención de despedida que comparto en todos sus puntos, doy por reproducidas y hago mías todas sus manifestaciones, para que así conste en el *Diario de Sesiones*, en la que posiblemente sea también mi última intervención ante esta Cámara.

Senador Gasòliba, cuando lea en el *Diario de Sesiones* mi intervención comprobará que no se corresponde exactamente con la referencia que usted ha hecho. Desde mi percepción, he lamentado que su grupo parlamentario haya abandonado lo que he calificado de la tradicional —voy a ver si lo encuentro exactamente en mis notas—, prudente, moderada y siempre sensata aportación de Convergencia y Unión a la estabilidad y a la gobernabilidad en la política española. O sea, que lo he dicho lamentando lo que me parece que ha sido una separación —espero que transitoria— de la línea de conducta tradicional de Convergencia y Unión. Espero que las aguas vuelvan a su cauce y que esto se quede en un sarampión infantil, puesto que, como decimos en mi tierra, *la professó és molt llarga i el ciri és molt curt*. Quiero decir que tenemos un largo camino que recorrer y esperemos que algunas diferencias transitorias no impidan que colaboremos en el futuro.

Usted, cuando ha subido aquí, ha utilizado la figura retórica de la enumeración para presentar el Memorial de Greuges que nos ha relatado. Le recuerdo que estamos hablando del veto a la sección 27, y no a la 17, de Fomento. Sin embargo, en la justificación de sus vetos, bien que se ha cuidado usted de exponer el veto a la 17 de forma que no pudiera surgir, porque como lo ha justificado sobre la base del Estatut de Catalunya, sabiendo perfectamente que el Grupo Parlamentario Popular no podía seguirle, ha conducido por el scalextric presupuestario —por así decirlo— al Grupo Parlamentario Popular para que el único veto que prosperara fuera el veto a la sección 27, y no el que se presenta a Fomento. No obstante, ha subido aquí, como digo, asombrándose y repitiendo el Memorial de Greuges de Cataluña, sobre la base de Fomento.

Me preguntaba usted que cuál era mi percepción de la sociedad catalana. ¡Hombre! Algún amigo tiene uno, alguna visita hace y algo de prensa catalana lee. Por cierto, en

esta aventura oportunista sobre los presupuestos, la prensa seria catalana no les deja a ustedes en muy buen lugar. Decía usted que la sociedad catalana se asombra. Sí, se asombra de lo que yo he llamada deriva radical de *Convergència i Unió*. De eso, evidentemente, gran parte de la sociedad catalana está absolutamente asombrada. Sigue asombrada, sigue con dudas y sigue perpleja. Pero usted lo resume todo en la manifestación de 125.000 personas, sobre la cual andan ustedes a la greña para capitalizar su éxito. Senador Gasòliba, con todo respeto a los manifestantes, que están en su perfecto derecho de salir a la calle cuantas veces lo estimen conveniente, si todo consiste en ver quién alza la bandera de los 125.000 manifestantes... Disputar ese espacio político no es lo que hubiera hecho tradicionalmente la *Convergència i Unió* que yo conocía. En fin, insisto en que están ustedes en su derecho de disputarse ese espacio político con quien estimen conveniente.

La sociedad catalana estará asombrada también de que algún dirigente político, como don Felipe Puig, le pida al presidente del Gobierno español que intervenga para decir quién debe ser el presidente de la Generalitat. En todo caso, quién es el presidente de la Generalitat se decide, y se ha decidido siempre, en el Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya decide democráticamente que quien sume más apoyos parlamentarios sea el presidente de la Generalitat. Esto no es propio de una nacionalista, tampoco de un autonomista y ni siquiera lo es de un tibio regionalista, sino más bien un rancio sucursalista, de un *butifler*; me refiero a eso de reclamar que el presidente de España decida quién es el presidente de Cataluña. Eso se decide, senador Gasòliba, en el Parlament de Catalunya. Se decide democráticamente. Si la ciudadanía de Cataluña, si los votantes de Cataluña han decidido que el señor Mas no gobierne Cataluña, ¡No pasa nada! ¡no pasa nada! Todo sigue igual. Las leyes físicas se cumplen, la ley de la gravedad funciona y también las leyes de la termodinámica. No pasa nada. Más vale que ustedes, por mor de su estabilidad psíquica y emocional, lo vayan asumiendo. No pasa nada.

Si ustedes lo asumen, estaremos en el camino de seguir colaborando, porque volverán a los mismos cauces, prudentes, moderados y sensatos. Es más, cuanto antes lo asuman, antes tendrá el señor Mas alguna posibilidad de gobernar Cataluña. Si no lo asumen, nunca gobernará, porque ustedes estarán anclados en esa situación de haber perdido el Sangrila, de haber perdido algo, cuando nadie les ha quitado nada. El Parlamento de Cataluña ha decidido democráticamente quién gobierna Cataluña. Ese es el único problema que hay, y no otro. Por tanto, es una cuestión que no forma parte del Memorial de Greuges, es un problema de clave catalana, que no tiene por qué influir en los Presupuestos Generales del Estado, senador Gasòliba. Yo lo veo así, aunque no quería entrar en ello, como antes le dije. Es una cuestión de clave catalana, en la cual no quiero ni debería entrar, pero, como usted ha venido con su Memorial de Greuges, me obliga a ello, a mi pesar. Pero dicho esto, senador Gasòliba, las aguas volverán a su cauce. Hay mucho recorrido por delante y creo que esta-

mos obligados —no condenados— a entendernos en su momento, como siempre nos hemos entendido, y como creo que sucederá también en el futuro.

Y como ya se ha dicho prácticamente todo lo que se tenía que decir en este debate, solo me resta reiterar mi agradecimiento a todos ustedes, a todos los grupos, por la paciencia que en ocasiones han tenido conmigo, así como su buena disposición, agradecimiento que hago extensivo al presidente y a los servicios de la Cámara. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sánchez Sánchez-Seco.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, señor Solbes, señorías, intervengo en este trámite de portavoces en representación de nuestro grupo respecto al veto presentado por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* a la Sección 27, correspondiente al Ministerio de Vivienda, para anunciar, como ya ha hecho anteriormente mi compañero, nuestro voto favorable, un voto favorable que se fundamenta, por una parte, en la coincidencia de este veto con el presentado por nuestro grupo a esta misma sección, y por otra, en lo que se refiere a la totalidad del presupuesto, pues coincidimos en que el ministerio ha supuesto todo un cúmulo de inoperancia desde su creación, primero con la ministra Trujillo y sus ocurrencias, y ahora con la nueva ministra, que desde su reciente llegada al ministerio también se ha hecho notar, y no para bien precisamente.

Ya la creación del Ministerio de Vivienda ocasionó cierta polémica precisamente por el argumento que esgrime el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* en su veto, relativo al hecho de que la gran mayoría de las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas o corresponden a los ayuntamientos, y, por tanto, desde el Gobierno se debería haber establecido una línea de actuación respecto a las bases y normas generales de este asunto tan importante, pero siempre en colaboración y con la ayuda de las dos administraciones que de manera más directa ejercen sus competencias casi en exclusiva, como son la autonómica y la local.

Por tanto, la creación de ese ministerio no tenía mucho sentido práctico, aunque sí, y a eso se debe el motivo fundamental de su creación por el señor Rodríguez Zapatero, un sentido político y especialmente electoralista. La vivienda es algo que preocupa mucho a todos los ciudadanos, como es lógico, pero este Gobierno desde el principio se ha preocupado más de la imagen, de su imagen, que de ofrecer ideas y soluciones para afrontar y resolver los problemas de flexibilización de las rigideces que le afectan, así como de una adecuada financiación y ejecución de promoción de viviendas públicas y en alquiler. Sirva como dato significativo de ello que el Ministerio de la Vivienda

es el que tiene menor ejecución presupuestaria, es decir, se trata de un ministerio que, además de contar con un presupuesto cicatero, ni siquiera es capaz luego de ejecutarlo.

No vamos a recordar aquí de nuevo las famosas soluciones mágicas que ofrecía la ministra Trujillo para que nuestros jóvenes pudiesen encontrar vivienda, o el espectáculo mediático de la nueva ministra con el presidente del Gobierno para presentarnos un nuevo Plan de Vivienda que no tenía nada de novedoso sino que, al contrario, era una copia improvisada a la baja de la medida que ya estaba en vigor, sin olvidar las recomendaciones de la señora Chacón a las entidades financieras sobre cómo debían desarrollar su política de inversión crediticia, como si de un doble del señor gobernador del Banco de España se tratase.

En definitiva, es evidente que el Ministerio de la Vivienda creado por el señor Zapatero se ha convertido en un cúmulo de despropósitos que ha incidido en mayor medida en el descrédito de la política desarrollada en esta materia por el Ejecutivo.

Indudablemente, habría sido más lógico y sensato desarrollar una política de colaboración con las administraciones autonómicas y locales evitando la invasión de competencias y transfiriendo muchos de los recursos presupuestarios previstos en este ministerio para su gestión por estas administraciones, más cercanas a los ciudadanos.

Por tanto, entendemos que nuestro apoyo a este veto está perfectamente fundamentado y justificado por todo lo anteriormente expuesto, pero todavía lo está más, señoría, si analizamos el conjunto del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2008, que nos ha llegado a esta Cámara tras su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Nos encontramos con un proyecto de presupuestos fantasma, en el que a día de hoy, inicio de su debate en el Pleno del Senado, desconocemos cuál es el marco general, el escenario macroeconómico que lo sustenta. (*Rumores*)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señor presidente.

Sabemos, por lo que están diciendo todos los organismos e instituciones nacionales e internacionales y hasta el propio vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y el subsecretario de Estado, el señor Vegara, que la realidad no tiene nada que ver con lo que se contempla en este texto que se nos ha remitido para su debate en esta Cámara, pero no sabemos los términos exactos, ni cuándo, ni cómo, ni en qué manera se va a modificar el cuadro macroeconómico, base fundamental para conocer también la variación del resto de variables que conforman el presupuesto, como son los ingresos, los gastos, la inflación, etcétera.

Sin ir más lejos, un aspecto importante y fundamental en el veto que ahora nos ocupa es cuál es la previsión real del Gobierno del incremento inversor del sector de la

construcción en el año 2008, señor Solbes, porque en el cuadro macroeconómico del texto presupuestario que se nos ha remitido se establece una previsión de crecimiento del sector de la construcción del 3,8 por ciento en 2008, cuando realmente la desaceleración está siendo mucho más pronunciada de lo que inicialmente se consideró por el Gobierno, y ya hay muchos organismos y analistas que consideran que, dado que la vivienda ha entrado en sus horas más bajas, y con los últimos datos de inflación conocidos, el aumento de los tipos de interés, que también se ha producido, y el creciente endeudamiento familiar, el sector de la construcción no superará, en el mejor de los casos, ni siquiera el uno por ciento de crecimiento el próximo año, y es evidente que este sector, junto al consumo, ha sido la base fundamental del crecimiento de nuestra economía, especialmente en lo que se refiere a la creación de empleo.

Por tanto, si desconocemos cuál es la previsión real del escenario macroeconómico del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2008, ¿de qué presupuesto estamos hablando, señorías? Es un presupuesto que comenzó a prepararse con una situación y una visión demasiado optimista de nuestra economía, que a día de hoy ha cambiado totalmente, un presupuesto que se elaboró más pensando en las elecciones generales del próximo mes de marzo que en las necesidades reales de nuestros ciudadanos o en la adopción de las medidas necesarias para corregir los desequilibrios que afectan a la economía española.

La consigna es que salga adelante como sea y cueste lo que cueste, y para ello se ha entrado en un mercadeo y subasta electoralista que produce vergüenza ajena, hasta el punto de provocar un déficit en su tramitación en el Congreso de los Diputados como no se había conocido hasta ahora. Estos presupuestos no son más que una fórmula para salir del paso: aguantar hasta las próximas elecciones legislativas y, después, ya veremos.

Son unos presupuestos malos técnica y políticamente, lo primero, porque no reflejan la realidad que afecta a nuestra economía, no identificando prioridades económicas y sociales ni estableciendo los instrumentos para poder alcanzarlos; y lo segundo, porque ha dejado en evidencia a un Gobierno que, por encima de cualquier criterio ético, ha sido capaz de desequilibrar el presupuesto con ofertas tipo *top manta* con tal de conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante el proyecto con quien sea y al precio que sea. Por cierto, esta es otra característica peculiar de estos presupuestos: el desbarajuste contable y probablemente legal con que nos llegan desde el Congreso de los Diputados. Si el proyecto de presupuestos ya nos llegaba maltrecho a esta Cámara tras el anuncio de incumplimiento realizado por los responsables económicos del Gobierno, además ahora nos encontramos con un desbarajuste de más de 200 millones de euros generados en su tramitación en el Congreso como consecuencia de la debilidad y de la cesión de este Gobierno en su dependencia mendicante del apoyo de otros grupos para poder sacar adelante el texto presupuestario al precio que sea, como decía anteriormente.

Y eso sin contar con los nuevos compromisos de gasto adquiridos hace quince días por el Gobierno, por el señor Zapatero, para evitar la reprobación de su ministra de Fomento y que supondrán un nuevo socavón en el desequilibrio presupuestario en el que ya nos encontramos.

El propio señor Solbes, en su presentación, acaba de reconocer que estas enmiendas aprobadas en el Congreso hacen que se supere el techo de gasto que aprobó el Parlamento en la pasada primavera. Y ante este desaguado, ¿cuál es la solución que se nos presenta por el Partido Socialista, es decir, por el Gobierno y sus socios mendicantes del gasto? Pues presentando una enmienda, la número 4.168 concretamente, que, evidentemente, incrementa más el gasto como no podía ser de otra manera. El senador Bru definía como ortopedia contable a esta enmienda incrementadora del gasto presupuestario y electoral, enmienda que quedará para los anales de la historia del Parlamento español. El texto justificativo de la propia enmienda lo dice todo: «En el trámite de aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2008 en el Congreso han resultado aprobadas enmiendas con cargo a la Sección 31, que no ha sido posible instrumentar por no existir crédito suficiente en la aplicación presupuestaria a que se imputaba la financiación»; eso dice la justificación de esta enmienda, es decir, la cesión y debilidad de este Gobierno, y del señor Zapatero más en concreto, para poder conseguir sacar adelante los presupuestos para 2008 y salvar del socavón a la ministra de Fomento ha sido de tal extremo que han llegado a romper la banca del Estado, han comprometido más gasto del que el propio presupuesto podía disponer. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Bonita manera de luchar y de adoptar medidas presupuestarias para conseguir reducir la inflación e incrementar la competitividad de nuestra economía.

Por tanto, señorías, nos encontramos con unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 que además de incrementar el gasto, lo hacen de una manera desequilibrada y, probablemente, fraudulentas, que no reaccionan ante la más que evidente recesión que nos afecta, que son una nueva ocasión perdida para afrontar los retos de la competitividad de España en el exterior. Hemos entrado, además, en una vorágine donde últimamente todos los datos y noticias que afectan a nuestra economía son negativas. Nuestra economía, señor Solbes, no es que vaya bien, es que comienza a ir mal y, desgraciadamente, parece que va a ir todavía a peor. Mientras los países de nuestro entorno comienzan a tener un crecimiento mayor, en España empezamos a tener un crecimiento menor, mientras en Europa baja el paro, aquí lleva cinco meses seguidos creciendo como no lo hacía desde hace ya bastantes años. En España crece la inflación el doble que en los países de la Europa del euro, con un diferencial negativo de más de un punto; perdemos 6 puntos en el *ranking* de

competitividad internacional; estamos a la cola de los países de la Unión Europea, junto a Italia, en cuanto al crecimiento de productividad; la presión fiscal se incrementa de nuevo, año tras año, a empresas y a ciudadanos; se reduce la producción industrial y la venta de vehículos; el aumento de los tipos de interés ha incrementado considerablemente el endeudamiento de las familias y, con ello, sus dificultades para llegar a final de mes. Como es lógico, todo ello provoca una espectacular caída en la confianza de los consumidores y ciudadanos hasta cotas casi ya olvidadas. Y no olvidemos, señor Solbes, y usted lo sabe perfectamente, que la economía es confianza, confianza y confianza, interna y externa.

Desgraciadamente, la tendencia es bastante negativa. En estos presupuestos no se contempla prácticamente ninguna medida ante este repunte de la inflación, ante este espectacular incremento de la inflación que ataca de manera más directa a los ya maltrechos bolsillos de los consumidores españoles. Además, y por cuarto año consecutivo, se incrementa la presión fiscal, incumpliendo de nuevo la promesa realizada por el propio señor Zapatero en su discurso de investidura.

Por tanto, son unos presupuestos irreales, unos presupuestos electoralistas, unos presupuestos que llegan en desequilibrio al Senado y que, desde luego, merecen ser rechazados y vetados, cosa que hará nuestro grupo esta mañana.

Muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la propuesta de veto acordada por la comisión en su dictamen. Es la propuesta de veto número 6 a la sección 27.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a favor, 137; en contra, 117.

El señor PRESIDENTE: Habiéndose aprobado el veto, se dará traslado de dicha aprobación al Gobierno y al Congreso de los Diputados. (*Aplausos*)

Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde, en que continuaremos con los siguientes proyectos de ley del orden del día. Reanudaremos la sesión con el proyecto de ley del cine.

Eran las trece horas y cuarenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Antes de continuar con el orden del día les voy anunciar el acuerdo de la Junta de Portavoces para que sepan cómo se va a desarrollar el Pleno hoy, mañana y pasado mañana. Durante la tarde de hoy se debatirán los dictámenes de la Comisión de Cultura, en relación con el proyecto de ley de

cine, y de la Comisión Constitucional, en relación con el proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Mañana martes se reanudará la sesión a las 10 horas, y se procederá a debatir el dictamen de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio en relación con el proyecto de ley de medidas de impulso de la sociedad de la información y, además, los informes de las siguientes ponencias: Ponencia de estudio sobre el problema de la obesidad infantil y juvenil en España, constituida en el seno de la Comisión conjunta de las Comisiones de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo; Ponencia de estudio sobre la red de alta velocidad, constituida en el seno de la Comisión de Fomento y Vivienda; Ponencia de estudio sobre la política de transporte de mercancías por ferrocarril, constituida igualmente en el seno de la Comisión de Fomento y Vivienda; y Ponencia de estudio sobre la agricultura española en el nuevo marco de la Unión Europea, constituida en el seno de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Finalizados esos puntos del orden del día, se suspenderá la sesión hasta el miércoles, en que se reanudará a las 10 de la mañana y se tramitarán los asuntos que figuran como puntos cuarto, quinto y sexto del orden del día, que no son otros que la lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, el mandato-marco a la Corporación de Radiotelevisión Española, y cuatro convenios internacionales.

Yo creo que ha quedado claro. Y ahora pasemos al cine.

— DE LA COMISIÓN DE CULTURA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DEL CINE. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000138) (C.D. 121/000138).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el proyecto de ley del cine.

Para la presentación del dictamen tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 26 de noviembre del presente año, tramitándose por el procedimiento de urgencia. El plazo de presentación de vetos y enmiendas terminó el día 30 de noviembre de 2007.

A este proyecto de ley se presentaron un total de 90 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: las números 1 y 2, correspondientes al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de la número 3 a la

número 13, del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; de la número 14 a la número 36, del Grupo Parlamentario Popular; de la número 37 a la número 84, correspondientes al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y de la número 85 a la número 90, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

La comisión se reunió el día 4 de diciembre para dictaminar el proyecto de ley. Las enmiendas defendidas fueron rechazadas, y la comisión aceptó como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Se han presentado cinco votos particulares a través de los cuales se mantienen para su debate y votación en el presente Pleno todas las enmiendas presentadas.

Con estas palabras, señorías, creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo de este proyecto de ley.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (*La señora Navarro Lafita pide la palabra.*)

Tiene la palabra, senadora Navarro.

La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente. Quisiera utilizar un turno a favor.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra.

La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Quiero comenzar mi intervención excusando la asistencia del señor ministro a esta sesión. Me consta que era de su interés presentarnos el proyecto de ley que ahora nos toca debatir, pero el no contar con que se fuese a tratar en este momento determinado, sumado al hecho de que el ministro tiene su agenda repleta de actos, y hoy concretamente está en Santiago de Compostela, hace imposible que pueda estar aquí. Por ello, quería manifestar su voluntad de haber presentado la ley y, como decía, excusar su asistencia. Y no estando el ministro para presentar este proyecto de ley, dada la alta significación que para mi grupo supone, no solamente por su contenido, sino también por lo que significa en el cumplimiento de compromisos electorales, quiero intervenir brevemente en este turno a favor.

Debatimos un proyecto de ley del cine que consideramos necesario, y basta leer la primera frase del preámbulo para sintetizar su importancia. Dice así: La actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra economía.

Señorías, al hablar de cine entendemos que hablamos de cultura, de manifestación artística, de expresión creativa y, con ello, también de respaldo a la creación y a los autores. Pero entiendo que también hablamos de economía, de empleo, de desarrollo tecnológico, de adaptación a las nuevas oportunidades y realidades. Por todo ello, señorías, considero relevante el poder resaltar en esta intervención los objetivos de la ley.

En primer lugar, tiene como objetivo articular la relación entre los agentes involucrados en la actividad cinematográfica y audiovisual, es decir, los creadores, productores, personal técnico y artístico, industrias técnicas, distribuidores, exhibidores y empresas viodeográficas.

Otro de sus fines es mejorar el tejido industrial de las empresas que operan en el sector con medidas de fomento y protección, para fortalecerlas, para hacerlas más sólidas y competitivas.

Además, señorías, este proyecto de ley pretende también promover y tutelar el acceso a la cultura, sustentándolo en la libertad de expresión, el pluralismo y la promoción de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país.

El contenido de este proyecto de ley es muy amplio, por lo que me gustaría destacar, aunque fuera sintéticamente, algunos aspectos relevantes de él, como la consolidación del Fondo de protección a la cinematografía, el fomento de incentivos fiscales, las medidas para la conservación y el mantenimiento del patrimonio cinematográfico, la definición y el apoyo específico a los sectores independientes o las medidas que facilitan el acceso y disfrute de las obras cinematográficas y audiovisuales a personas con discapacidad.

Señorías, considero que resulta obvio que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene una posición totalmente favorable a esta ley, que hoy tramitamos en esta Cámara. Y creo que tampoco me equivoco demasiado si digo que es respaldada mayoritariamente por todos los grupos parlamentarios, y digo esto teniendo en cuenta precisamente el resultado de la votación del dictamen en el Pleno del Congreso de los Diputados: 317 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Desde luego, eso no quiere decir que el camino para llegar a ese grado de consenso haya sido fácil, como tampoco ha tenido que ser fácil para el Gobierno encontrar un texto que, además de cumplir con los principios básicos que fundamentan este proyecto de ley, articulase una relación equilibrada entre los diferentes agentes involucrados en la actividad cinematográfica y audiovisual. Que ha sido necesario dialogar y negociar con todos esos agentes para encontrar puntos de acuerdos es cierto, y que ha sido necesario negociar y dialogar muchísimo con todos los grupos parlamentarios también; pero no debemos traducir ese hecho en torpezas y tortuosidades, como se comentaba el otro día en la Comisión de Cultura, sino más bien en una decidida voluntad de mejora del texto original.

Por ello, señorías, en el Congreso de los Diputados se han incorporado al texto remitido por el Gobierno 43 enmiendas en sus propios términos y otras 120 mediante transacción. El Grupo Parlamentario Socialista quiere manifestar su satisfacción por la decidida apuesta del Gobierno en la tramitación de este proyecto de ley, por el enriquecimiento que ha tenido a su paso por el Congreso de los Diputados, así como por el debate que hoy celebramos en esta Cámara, casi a punto de finalizar la legislatura, que esperamos que también sirva para mejorar el texto remitido por el Congreso, lo que va a permitir al sector cinematográfico contar con un nuevo marco regulador en el próximo ejercicio.

Gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (*Pausa.*)

Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar tiene la palabra el senador Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

El Bloque Nacionalista Galego ha presentado 11 enmiendas a este proyecto de ley, que consideramos positiva, pero tímida en las reformas que acomete, y por eso manifiestamente mejorable a través de la presentación de enmiendas en su trámite en el Senado. En particular, consideramos que es necesaria una mayor precisión a la hora de apoyar a los distribuidores independientes; también, dotar de mayor apoyo a la exhibición, sobre todo en un contexto de crisis de las salas, con una mayor incidencia en las ciudades pequeñas y los pueblos; y se hace necesario asimismo un mayor apoyo al cine en galego, euskera y catalán. A estas grandes cuestiones se refieren la mayoría de las 11 enmiendas presentadas por el BNG, que paso a comentar.

Nuestra enmienda número 3, al artículo 4, letra ñ), propone homologar las condiciones establecidas para ser distribuidor independiente con las que se definen en el propio proyecto de ley para el productor independiente. Consideramos que de esta manera se asegura una mayor claridad en la definición para dar un apoyo realmente efectivo a los distribuidores independientes. Además, se establecen unas pautas de mercado iguales para todos los agentes: productores, distribuidores y exhibidores. Por otra parte, en la citada enmienda también se propone eliminar las referencias a la participación mayoritaria de capital público como límite para acceder a las ayudas. Consideramos que la participación de capital público no proporciona una posición de dominio, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con la participación de las distribuidoras norteamericanas. Además, señorías, tengan en cuenta que las actividades de fomento por parte de la administración resultan fundamentales para el desarrollo de una industria y para contribuir a la normalización cultural, en particular en comunidades con lenguas propias.

La enmienda número 4, al artículo 14, propone establecer un período mínimo de seis meses desde el estreno de una obra cinematográfica en las salas de exhibición antes de la comercialización de las producciones de cine en formatos de DVD en alquiler o venta, a través de soportes de nuevas tecnologías o mediante difusión en televisión de pago o en abierto. Con ello, señorías, pretendemos evitar la grave perturbación, especialmente perjudicial para las salas de exhibición, que representa que durante el período en que se exhiben las películas estrenadas se acceda a estas por otros soportes o medios que afectan negativamente a la estructura de exhibición.

La enmienda número 5, al artículo 19, se refiere a introducir una modificación para que no puedan beneficiarse

de las medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y a lo audiovisual las empresas productoras no independientes en los términos que reglamentariamente se establezcan. Consideramos que de esta manera la distribución de los fondos disponibles sería más equitativa entre los sujetos intervinientes.

La enmienda número 6, al artículo 25, que regula las ayudas a la producción de largometrajes sobre proyecto, propone añadir un nuevo apartado que establezca que dicho fondo de ayudas sobre proyecto contará con una dotación presupuestaria mínima del 25 por ciento del Fondo de protección a la cinematografía. En este momento, señorías, la relación entre ayudas automáticas y ayudas sobre proyecto es del 92 por ciento frente al 8 por ciento, según cálculos del propio sector. La nueva relación que proponemos es más equilibrada y posibilitaría la producción de al menos 30 películas al año de especial interés cultural, de nuevos realizadores o con un planteamiento innovador, que de otra manera serían imposibles de financiar.

La enmienda número 7, al artículo 29, se refiere a que en las ayudas a la exhibición se incluyan las empresas de alquiler de vídeo. En consecuencia, la enmienda propone añadir un nuevo apartado que contemple la posibilidad de establecer, en colaboración con las comunidades autónomas y gestionadas por ellas, medidas de apoyo a las empresas de alquiler de vídeo que incluyan en su oferta mayoritariamente largometrajes europeos e iberoamericanos en una proporción superior al 40 por ciento. Igualmente, podrán establecerse ayudas a las empresas de alquiler de vídeo que incorporen los nuevos sistemas digitales y a aquellas situadas en pequeños núcleos urbanos o rurales que tengan dificultades para el acceso y la explotación de películas europeas e iberoamericanas.

La enmienda número 8, al artículo 36, pretende que el Fondo para el fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano garantice tanto que se proporcionen ayudas como que se pueda acceder a créditos específicos a lo audiovisual en esas lenguas.

La enmienda número 9, al artículo 37, propone que la promoción cultural en el exterior que desarrolle el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales garantice la presencia de la industria audiovisual española en su pluralidad lingüística y cultural.

Por último, señorías, las enmiendas números 10 a 13 se refieren a establecer incentivos a los exhibidores para paliar la grave crisis de las salas de exhibición. Así, la enmienda número 10, a la disposición adicional cuarta, propone el añadido de un segundo párrafo con el siguiente tenor literal: A los efectos de la resolución de consultas, la administración tributaria admitirá la creación de agrupaciones de interés económico como mecanismos de financiación, aplicándole los beneficios fiscales legalmente previstos, aun en el caso de que la actividad principal de la empresa productora coincida con la actividad a ser desarrollada por la agrupación de interés económico.

Esta propuesta, señorías, es fundamental para el funcionamiento del sistema de beneficios fiscales que crea el presente proyecto de ley. El artículo 3.1 de la Ley 12/1991,

de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico establece de manera taxativa que el objeto de la agrupación de interés económico se limitará exclusivamente a una actividad económica auxiliar de la que desarrollen sus socios. Por lo tanto, si no se incluyera la matización que proponemos en la enmienda, la voluntad del legislador en cuanto a la creación de incentivos fiscales específicos podría quedar en nada, dado que, como es evidente, la principal actividad de las empresas productoras pasa por la producción de obras audiovisuales.

Con la enmienda número 11 se pretende lograr un reconocimiento más preciso y efectivo de la contribución específica que por cuota de pantalla hacen los exhibidores. Por ello, se propone una redacción alternativa a la disposición adicional duodécima del siguiente tenor: Mediante el desarrollo reglamentario, y como complemento de las ayudas previstas en el artículo 29 de esta ley, el Gobierno reconocerá la contribución del sector de la exhibición al acceso de los ciudadanos a la diversidad de la producción cinematográfica a través del cumplimiento de la cuota de pantalla para películas originadas en los Estados miembros de la Unión Europea por medio del establecimiento de nuevas medidas de ayuda o apoyo específico al sector. En dicho reglamento se formulará de manera equitativa la compensación adecuada a la carga económica que la cuota de pantalla implica para los exhibidores.

La enmienda número 12, a la disposición final segunda, propone suprimir la referencia al coproductor financiero, así como la aplicación de un tipo reducido de deducción en la cuota aplicable a este que se fija en el 5 por ciento. Teniendo en cuenta que el objetivo que se persigue es el de hacer accesible e interesante para una generalidad de entidades ajenas al sector audiovisual la inversión en producciones audiovisuales, y específicamente cinematográficas, la calificación de coproductores financieros restaría interés a dicho incentivo. Entendemos, por tanto, que debería eliminarse la distinción entre productor y coproductor financiero, y equipararse el porcentaje de deducción disponible para ambos, de manera que el beneficio fiscal tenga una magnitud verdaderamente importante para los potenciales inversores.

Por último, y en este mismo sentido, la enmienda número 13 a la disposición final segunda propone introducir un concepto amplio de productor a los efectos del artículo 38.2, y adicionalmente extiende de forma expresa la condición de entidades productoras a las agrupaciones de interés económico y a las entidades de capital riesgo, en línea con lo que dispone el artículo 21 del proyecto de ley.

Consideramos que estas enmiendas mejoran la ley sustancialmente en los aspectos a los que he hecho referencia en mi introducción, y por ello recabo su apoyo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.

Señorías, tal como han dicho los portavoces que ya han intervenido, el proyecto de ley del cine que hoy debatimos sería, según las palabras del ministro, el señor Molina, el colofón de las leyes presentadas durante esta legislatura por su ministerio, aunque lo cierto es que esta llega con tres años de retraso. Pero, a pesar de ello, el señor Molina hoy no está presente, y queremos suponer que esa circunstancia obedece, como ha dicho la portavoz socialista, al hecho de que se haya adelantado el debate y no a una falta de interés.

Es evidente que el cine puede ser, además de diversión, un vehículo de transmisión de ideas y realidades diversas. Asimismo, es una importante industria que empieza a ser floreciente en nuestro país en todos los ámbitos: producción, distribución y exhibición, todos ellos difíciles de conciliar entre sí y con la administración, algo que debería constituir uno de los objetos del proyecto. No se puede elaborar una ley en contra de los profesionales del sector como tampoco puede hacerse en un país como este, en contra del Estado de las Autonomías. Pero cuando el proyecto llegó al Congreso había invasión competencial, falta de consenso con los sectores implicados, y por tanto, falta de apoyo de los distintos grupos parlamentarios.

A pesar de ello, en su tortuoso paso por el Congreso de los Diputados, tal y como lo calificó uno de los ponentes en comisión, se incorporaron una serie de enmiendas que solventaron muchos de los problemas iniciales: enmiendas competenciales, para una mejor fiscalidad, para el apoyo al conjunto de lenguas de este país o armas para que el exhibidor luche contra la piratería, lo que constituye una de las grandes lacras actuales. Y así llega a esta Cámara, con un amplio consenso, pero con compromisos tácitos para su trámite en el Senado.

A este proyecto hemos presentado cinco enmiendas en el Senado que se corresponden con los números 85 a 90, ambas incluidas, que pasamos a defender. Comenzaré por esta última, ya que sería la primera siguiendo el orden establecido por los artículos del proyecto de ley. En esta enmienda se pretende sustituir la última fase de la letra a) del artículo 5, sobre la nacionalidad de las obras cinematográficas, para evitar un trato distinto hacia el director respecto de los autores de la obra, manteniendo el artículo 2.1, letra a), de la Ley 15/2001, de 9 de julio, en vigor. La frase reza así: En todo caso, se exigirá que el director de la película cumpla siempre dicho requisito —se refiere a la nacionalidad española o a su pertenencia a la Unión Europea—. Pero, ¿por qué se exige que cumpla ese requisito al director y no al resto del equipo? ¿Por qué él no debe cumplir un porcentaje determinado? ¿Para proteger a los nuevos directores? ¿No sería más fácil ampliar el mercado y con ello facilitaríamos su acceso? De aplicarse, podríamos caer en contradicciones tales como no considerar de nacionalidad española algunas de las películas de mayor éxito en la actualidad, a las que precisamente debemos nuestro buen momento y el prestigio en mercados internacionales. Estamos seguros de que no somos los únicos que tenemos esta visión de la realidad. Por ello, esperamos el apoyo de los distintos grupos de esta Cámara a esta enmienda.

Por otro lado, debíamos haber retirado la enmienda número 85, ya que quedó prácticamente asumida en el texto del Congreso de los Diputados.

La enmienda número 86 es idéntica a la enmienda número 10, del Bloque Nacionalista Galego, que ha defendido el senador Jorquera. Es una enmienda a la disposición adicional cuarta, en la que se añade un párrafo que resulta fundamental para el funcionamiento del sistema de beneficios fiscales que crea la ley.

La enmienda número 87, a la disposición adicional undécima, clarifica que la promoción debe favorecer a las producciones de imágenes animadas, ya que con la redacción actual no queda claro que los cortometrajes, los largometrajes y las series a las que se refiere sean exclusivamente de imágenes animadas. Esperamos tener una transaccional al respecto, ya que teníamos el compromiso tácito del Gobierno para que fuese así durante su paso por esta Cámara. Piensen que estamos potenciando una industria naciente que está dando muchos éxitos al cine español.

La enmienda número 88, a la disposición adicional duodécima, no es más que una matización a la transaccional aprobada en el Congreso de los Diputados, con el fin de evitar la contradicción del proyecto legislativo en lo que se refiere a reconocer la contribución específica por cuota de pantalla. No debemos olvidar que la distribución es una industria privada y que, si bien es cierto que es un sector que ha tenido y tendrá que reestructurarse en muchos sentidos para adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, como tal industria privada debe tomar sus propias decisiones. Durante muchos años han sido ellos los que han hecho una aportación positiva a la solución de la cuota de cine, tanto español como europeo. Y si un Gobierno pretende favorecer un determinado tipo de exhibiciones, o se les estimula, o por las malas poco podremos hacer. No olvidemos que todo dependerá de su voluntad. Esta era una de las aportaciones que se debía hacer al paso de esta ley por el Senado; por tanto, es de agradecer el esfuerzo que en este sentido han hecho los distintos grupos con sus enmiendas: la número 11, del Bloque Nacionalista Galego, y la número 35, del Grupo Popular, con fines similares. Esperamos que ustedes reciban esta enmienda transaccional.

La enmienda número 89, a la disposición final segunda, añade un párrafo cuarto, que resulta vital para la implementación de la práctica, con toda la fuerza jurídica de los beneficios fiscales que la ley propone.

En cuanto a las enmiendas transaccionales, permítame, señor presidente, que me refiera al sentido de nuestro voto. Como no puede ser de otro modo, votaremos a favor de las propuestas de la enmienda número 31, del Grupo Popular, por entender que complementa la número 85, si es que se admite la transaccional, y también de las basadas en el artículo 33, del Grupo Popular, y la disposición adicional tercera, sobre el acceso al cine para las personas con discapacidad, si también se admiten.

Apoyaremos asimismo la transaccional basada en la enmienda número 14, del Grupo Popular, y las números 75 y 76, de Entesa, si admiten la transacción que nos ha llegado.

Como verán, señorías, las enmiendas eran tan fáciles de asumir que solo una postura intransigente del Gobierno podía explicar que no llegásemos a acuerdos. Esta es una ley, como decía, que lleva tres años dando vueltas y será aprobada en el último momento. Requería, pues, un pequeño esfuerzo para que se hiciesen realidad las palabras del ministro en su presentación: para que tras su paso por la Cámara Alta se ponga un broche final a la legislatura en el ámbito de la cultura.

Y acabo con su misma frase: la demostración de que el trabajo en común es la mejor de las pautas de actuación para armonizar y dirimir conflictos. Estas palabras las asumimos totalmente, siempre y cuando sean capaces de llevarlas a la realidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Maqueda.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.

Señorías, *arratsalde on danori*. Buenas tardes a todos y a todas. Al igual que han hecho algunos de los senadores que esta mañana me han precedido en el uso de la palabra, en esta mi última intervención desde la tribuna quiero aprovechar para despedirme del señor presidente, de los compañeros senadores, de todo el personal de la Cámara, y agradecerles el apoyo y la amistad que durante estos años hemos tenido aquí. Esperamos haber servido a los que nos han votado y seguir apoyando a los ciudadanos que de una u otra manera confían en las instituciones y en sus representantes, elegidos por la voluntad popular.

Centrándonos en el proyecto de ley del cine, quisiera decir que en nuestra opinión han existido prisas, unas prisas preelectorales, para sacar adelante esta ley del cine. Si vemos las opiniones de las personas que están implicadas en esta ley, las personas del cine, sobre todo las de los exhibidores, nos daremos cuenta de que se oponen al texto porque, a su modo de ver, no recoge las reclamaciones que tenían planteadas.

Esta ley —ya se ha recordado en esta tribuna por los anteriores senadores y senadoras que han intervenido— lleva tres años de retraso y nuestro grupo, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, ha presentado dos enmiendas en el Senado y otras ocho, que fueron transaccionadas, en el Congreso. Voy a referirme de una manera muy breve a las dos enmiendas que planteamos en la confianza de contar con su apoyo.

En primer lugar, hemos planteado una enmienda en la que se proponen modificaciones a los apartados 1 y 2 del artículo 22. Pretendemos que se fomente la creación mediante la concesión de ayudas a personas físicas para la elaboración de guiones de cualquier obra audiovisual y de producciones independientes. En la concesión de estas ayudas se debe considerar la propuesta de un órgano colegiado al efecto que se valore la calidad y originalidad de los proyectos presentados.

Asimismo, proponemos que se concedan ayudas a los productores independientes para el desarrollo de proyectos de cualquier obra audiovisual de producción independiente, tales como largometrajes, películas de televisión, pilotos de serie de animación, etcétera, siempre y cuando estén de acuerdo con el apartado anterior.

A nuestro modo de ver, no es coherente que la ley hable de fomento de la creación en general de obras audiovisuales y que en el artículo 22 se refiera exclusivamente a los largometrajes. Es necesario que en este artículo se establezcan también ayudas para la creación y el desarrollo de otros tipos de obras.

Por último, con la enmienda número 2 proponemos la creación de una nueva disposición adicional en la que planteamos situar las políticas de fomento y promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual en el entorno competencial que les corresponde, articulando para su eficacia e integración una referencia imprescindible a los mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación de las administraciones públicas.

Termino, señor presidente, diciendo que aunque en la comisión no se alcanzó ningún acuerdo, sí hay que decir que hemos llegado a él en diferentes transaccionales con los distintos grupos, por lo que manifestamos nuestro total apoyo a la ley.

Muchas gracias. *Eskerrik asko. (Aplausos.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: *(El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.) Graciès, senyor president.*

«*El nostre grup, malgrat l'acord a què es va arribar in extremis al Congrés de Diputats en alguns aspectes d'aquesta Llei, ha volgut mantenir les esmenes que continuaren vives després d'aquell acord, per significar que aquesta llei encara és des del nostre punt de vista i des del punt de vista del Govern de Catalunya manifestament millorable sobretot en dos àmbits per a nosaltres fonamentals en les lleis de Cultura: el del reconeixement i el foment de la pluralitat cultural i lingüística de l'Estat, i el de les competències exclusives de la Generalitat en matèria de Cultura.*»

Por imposición legal continuó en castellano esperando una pronta y plena normalización del uso del catalán, el gallego y el euskera en este Pleno.

Decía que nuestro grupo, a pesar del acuerdo al que se llegó in extremis en el Congreso de los Diputados en algunos aspectos de esta ley, ha querido mantener las enmiendas que continuaban vivas después de dicho acuerdo para significar que este texto legal aún es, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista del Gobierno de Cataluña, manifestamente mejorable, sobre todo en dos ámbitos para nosotros fundamentales en las leyes relativas a la cultura como son el reconocimiento y el fomento de la pluralidad.

lidad cultural y lingüística del Estado y el de las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de cultura.

De las 48 enmiendas que ha presentado nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, pedimos al grupo del Gobierno —y nos parece que no es mucho pedir— que acepte nuestras enmiendas números 71 y 78, que nuestra Consellería de Cultura nos señalaba como significativas y que seguramente podrían ser asumidas por el ministerio. Esperaremos hasta el último momento para ver si es posible el acuerdo, aunque no figuren en ninguna de las enmiendas transaccionales que nos han propuesto y que apoyaremos, aunque molestos porque ninguna se refiere a las dos cuestiones mencionadas: la pluralidad cultural y lingüística y las competencias, que para nosotros son fundamentales y en las que cabría mejorar aún mucho la ley.

Nuestra enmienda número 71 pretende modificar el artículo 29.1, que dice: «Con objeto de favorecer el acceso de los espectadores a la diversidad de la producción cultural —nosotros añadimos “y lingüística”—, se podrán establecer, en colaboración con las comunidades autónomas y del modo que reglamentariamente se determine, medidas de apoyo para las salas de exhibición independientes que en su programación anual incluyan, en una proporción superior al 40 por ciento, largometrajes comunitarios e iberoamericanos —nosotros añadimos: “y largometrajes en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado distintas del castellano”—, con preferencia hacia aquellas que los ofrezcan en versión original subtitulada, así como un número mínimo de cortometrajes con las mismas características».

Consideramos que esta enmienda es perfectamente asumible e importante para fomentar precisamente la difusión de la pluralidad lingüística del Estado, también en aquellas comunidades autónomas que tienen solamente una lengua.

Nuestra enmienda número 78 pretende adecuar mejor la ley, en lo que se refiere al ámbito competencial, a lo que establece el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña. Creemos que hay que suprimir algunas referencias a la disposición adicional tercera de la Constitución en lo relativo a la definición del ámbito competencial porque, en nuestra opinión, es el Estatuto de Autonomía de Cataluña el que define algunas de estas cuestiones; concretamente, los artículos 11 y siguientes de esta ley del cine regulan la producción, la distribución y la exhibición de películas, y al respecto cabe destacar que el artículo 127.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece la competencia exclusiva de la Generalitat sobre cultura, que comprende, en todo caso, la regulación en la inspección de las salas de exhibición cinematográfica, las medidas de protección de la industria cinematográfica, la calificación de películas y los materiales audiovisuales en función de la edad y los valores culturales.

Por tanto, es la Generalitat la que debe regular si los productos, las empresas distribuidoras y las salas deben estar o no inscritas en un registro, cómo se efectúa la acreditación del coste de las películas o el control de asisten-

cia y rendimiento de las obras cinematográficas, las normas de las salas X o la cuota de pantalla.

Las normas del proyecto de ley sobre estas materias, además de presentar una minuciosidad impropia de la normativa básica, no tienen una trascendencia económica que justifique la invocación del título 149.1.13.^a de la Constitución.

Las ayudas previstas en las secciones 2.^a y 3.^a del Capítulo III tienen una finalidad eminentemente cultural. Si bien las ayudas indicadas tienen una incidencia económica en el sector audiovisual, no se puede pretender que afecten de forma general a la actividad de las salas. Por consiguiente, mantenemos esta enmienda a la espera del apoyo del grupo que sustenta al Gobierno.

Consideramos que estas enmiendas deberían ser aprobadas, y de esta manera contribuiríamos a reforzar la pluralidad del Estado y la estructura de un Estado compuesto.

Moltes gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Gallego.

La señora GALLEGO ESPERANZA: Gracias, señor presidente.

Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular van encaminadas a mejorar en la medida de lo posible una ley que, aunque consensuada en lo general, se queda ya corta en el marco de la realidad presente.

El Grupo Parlamentario Popular presenta 23 enmiendas, de las cuales 15 son de modificación y 8 de adición. En un mismo bloque hemos incluido las enmiendas de adición números 19, 21, 22 y 24 y las de modificación números 26 y 33, que se corresponden a los artículos 19.2, 24.1, 25.2, 27.1, 29.3 y a la disposición adicional tercera del presente proyecto de ley.

Todas estas enmiendas tienen en común la voluntad de que la accesibilidad para las personas con cualquier discapacidad debe exigirse y reflejarse en todo el texto de la presente norma, garantizando así de manera clara y contundente el derecho de acceso en condiciones de igualdad.

En su día, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Cermi envió a los grupos parlamentarios una serie de propuestas para la elaboración del presente proyecto de ley. El Grupo Parlamentario Popular recogió en sus enmiendas estas sugerencias. Hoy, las que no han logrado salvar el escollo del debate en el Congreso de los Diputados las defendemos aquí, con el ánimo de que se protejan los derechos de las personas con discapacidad mediante una legislación efectiva que garantice la plena inclusión de este amplio colectivo.

En un segundo bloque hemos incorporado las enmiendas de modificación números 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30 y 32, correspondientes, respectivamente, a los artículos 23.1, 26.2.b), 29.1, 29.3, 33, 34.1, 35.1, 40.1 y a la disposición adicional segunda. Todas ellas se han presentado basándose en que la seguridad jurídica, que conlleva toda norma, exige limitar al máximo los términos ambiguos.

Señorías, es evidente que esta elemental premisa no se cumple en este proyecto de ley, donde la perífrasis permite navegar a sus inspiradores por el mar de la ambigüedad. Ello nos lleva a la conclusión, navegando también nosotros entre la lítote y la perífrasis, que este asunto pedía otra pluma.

El artículo 4, en sus apartados n) ñ), q) y r), hace referencia a la enmienda número 15, de modificación, mientras que las enmiendas números 16 y 17 son de adición y se refieren a los apartados q) y r) respectivamente.

La enmienda número 15 pretende mantener la definición vigente del productor independiente, de conformidad con el artículo 3, párrafo g) de la Ley 25/1994 y el artículo 10. c) del Real Decreto 526/2002, de 14 de junio. Las especificaciones de los puntos 1 a 5 deberían ser objeto, en su caso, de desarrollo reglamentario. Una nueva ley audiovisual deberá recoger estos extremos. Con esto pretendemos no modificar lo que queda de las relaciones entre televisiones y productores. Por un acuerdo con el Gobierno, quedaron en respetar el statu quo. Nosotros entendemos que al modificar considerablemente la definición de productor independiente esto no se respeta.

Por ello, sin entrar en más debate, mantenemos y defendemos el texto vigente.

Dentro también del ámbito del artículo 4, hemos presentado las enmiendas números 16 y 17, donde se incluye la definición de empresa de alquiler videográfico y de distribuidor videográfico independiente, para afrontar con las garantías necesarias el artículo 9 del presente proyecto de ley en el que se hace referencia a los alquileres videográficos.

En la enmienda número 18, de adición al artículo 10, proponemos añadir un nuevo apartado 2. Dicho artículo versa sobre la defensa de la libre competencia. Nuestro grupo parlamentario enmienda con el objetivo de eliminar que se produzcan varias ediciones de un mismo título y garantizar los derechos legítimos del titular.

Entre otras enmiendas, en la número 14, de modificación a todo el proyecto de ley, se solicita que donde aparezca el término «órgano colegiado» aparezca «órgano colegiado, cuya composición reflejará la pluralidad de los sectores y cuyos criterios de actuación serán públicos, transparentes y recurribles». Señorías, es necesario dar mayor precisión a los órganos colegiados. Ya sabemos que las leyes administrativas explican qué es un órgano colegiado, pero ello no es óbice para que, para algunos efectos precisos del presente proyecto de ley, lo hubiéramos definido mejor.

Señorías, ciertamente es alarmante que la concesión de las previstas ayudas al desarrollo por y para proyectos no puedan ser objetivables, y que el único requisito que se le pida a los múltiples órganos colegiados, a los que el proyecto de ley remite, sea la paridad entre hombres y mujeres; todo lo demás se deja al libre albedrío del director de la agencia o del instituto.

En lo que se refiere a la enmienda adicional primera, ya desde su tramitación en el Congreso de los Diputados se ha observado una preocupación por parte de la mayoría de

los grupos parlamentarios por el hecho de que la futura agencia estatal de la cinematografía y las artes audiovisuales se liquide simplemente con un cambio de denominación en una disposición adicional. Según el proyecto de ley que hoy debatimos, las funciones y la estructura orgánica de la agencia serán las que determine el estatuto por el que esta se rijan; evidentemente, esto implica que el Parlamento ya no podrá intervenir en lo que suceda en la agencia.

El debate que hoy nos ocupa puede ser una buena ocasión para afrontar las garantías necesarias que requiere ese traspaso, y evitar así que se convierta en una fórmula para salir del paso. Así, nuestra enmienda 31 a la disposición adicional primera surge con la intención de prefijar las funciones y la composición de la futura agencia y de buscar un marco de seguridad jurídica que sienta las bases para vertebrar mejor el futuro estatuto por el que se vaya a regir.

Las enmiendas de modificación números 34 y 35, concernientes respectivamente a las disposiciones adicionales undécima y duodécima, afectan a dos sectores relevantes de la presente ley: el sector de la animación y el de la exhibición. Nuestro grupo, consciente de la complejidad de estos sectores, ha adoptado en todo momento una actitud positiva en torno a sus propuestas e iniciativas. Es evidente que, tras su paso por el Congreso, algunas han quedado muy limitadas, pero no sería justo ocultar que otras se han convertido en logros de interés para ambos sectores. No obstante, nuestra enmienda 34, que afecta al sector de la animación, propone una mejora técnica que permita precisar el objeto de los convenios entre Radiotelevisión Española y el sector, al margen de la inversión legal del 5 por ciento por parte de los operadores de televisión. Ni que decir tiene que Radiotelevisión Española debería poner un poco más de su parte y arbitrar un compromiso más serio y menos ambiguo con el sector de la animación, que es lo que realmente demanda este. El sector reconoce que, a la hora de negociar con las televisiones de otros países, les perjudica el hecho de no contar con un apoyo más comprometido de nuestra televisión pública. Evidentemente, esto supone en ocasiones una pérdida de competitividad del sector de la animación española en el exterior, lo que se puede traducir en una merma de la generación de puestos de trabajo.

En lo que respecta al sector de la exhibición, a nuestro grupo le consta que es uno de los más descontentos con este proyecto de ley. Con la enmienda número 35 pretendemos dotar de efectividad al reconocimiento de la contribución de las salas de exhibición en un intento de implementar fórmulas eficaces que van en la línea de las peticiones del propio sector. Para ello, recurrimos a detallar de manera clara el contenido, de manera que el reconocimiento de las ayudas que se especifica en la disposición adicional no sea el mismo que se recoge en el artículo 29 del proyecto de ley.

Para concluir, la enmienda número 36, de adición, crea un apartado nuevo a la disposición final segunda. Así, los cambios propuestos facilitan la implementación práctica

de los beneficios fiscales que propone el proyecto, teniendo en cuenta siempre que el objetivo que se persigue es el de hacer accesible e interesante para la generalidad de las entidades ajenas al sector audiovisual la inversión en producciones audiovisuales, y especialmente en las cinematográficas. Su calificación como coproductores financieros restaría interés a este incentivo. Debe eliminarse la distinción entre productor y coproductor financiero y equiparse el porcentaje de deducción disponible para ambos, de manera que el beneficio fiscal sea de una magnitud verdaderamente importante para los potenciales inversores. Una simple extensión del concepto de productor, sin tener que recurrir a la fórmula de la AIE, simplificaría la estructura. Sin embargo, si se desea instrumentar las inversiones en producciones cinematográficas por medio de esta figura, su previsión expresa en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades como beneficiaria de la deducción aporta una mayor claridad y seguridad jurídica.

Por lo que respecta a las enmiendas de los otros grupos parlamentarios, vamos a apoyar la número 72, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al artículo 34.1, ya que coincide con nuestra enmienda número 28 al mismo artículo. También apoyaremos la número 90, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, y la número 34, que fue transaccionada. De todas maneras, quiero que conste que lamentamos que el Gobierno, con la precipitación que lo caracteriza en la tramitación de los proyectos de ley en esta Cámara, nos presente ahora, de prisa y corriendo, unas enmiendas transaccionales que, en gran medida, reducen e incluso cambian el objetivo de las nuestras. Por ello, no podremos apoyar más que una, a la que ya me he referido anteriormente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para turno en contra tiene la palabra la senadora Navarro.

La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente.

Señorías, utilizo este turno en contra de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos, aunque también podría utilizarlo en contra de algunas de las afirmaciones que aquí hemos podido escuchar. En cualquier caso, me voy a referir solamente a dos de esas afirmaciones, el resto lo dejaré para el turno de portavoces, y, a continuación, comentaré las enmiendas.

La senadora Gallego hablaba de las prisas en la tramitación de este proyecto de ley y de la precipitación en la que nos encontramos, y lo achaca al Gobierno. Creo que todos tenemos muy claro que las prisas y las complicaciones que hayamos podido encontrar a la hora de debatir estas enmiendas y no haber podido hacerlo con calma no han sido por culpa del Gobierno, sino porque esta mañana ha prosperado el veto y no hemos contado con este último margen con el que esperábamos contar, además de que hayamos tenido un periodo festivo y el procedimiento de urgencia con el que venía la ley.

Tampoco estoy de acuerdo con lo que se ha manifestado aquí sobre las prisas electorales, cuando es todo lo con-

trario, más bien podemos decir que las prisas eran precisamente para dotar al sector cinematográfico, como he dicho en mi anterior intervención, de un marco normativo que le permita regular su situación cuanto antes, tan pronto entre en vigor y a partir del próximo ejercicio.

En cualquier caso, señorías, en mi anterior intervención he destacado el grado de consenso que se había alcanzado en el Congreso de los Diputados en la tramitación de este proyecto de ley. El señor ministro, en su intervención en el Congreso, incluso hablaba de ese triple consenso alcanzado entre los sectores involucrados en el sector de la cinematografía y de lo audiovisual, el consenso que también se había alcanzado con las comunidades autónomas y, además, el consenso de los grupos parlamentarios. No obstante, señorías, después de este intenso debate parlamentario, después de esas fuertes negociaciones y de esos acuerdos en los que se alcanzaron esos consensos que comento, todo hacía esperar que en el Senado íbamos a tener pocas enmiendas que debatir ya que parecía que se había culminado todo el proceso de consenso. Sin embargo, lo cierto es que nos encontramos con 90 enmiendas presentadas por los diferentes grupos en el Senado.

Quiero comenzar por la parte que puede significar un acuerdo, y quiero anunciar que votaremos favorablemente la enmienda 30 del Grupo Parlamentario Popular al artículo 40, con el objeto de limitar el sentido del texto de la ley.

Bien es cierto que de las 90 enmiendas tan solo son nuevas 6, 2 del Grupo Parlamentario Mixto, 2 del Grupo Parlamentario Popular y 2 de *Convergència i Unió*. Hemos estudiado con atención estas enmiendas, precisamente por ser nuevas, y de ellas 5, la 11 del Grupo Parlamentario Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, la 34 y 35 del Grupo Parlamentario Popular, la 87 y la 88, de *Convergència i Unió*, sustentan 2 de las 5 transaccionales que hemos presentado a los grupos; si bien tengo que decir que lamento que el Grupo Parlamentario Popular no haya querido firmar más que una de estas transacciones y que, en consecuencia, dos de ellas, al estar basadas sobre enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, lamentablemente no puedan prosperar.

Con respecto a la transacción sobre la disposición adicional undécima, para promoción de la industria española de animación, entendíamos que tan solo era un error de interpretación lo que inducía a los grupos a enmendar las palabras largometraje y cortometraje del texto. Por ello hemos pretendido con nuestra transacción mejorar la redacción para que quedase clara y no suscitase ninguna duda.

Con respecto a la transacción que hemos presentado a la disposición adicional duodécima, sustentada sobre la enmienda 11, del Bloque Nacionalista Galego, y la 85, de CiU, referente a la exhibición cinematográfica y al acceso a la diversidad de producción, consideramos que queda notablemente enriquecida al insistir y destacar las ayudas destinadas a la modernización tecnológica de las salas, al apoyo a las que están radicadas en pequeños núcleos rurales, así como a la adaptación a las salas y a las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.

En cualquier caso y por referirme al grupo de enmiendas que no han sido atendidas y que también se refieren a la exhibición en el proyecto de ley, quiero destacar y resaltar las amplias medidas de apoyo que están recogidas en el texto que nos remite el Congreso de los Diputados, principalmente en los artículos 14, 15, 16, 18, 19, 29, 33, 35 y 36 bis nuevo, disposición adicional nueva, y que resultan de la suma del contenido original de la ley, del texto remitido por el Congreso, y de las enmiendas que fueron incorporadas por los diferentes grupos, en número no inferior a 35. Por lo tanto, señorías, consideramos que las demandas de este sector de exhibición están suficientemente atendidas, al igual que las reivindicaciones de los diferentes grupos parlamentarios.

Otra de las transacciones propuestas, aunque no prospere, era a la disposición adicional primera, que estaba sustentada sobre la enmienda número 31, del Grupo Parlamentario Popular. No obstante, la quiero explicar. No podemos atender al contenido de la totalidad de la enmienda dado que la configuración de la agencia se establecerá de acuerdo con lo previsto en la Ley 28/2006, de Agencias Estatales, pero queríamos extraer de ella el contenido de promoción y defensa de la cultura audiovisual para la infancia y la juventud e incluirlo en el texto de la ley como otro de los fines de la agencia. En cualquier caso, no va a poder ser, y lo lamentamos.

Otra de las transacciones propuestas por mi grupo es a la disposición adicional segunda, referente a órganos colegiados y sustentada en las enmiendas números 75 y 76, de Entesa, que enriquece el texto original propiciando la participación de los sectores profesionales relacionados con la materia de la que conozca el órgano colegiado correspondiente.

El sentido de la transaccional a la disposición adicional tercera, sustentada en la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario Popular, que tampoco va a prosperar, era incorporar al texto lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, tal y como nos proponía el grupo enmendante.

El resto de enmiendas no las podemos atender por coherencia con el criterio de mi grupo fijado en el Congreso de los Diputados. Un grupo de estas enmiendas contiene argumentos que no son el objeto ni la finalidad del proyecto de ley.

Existe otro grupo de enmiendas que se mantienen vivas, y ya consideramos en la comisión la conveniencia de su retirada bien por haber sido objeto de transacción en el Congreso de los Diputados, bien porque la enmienda refleja literalmente el propio texto de la ley. En ese sentido, tampoco han sido objeto de nuestra consideración ya que están recogidas.

Distinguimos también un bloque de enmiendas que se refieren a la accesibilidad de las personas con discapacidad. El compromiso con la accesibilidad ya está articulado mediante ayudas a la distribución y a la exhibición, sin necesidad de establecer medidas de carácter coercitivo en el ámbito de la producción, además de las medidas que se recogen para el disfrute de las obras cinematográficas y

audiovisuales que se reflejan en la disposición adicional tercera.

Otro grupo de enmiendas están encaminadas a recabar una mayor intervención del Estado. No las podemos apoyar, ya que estamos ante relaciones privadas dentro de un sistema de economía de libre mercado y por ello, señorías, la intervención del Estado solo sería justificable si existiera un bien jurídico superior de orden social, cultural o colectivo que proteger frente al puramente particular o a un sector empresarial.

Otro grupo de enmiendas están relacionadas con el empleo de términos que aportan una mayor seguridad jurídica, aunque entendemos que la concesión de ayudas siempre va a estar condicionada a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

Otro bloque de enmiendas es el referente a títulos competenciales, pero ya han sido objeto de transacción con la introducción de un nuevo artículo 35 bis y de una disposición adicional nueva y con la modificación de la disposición adicional quinta, que prevé la creación de un fondo específico para el fomento de la cinematografía y de lo audiovisual en lenguas cooficiales.

Finalmente, respecto a la enmienda 90, de Convergència i Unió, que ha defendido con interés y respecto de la cual el Grupo Parlamentario Popular ha anunciado su apoyo, aunque entendemos su justificación, no debemos perder de vista uno de los principios en los que se fundamenta la ley, y así lo recoge la exposición de motivos, que es el respaldo a la creación y a los autores como fuente y origen de la relación que las obras tienen que mantener con sus destinatarios naturales, los ciudadanos. Por ello, señorías, nos parece imprescindible que el director de una película que sea considerada netamente española posea esta nacionalidad ya que precisamente es esa capacidad creativa del director la que determina el contenido final de la película, por más que esta se derive de un trabajo en equipo. La exigencia de que el director cumpla siempre este requisito de nacionalidad surge de un decidido respaldo a la creación cinematográfica europea y, por tanto, también española, como garantía de la salvaguarda de la diversidad cultural de nuestro entorno.

Por ello, debe quedar claro que en el caso de que una productora desee contar con un director extracomunitario tiene plenamente abierta la posibilidad de realizar la película en régimen de coproducción y, de hecho, el párrafo del artículo 5 al que alude la posible enmienda no varía el statu quo derivado de la vigente Ley 15/2001, ya que en ella se determina que el 75 por ciento de los autores tienen que ser de nacionalidad comunitaria, y teniendo en cuenta que, de acuerdo con esa norma, solo se cuenta con tres creadores para establecer la proporción y nunca se puede llegar a ese porcentaje del 65 por ciento si el director no posee la nacionalidad comunitaria.

Señorías, tan sólo me resta felicitar al Gobierno por la tramitación decidida de esta ley, agradecer el trabajo de los grupos parlamentarios y destacar la voluntad de nuestro grupo parlamentario, creo que de todos, por mejorar el texto que nos ha remitido el Congreso, a pesar de la poca

calma de la que hemos dispuesto para poder desarrollar nuestro trabajo con satisfacción. Hemos tenido que correr para tramitar el proyecto de ley en este momento, con esa urgencia que comentaba anteriormente, con esas fechas festivas, y el veto que, como decía, se nos ha cruzado en la tramitación de esta ley y nos ha dejado sin un margen final de maniobra. Cuando decía que felicitaba al Gobierno, quería incluir también a los dos ministros que se han ocupado de la ley: la ex ministra Carmen Calvo y el ministro César Antonio Molina.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Intervengo para manifestar que acepto la propuesta de transacción sobre la base de la enmienda número 11 del Bloque Nacionalista Galego y la número 88 de Convergència i Unió. Mantengo el resto de las enmiendas presentadas por el BNG y manifiesto mi disposición a apoyar la mayoría de las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y Entesa Catalana de Progrés, por entender que son concomitantes en su fundamentación con las enmiendas del BNG. Se trata de concretar más las medidas de apoyo a la exhibición, al cine en gallego, euskera y catalán y preservar los ámbitos competenciales, aparte de las enmiendas del BNG que insisten en la necesidad de dotar de mayor apoyo a los distribuidores independientes, un aspecto en el que creemos que la ley es manifiestamente mejorable.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Perestelo.

El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para fijar la posición de mi grupo parlamentario de apoyo al proyecto de ley. Desde la perspectiva de Coalición Canaria, que aunque no ha presentado enmiendas al proyecto ha vivido el debate parlamentario, hay que valorar el importante esfuerzo de aceptación de enmiendas realizado por el grupo que apoya al Gobierno, tal como ha sido manifestado. Sin embargo, existen todavía enmiendas vivas, y no sólo las transaccionales que han sido firmadas también por Coalición Canaria, en el sentido del apoyo a los productores, distribuidores y exhibidores que se planteaba en las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego y respecto al marco competencial. Al final, las enmiendas se han movido en torno al mayor apoyo a todo el sector del cine, al marco competencial y, también, algo tan importante, recogido en algunas transaccionales y en algunas enmiendas, como el acceso

de los discapacitados a este sector. Por tanto, nosotros votaremos a favor de este proyecto de ley, apoyaremos algunas de las enmiendas planteadas que recogen estos aspectos fundamentales y, en definitiva, podemos felicitarlos todos porque creo que podemos hablar de un proyecto de ley con un nivel de consenso bastante aceptable.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Perestelo. ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.

Intervengo para manifestar la postura de nuestro grupo parlamentario en relación con las enmiendas vivas. Vamos a apoyar las enmiendas mantenidas por el Grupo Parlamentario Mixto y por Convergència i Unió. Respecto a las que mantiene Entesa Catalana de Progrés, nos vamos a abstener. Apoyaremos la número 30 del Grupo Parlamentario Popular. Y, por supuesto, apoyaremos las enmiendas transaccionadas números 31 y 33, 14, 75, 76, 34 y 87, la número 11 del Grupo Parlamentario Mixto con las números 35 y 88 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: *(El señor Senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones): Gràcies, president.*

«Intervendré breument per subratllar que al llarg d'aquesta legislatura hem vist algunes lleis molt importants per al món de la cultura, per a l'adaptació de la Cultura i de les polítiques culturals als grans canvis socials i tecnològics associats a la globalització, per potenciar les indústries culturals pròpies tot protegint i fomentant la creativitat dels nostres agents culturals i la diversitat cultural i lingüística dels ciutadans i els territoris de tot l'Estat.»

Continúo en castellano, como siempre por imperativo legal y contra mi voluntad, diciendo que intervendré brevemente para subrayar que a lo largo de esta legislatura hemos debatido algunas leyes muy importantes para el mundo de la cultura, para la adaptación de la cultura y de las políticas culturales a los grandes cambios sociales y tecnológicos asociados a la globalización, así como para potenciar las industrias culturales propias, protegiendo y fomentando a la vez la creatividad de nuestros agentes culturales y la diversidad cultural y lingüística de los ciudadanos y de los territorios de todo el Estado. En todas estas leyes —de propiedad intelectual, del libro y las bibliotecas

y ahora la del cine— hemos conseguido introducir mejoras, lo que ha hecho que votáramos a favor, aunque siempre nos ha quedado un resquemor. Primero, porque en la elaboración de estas leyes el ministerio ha sido poco sensible con la pluralidad cultural y lingüística del Estado, ha tenido poca consideración con las lenguas y culturas distintas al castellano y una consideración insuficiente hacia la necesidad de protección que tienen los creadores de productos culturales en estas lenguas, que cuentan con un mercado más reducido y que podrían beneficiarse de lo que representa el mercado de todo el Estado español, europeo y latinoamericano si el ministerio y las leyes previeran mecanismos para ello.

Tal y como dicen nuestro consejero de cultura y nuestras consejeras —me refiero a las consejeras vasca y gallega— en un manifiesto institucional sobre el aspecto lingüístico —hecho público hoy mismo, aprovechando la celebración de la Conferencia Sectorial de Cultura—, si muchas lenguas fuertes requieren promoción ante el empuje de las lenguas mundiales dominantes, ¿qué no tendrán que hacer lenguas como el euskera, el gallego o el catalán en situación diglósica? En culturas relevantes pero minoritarias como las nuestras, por ausencia de economía de escala, está más que asegurada la entrada de la cultura internacional y mayoritaria del Estado; lo difícil son las salidas para la producción propia y el acceso al propio mercado de proximidad con los propios lenguajes y en condiciones de igualdad. Por ello, la política de excepción cultural o, mejor dicho, la política cultural de la diversidad no solo es aplicable a los Estados, sino, con mucho más motivo, a nuestros países y sus respectivos patrimonios lingüísticos y culturales.

Anteriormente me refería a un cierto resquemor o, más bien, a un sabor agridulce durante la tramitación de estas leyes de cultura, pues nos parece —excepto en el último tramo de esta ley del cine, ya con el nuevo ministro, César Antonio Molina— que no ha habido una suficiente interlocución con las consejerías de Cultura, particularmente, con las de las comunidades con lengua propia distinta al castellano, cosa que, aparte de una politización excesiva de determinadas cuestiones que se podían tratar más técnicamente en una negociación previa con las consejerías, ha supuesto invasiones competenciales que luego se han tenido que pulir durante el trámite parlamentario, no sin tensiones graves, como ha sido el caso de la presentación de vetos.

Si hablamos en positivo, esta ley, aunque insuficiente, nos proporciona algunos instrumentos que no desaprovecharemos para el fomento de la industria catalana del cine, que encuentra grandes dificultades añadidas cuando intenta crear y difundir productos originales con personalidad propia, más aún si son en catalán. También es cierto que esta ley avanza hacia una nueva concepción de lo que debe ser el mundo de la televisión, para que cumpla los principios de servicio público en relación con el sector cinematográfico.

Esperamos que nuevos desarrollos legislativos en el Estado español, sobre todo en Cataluña, nos permitan dar un nuevo impulso al sector cinematográfico catalán.

No puedo terminar mi intervención en esta legislatura en relación con una ley cultural sin expresar el deseo de nuestro grupo para que en la próxima legislatura los responsables estatales de cultura refuercen su atención a la creación y producción cultural en catalán, euskera y gallego y creen organismos específicos para el fomento y la difusión de la pluralidad cultural y lingüística del Estado español en colaboración con las consejerías de cultura de las comunidades autónomas con lengua propia distinta al castellano.

Finalmente, señor presidente, permítame decirle que retiramos todas nuestras enmiendas, excepto las números 71, 72 y 78, que esperamos cuenten con el apoyo de los demás grupos y que los senadores del Grupo Parlamentario de Entesa votaremos en bloque.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Álvarez Fernández.

El señor ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Buenas tardes, señor presidente, señorías.

Hemos oído decir continuamente de este proyecto de ley que viene al final de la legislatura, que viene con prisas y que viene fuera de tiempo. Yo no sabía que desde junio deberíamos haber tenido vacaciones, pero lo cierto es que aquí están viniendo proyectos de ley porque se gobierna hasta el último momento y porque los senadores seguimos trabajando hasta el final. Por eso viene este proyecto de ley del cine a este Pleno para que lo debatamos. Vamos, pues, a hablar de cine. Y como decía la canción: Más cine, por favor, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cumplimos con los sueños y los deseos de la gente, cumplimos con los sueños y los deseos de un sector tan importante como el cinematográfico y audiovisual, el sector cultural y el sector industrial.

Desde luego, es un proyecto de ley que ha tenido una gestación larga —han sido tres años y medio—, pero no por eso podemos admitir que su tramitación haya tenido el calificativo de tortuosa, como se ha querido dar a entender en algunos aspectos. Creemos que ha sido un proyecto participativo y dialogado, de ahí esos tres años y medio hasta llegar aquí. Encontrar a los sectores de la cultura y de la industria en algunos casos es difícil, pero yo creo que este proyecto de ley, con el trabajo de todos, lo consigue y pone en valor. Como digo, ha sido una ley reclamada por los sectores y, por tanto, da respuesta a esa demanda, como así lo han entendido y debatido todos los grupos políticos durante todo este tiempo para que llegue formalmente a este Pleno y hoy se pueda aprobar.

La ley del cine, que viene hoy para su aprobación, aborda todo el panorama legislativo que ha habido hasta la fecha y es la primera gran ley que habla como eso, como ley del cine. Hasta ahora todo lo que se había hecho era ir remendando y poniendo parches a un sistema cinematográfico, pero no se abordaba la problemática en sí desde la denominación fundamental e importante de ley del cine.

Como digo, el proyecto de ley recoge todo el panorama legislativo vigente y todas las variaciones experimentadas hasta la fecha en el marco legal.

Y hay un objetivo fundamental que esta ley defiende y lleva adelante: el equilibrio de todos los sectores con igualdad de oportunidades para todos. En esta ley se ven reflejados, como hemos dicho, todos los sectores, todo aquello que participa en el mundo cinematográfico y audiovisual. Pero me gustaría resaltar varios aspectos importantes de este proyecto de ley. Primero, definición y apoyo a los sectores independientes. Por primera vez en una gran ley importante de la cinematografía y de lo audiovisual se recoge la definición de cine independiente, de producción independiente, distribución o exhibición frente a las multinacionales o frente a las televisiones. Segundo, se recogen los nuevos formatos que hasta ahora no se habían recogido por la evolución de los medios técnicos y de las nuevas tecnologías. Por tanto, se actualiza todo ese medio en el que venía desarrollándose el mundo de la cinematografía.

Tercero, el respaldo a la creación y a los autores como origen de la obra y la relación con los ciudadanos. Hasta ahora tampoco se había dado un respaldo importante a nuestros autores, a nuestros creadores. Cuarto, se habla por primera vez del patrimonio cinematográfico español. Ahora que estamos en un mundo en el que pretendemos mantener, preservar y difundir nuestro patrimonio histórico es importante que se empiece a hablar del patrimonio tangible y del intangible, y un aspecto importantísimo de esta ley es el patrimonio cinematográfico existente en este país. Quinto, los incentivos fiscales beneficiosos para invertir en cine. A partir de ahora a las empresas les será muy interesante invertir en productos cinematográficos. Se crea un fondo de protección a la cinematografía y a lo audiovisual, con lo cual queda garantizado el equilibrio y la equidad en el reparto de ayudas, un aspecto muy importante de esta nueva ley del cine. Se avanza en ayudas a proyectos y se incluyen películas para televisión y series de animación. Por primera vez en una gran ley del medio audiovisual se incluye la animación, con lo cual se va a dar un impulso fundamental al sector.

Se flexibilizan las condiciones de la cuota de pantalla. A partir de ahora se contabilizará en sesiones y no en días, cuestión actualmente muy demandada por el sector. Implica también medidas de género para la actividad creativa de dirección y de guión. Se considera, por primera vez, al director de fotografía como autor de una obra, se favorece el disfrute del cine a las personas con discapacidad, se transforma el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en agencia estatal.

Señorías, como dijo Juanma Bajo Ulloa, la regeneración en el cine es tan importante como mudar el aire de los pulmones, cambiar los números de un circo o las obras de un museo. Yo creo que esto lo consigue la ley, una ley necesaria, una ley oportuna, una ley clara, una ley participativa, una ley que va a aumentar la capacidad competitiva de nuestro cine en el mundo, una ley que crece en las condiciones fértiles para hacer cine, por supuesto también en

colaboración con las comunidades autónomas porque se trata de sumar.

El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.

El señor ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Voy terminando, señor presidente. Por ello, señores senadores, como somos un poco *Alatriste*, aunque nos creamos como *El Hombre de arena*, incluso algunas *Mataharis*, que nos pasamos media vida haciendo una tesis de *Los otros*, que lo que queremos es *Volver* para no encontrarnos en *El orfanato*, aunque los partidos son muchas veces como *El Laberinto del Fauno*, y para no perdernos utilicemos *La carta esférica*, no acabemos en *El club de los suicidas*, les pido a todos que aprobemos esta ley porque —como dice el título de una película— *Un buen día lo tiene cualquiera*. Por favor, señorías, vayan al cine. Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista*.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Van-Halen.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias.

Señor presidente, señorías, me temo que aunque el consejo de nuestro compañero que acaba de tomar la palabra sea seguido por todos los senadores, no creo que disminuyan demasiado los 30 millones de espectadores que ha perdido el cine español en los últimos dos años y medio, aunque vayamos mucho al cine.

Me parece muy bien que esta ley les parezca muy buena a los senadores socialistas, pero no es una buena ley porque es una ley corta. No es una ley del siglo XXI, no es una ley que incorpore el audiovisual, que sería muy importante. Esperemos que en la legislatura que viene el Gobierno popular traiga a esta Cámara y al Congreso previamente una ley del sector audiovisual a la altura del siglo XXI, del momento en que estamos.

Ante todo quiero empezar por lamentar la no presencia de mi viejo amigo el ministro de Cultura, César Antonio Molina, que ha preferido estar —y como representante del Partido Socialista le entiendo— en su circunscripción futura en la provincia de A Coruña en lugar de estar presentando la ley del cine, con lo cual puede que sea cierto lo que dice la ex ministra Carmen Calvo: esta es mi ley, esta es mi ley —como proclamaba el otro día—, porque, desde luego, la intervención de César Antonio Molina en esta ley no ha sido relevante salvo en el fondo este nuevo, que no es el fondo de ir al cine, que ese ya venía de antes y que fue centuplicado con los gobiernos del Partido Socialista.

Esta ley —ha dicho el portavoz socialista y antes la portavoz socialista— no ha sido tortuosa pese a haber durado tres años y medio de tiras y aflojas. Existen en el diccionario muchas palabras que podían utilizarse, pero una de ellas es «tortuosa». Podría decirse que es un camino intrincado, un camino tortuoso. Ese camino es el que ha

tenido la ley del cine que —como todo el mundo sabe— fue descalificada por todos los sectores frontalmente y ahora mismo es descalificada por un gran sector de actores y por los exhibidores. Por tanto, es una ley tortuosa. Es una ley que nosotros vamos a apoyar con los artículos que hemos presentado, defendidos tan bien y tan claramente por la senadora Mercedes Gallego, pero de las 50 enmiendas que presentamos en el Congreso y que fueron aceptadas aquí llegan 23, con lo cual el espíritu de consenso sí ha existido, algo de lo que todos debemos felicitarnos, pero ni es una buena ley ni es una ley para resolver los problemas que tiene el cine en el momento actual ni debemos olvidar los grandes problemas de crisis del cine español que ha habido en los últimos años y en esta legislatura, porque ya que vamos a hablar dentro de unos momentos de memoria histórica, vamos a no tener amnesia. Los problemas del cine no se resuelven, desgraciadamente, con la ley que vamos a votar dentro de unos momentos en esta Cámara.

Señores senadores, a mí no me gusta la palabra crisis, pero en estos últimos años el cine ha atravesado un momento delicado. Ahí tenemos el célebre documento de los profesionales llamado *El cine español suspende al Gobierno*, tenemos el anuncio del congreso catártico que nunca se llegó a celebrar y ahora nos encontramos con que después la patata caliente había pasado de la ex ministra de Cultura a la bombera y socorrista del Gobierno doña María Teresa Fernández de la Vega, que tuvo que intervenir para intentar poner al día los problemas en que había caído la ley y enmendarlos.

El Grupo Parlamentario Popular denuncia las prisas de esta ley, no está de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista con que la ley no ha venido con prisas, pues ha venido con muchas prisas; ha venido para sacar esta ley en esta legislatura, pero yo creo que esas prisas han tenido como consecuencia que no es una buena ley, que no es una ley que responda a los problemas actuales del cine español en todos sus sectores. Aquí se había acusado de que hasta ahora el cine había tenido paños calientes, yo creo que este es un paño caliente más con el nombre de ley. Esperemos que a los sectores cinematográficos les venga bien esta ley —ya sabemos que no a todos— y esperemos que en un futuro esta ley, con más tranquilidad y sin tanta tortuosidad, se pueda arreglar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias señoría. Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley del cine.

En primer lugar, votamos la enmienda transaccional número 101892, sobre la base de la enmienda 34, del Grupo Parlamentario Popular, y la enmienda 87, de Convergència i Unió, firmada por todos los grupos.

¿Se entiende aprobada por asentimiento? (*Asentimiento*.)

Queda aprobada.

La enmienda transaccional número 101893, sobre la base de la enmienda 11, del Bloque Nacionalista Galego,

y la número 88, de Convergència i Unió, tiene la firma de todos los grupos, excepto el Grupo Parlamentario Popular. Se inicia la votación. (*Pausa*.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 132; en contra, 117.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación la enmienda transaccional número 101894, sobre la base de las enmiendas números 75 y 76, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. También tiene la firma de todos los grupos, con excepción del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (*Pausa*.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 133; en contra, 116.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, números 3 a 9 y 12.

Se inicia la votación. (*Pausa*.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 20; en contra, 229.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, números 10 y 13.

Se inicia la votación. (*Pausa*.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 250; a favor, 21; en contra, 229.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 86, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (*Pausa*.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 19; en contra, 229; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 89, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (*Pausa*.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 18; en contra, 231.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 90, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (*Pausa*.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 250; a favor, 136; en contra, 114.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 1 y 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 250; a favor, 20; en contra, 229; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos los números 71 y 78 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 250; a favor, 36; en contra, 214.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos la enmienda 72 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 250; a favor, 131; en contra, 106; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, votamos los números 14, 29, 31 a 33, 35 y 36.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 250; a favor, 116; en contra, 131; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, ahora, el número 30 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 248; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 248; a favor, 117; en contra, 128; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, señorías, votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 247; a favor, 247.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el

Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

— DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA (S. 621/000133) (C.D. 121/000099).

El señor PRESIDENTE: A continuación, señorías, pasamos al dictamen de la Comisión Constitucional en relación con el proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. *(Rumores.)*

Por favor, señorías, guarden silencio. *(Pausa.)*

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador López Carrasco.

El señor LÓPEZ CARRASCO: Gracias, señor presidente.

Señorías, tengo el honor de presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión Constitucional del proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

El proyecto de ley entró en el Senado el pasado día 7 de noviembre de 2007, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en esa misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas concluía el pasado 20 de noviembre de 2007, siendo ampliado hasta el día 26 de ese mismo mes. El proyecto se tramita por el procedimiento ordinario y durante dicho plazo se presentaron dos propuestas de veto, la número 1, del Grupo Parlamentario Popular, y la número 2, de los senadores don Miquel Bofill Abelló, don Lluís Aragonès Delgado de Torres, don Josep María Esquerda Segué y don Carles Josep Bonet i Reves, así como 112 enmiendas distribuidas de la siguiente forma: 18 del señor Urrutia Elorza; 10, del señor Tuñón Sanmartín; 8, del señor Sampol i Mas, y una del señor Jorquera Caselas, todos ellos pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto. Por su parte, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado dos enmiendas; el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado una; el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés ha presentado 52 y el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 20 enmiendas.

La ponencia, reunida el día 28 de noviembre, emitió informe no aceptando las propuestas de veto y dejando para la comisión el debate de las enmiendas. La Comisión Constitucional se reunió el día 28 de noviembre para dictaminar el proyecto de ley. Al inicio de la sesión el senador Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto, retiraba por escrito la enmienda número 36.

En dicha sesión se debatieron y votaron, en primer lugar, las dos propuestas de veto, que fueron rechazadas; a continuación se debatieron las enmiendas al articulado y se retiraron los números 19, 21, 22, 23, 24 y 25 del senador Tuñón San Martín, del Grupo Parlamentario Mixto, y el resto se dieron por defendidas por parte de su correspondiente portavoz.

Se votó el informe de la ponencia, que supone el mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados, y resultó aprobado. El proyecto de ley quedó dictaminado por la comisión y fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 3 de diciembre de 2007.

Al dictamen de la comisión han presentado votos particulares el senador Sampol i Mas y el senador Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y los senadores Aragonès Delgado de Torres, Bofill Abelló, Bonet i Reves y Esquerda Segué.

Señorías, con esta breve exposición finalizo la presentación del dictamen del proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación pasamos a debatir los vetos presentados al proyecto de ley.

En primer lugar, y para defender la propuesta de veto número 2, de los senadores Bofill Abelló, Aragonès Delgado de Torres, Esquerda Segué y Bonet i Revés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: *(El señor Bofill Abelló inicia su discurso en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones):*

«La dictadura franquista va ser un règim il·legal i il·legítim des dels seus orígens el 1936, en una sublevació militar contra el règim constitucional democràtic de la República, contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, contra el govern de la Generalitat de Catalunya i contra el govern de la República elegits democràticament pels ciutadans, fins la seva fi. Totes les seves actuacions represives contra els seus dissidents i opositors, totes, van ser il·legals i il·legítimes, van ser uns atemptats contra els drets civils i contra els drets humans, i en molts casos crims contra la humanitat.»

Continúo en castellano por imperativo legal, esperando que la próxima legislatura sea la que abra la puerta definitivamente a un Senado plurilingüe.

Decía que la dictadura franquista fue un régimen ilegal e ilegítimo desde sus orígenes, una sublevación militar contra el régimen constitucional democrático de la República hasta su fin. Todas sus actuaciones represivas contra

sus disidentes y opositores fueron ilegales y fueron atentados contra los derechos humanos y civiles y en muchos casos crímenes contra la humanidad.

Esta verdad se concreta dramáticamente en la verdad de cada una de las víctimas, desde las más significadas por su simbolismo, como Lluís Companys, *president* de la Generalitat de Catalunya, condenado a muerte y fusilado por su condición de presidente democrático de los catalanes, o Joan Peiró y Julián Zugazagoitia, ministros de la República, hasta los trabajadores y estudiantes apaleados y encarcelados, perseguidos, despedidos de sus empresas, expulsados de sus universidades por crear sindicatos democráticos en los últimos años de la dictadura, pasando por los maestros perseguidos por sus valores democráticos, los militares y miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado perseguidos y hasta fusilados por cumplir con su deber de defender el orden legal democrático y constitucional, o los desaparecidos, asesinados y enterrados en cualquier cuneta durante la guerra y en la inmediata posguerra.

Esta verdad debería ser el punto de partida de esta ley; este debería ser el punto de partida porque treinta años después del fin de la dictadura ya es hora de que las clases dirigentes del Estado español y el propio Estado —en cuyo nombre y utilizando su administración, su ejército y su policía se ejerció la represión— condenen con claridad el régimen franquista, su origen ilegal e ilegítimo desde el punto de vista democrático y su carácter criminal desde el punto de vista de los derechos humanos.

Al tiempo, esta ley debía reconocer a todas las víctimas, a todas sin discriminación, garantizándoles, primero, el derecho a saber la verdad; segundo, el derecho a la justicia y, tercero, el derecho a la reparación sin discriminaciones, atendiendo solo al daño sufrido, estableciendo claramente que el Estado garantizaría el ejercicio de estos derechos y para ello pondría los recursos y los medios necesarios en cada caso. Y aquí no vale, señores del PP, oponer unas víctimas a otras, una barbarie a otra, porque se trata de condenar todos los atropellos que se cometieron y sobre todo de reconocer, de atender a todas las víctimas y muy singularmente a aquellas que el Estado nunca o apenas aún ha reconocido como tales.

Resulta bochornosa la falta de sentido democrático y de generosidad de esa derecha a quien parecieron y parecen bien los reconocimientos a los muertos y víctimas del bando vencedor de la guerra y que regatea los mínimos derechos, se muestra cicatera con los familiares de los muertos en defensa de la democracia, con los asesinados, con los fusilados, con los encarcelados, con los perseguidos durante cuarenta años por la dictadura. Por favor, renuévense, jubilen a los ex ministros de Franco, busquen otros referentes, miren hacia Europa, miren al futuro, les irá mejor y nos irá mejor a todos seguramente.

Desde nuestro punto de vista, no valía la pena hacer demasiado caso de los aspavientos de la derecha trasnochada ante una ley que solo va a favor de las víctimas y no va contra nadie, porque cabe suponer que está claro que hoy aquí ya no hay franquistas y sobre todo sabemos que

más allá de reductos nostálgicos en la sociedad no hay franquistas, hay un consenso mayoritario sobre que la democracia no tiene vuelta atrás y hoy resulta hasta extemporáneo plantear esta cuestión que tanto preocupaba hace veinticinco años. Es un buen momento para abordar con serenidad la verdad de la dictadura y dar, por fin, un trato digno y justo a las víctimas.

Además, en el momento en que se planteó, con el apoyo de Esquerra Republicana, la tramitación de una ley de la memoria histórica después de las elecciones del 2004, había una mayoría social cansada de mentiras de Estado y una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar una ley plenamente consecuente con la afirmación de la ilegalidad de toda la actuación represiva del régimen franquista.

Al fin y al cabo, el ruido de algún sector de la derecha más anclada en el pasado, que forma parte del paisaje español y por suerte bastante menos del catalán, era inevitable, y tampoco se ha evitado con una ley como la que hoy debatimos, que se queda muy corta en el pleno reconocimiento y reparación de todas las víctimas. Ese griterío, ese rasgarse las vestiduras ante un supuesto revanchismo, esa apelación hipócrita al espíritu de la transición entendido no como generosidad democrática, sino como olvido de las víctimas republicanas y antifranquistas, era y es inevitable en algunos sectores, pero pasado el mal trago la mayoría no va a insistir, porque el futuro de la derecha en la Europa democrática no pasa por el fascismo ni por el negacionismo. Desde nuestro punto de vista, con esta ley se podría haber terminado con los claroscuros de la transición y llamar a las cosas por su nombre, ilegal a lo ilegal, crimen a un crimen, expolio a un expolio, robo a un robo, y cumplir con las víctimas y sus familiares, muchos de los cuales han ido muriendo en el olvido injustamente tratados.

En la justificación del veto que hoy tengo el honor de defender en nombre de los senadores Lluís Aragonès, Carles Bonet, Josep Maria Esquerda y en el mío propio, hemos resumido en 16 puntos lo que consideramos que deberían haber sido los contenidos esenciales de una ley que de manera justa cerrara las heridas del franquismo.

Entre estas cuestiones que no contempla el actual proyecto de ley cabe destacar, en primer lugar, la necesidad de que la ley prevea el reconocimiento por parte del Estado de la condición de víctimas con carácter jurídico a todas las personas que sufrieron de manera concreta la persecución y hasta la muerte por su oposición a la dictadura franquista. Un reconocimiento y una reparación justa a todas las víctimas, sin discriminaciones de ningún tipo. En este sentido, resulta inaceptable que la ley, por ejemplo, establezca la indemnización por estancia en prisión o en batallones disciplinarios solo a favor de los nacidos antes de 1931 y no extienda este derecho a todas las personas que sufrieron las prisiones franquistas. Tampoco parece aceptable, por ejemplo, que al tiempo que se establece una indemnización de 9.617,18 euros a favor únicamente de las viudas o viudos de los ejecutados a causa de sentencias de los tribunales franquistas, se excluya del derecho a percibir una indemnización similar a los fami-

liares de las personas que murieron en las cárceles o en manos de las fuerzas represivas sin ningún tipo de juicio.

Como resulta escandalosa la discriminación que la ley establece en su artículo 10 al prever que los familiares —no solo las viudas y viudos en este caso— de los muertos a causa de la represión, tanto si fueron ejecutados después de un simulacro de juicio como si fueron muertos en otras circunstancias represivas, entre 1968 y 1977, percibirán una indemnización de 135.000 euros. ¿Por qué razón se da un trato tan diferente y discriminatorio a los muertos por el franquismo antes y después de 1968? ¿Qué pasó en 1968? Otra vez nos encontramos con dos varas de medir, porque lo que ha pasado seguramente es que a partir de 1968 hay víctimas de atentados de ETA, como el policía Melitón Manzanas, cuyos familiares han cobrado indemnizaciones de este tenor y resultaba flagrante no acordar una indemnización similar a las víctimas antifranquistas. Pero la comparación sigue siendo flagrante porque tan víctimas fueron los muertos después de 1968 como los muertos por el franquismo antes de esta fecha. Una discriminación que, por lo demás, contradice el espíritu y la letra del artículo 14 de la Constitución.

En segundo lugar, en íntima relación con la justicia que se merecen las víctimas y con la ilegalidad de la acción represiva de la dictadura, es fundamental la anulación de todas las sentencias de los tribunales franquistas. A estas alturas no nos parece adecuado que se hable de ilegitimidad solo con valor moral, sin valor jurídico y sin ningún derecho a reparación asociado.

No nos parece de recibo que se sitúe a los familiares de las víctimas en la tesitura de emprender costosos procedimientos para intentar la revisión de los juicios sin ninguna garantía de que el Tribunal Supremo acepte las demandas atendiendo a la letra de la propia ley. Hasta hoy, todas las demandas de revisión y posterior anulación de las sentencias de muerte presentadas por familiares de personas injustamente ejecutadas por el franquismo, como Joan Peiró o Salvador Puig Antich, han sido rechazadas, además, con el escandaloso apoyo del Ministerio Público.

La ley actual no sólo no libra a las familias del calvario de un nuevo procedimiento sino que tampoco garantiza que esta injusticia se vaya a enmendar. El proyecto de ley no aborda el hecho extremadamente grave de que el Estado se apropió de forma ilegal de los patrimonios, no sólo de partidos e instituciones sino de personas y entidades de todo tipo, como tampoco plantea la restitución del dinero que Franco obligó a depositar en el Banco de España y que representaba los ahorros en pesetas de curso legal del periodo republicano de miles de ciudadanos.

Los partidos y sindicatos, aunque con limitaciones, han visto reconocido su derecho a recuperar su patrimonio, no así los ciudadanos y tantas entidades de todo tipo a las cuales el Estado franquista robó unos bienes que el Estado actual ha heredado ilegítimamente, porque su origen era ilegal e ilegítimo.

Tampoco establece el proyecto de ley, de acuerdo con lo que exige el derecho internacional sobre derechos humanos, la plena responsabilidad del Estado en relación con la

obertura de las fosas donde están enterrados ciudadanos anónimos asesinados.

Y antes de terminar, es importante subrayar que Esquerri Republicana considera que ya es hora de que el Estado español dé un trato al franquismo y a las víctimas del franquismo acorde con la doctrina internacional sobre derechos humanos. Necesitamos estar presentes en la escena internacional con plena autoridad moral.

Resulta cuando menos sorprendente que se vea la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, que algunos jueces de la Audiencia Nacional no duden en aplicar el derecho internacional en otros países, no duden en procesar a criminales contra los derechos humanos de Argentina, Chile o el Tibet, y no lo apliquen aquí.

Resulta cuando menos sorprendente que se vaya por el mundo de paladín de la democracia y los derechos humanos y que no tengamos todavía una ley plenamente acorde con el derecho internacional en la materia, como han denunciado entidades de defensa de los derechos humanos, de tanto prestigio como Amnistía Internacional o el Grupo Nizcor.

Nuestro veto recoge algunas de las demandas ya históricas de las asociaciones de víctimas y de las asociaciones de derechos humanos que no han tenido un reflejo adecuado en el proyecto de ley. Nuestro veto quiere significar que no nos satisface por insuficiente la ampliación excesivamente parcial y a veces discriminatoria de derechos que hace la ley, ni nos parece suficiente por obvia una condena general del franquismo sin consecuencias jurídicas.

Nuestro veto, el veto de Esquerri Republicana de Cataluña, quiere significar sobre todo que la cuestión no queda zanjada con esta ley; no queda zanjada políticamente ni desde el punto de vista de las víctimas del franquismo, de sus familiares y amigos, ni desde el punto de vista de los derechos humanos.

Nuestro veto expresa el compromiso de Esquerri Republicana de Cataluña de continuar oponiéndose a las presiones de esa derecha aún anclada sentimentalmente en el franquismo y, sobre todo, de continuar trabajando para conseguir una buena ley, justa y coherente con los valores democráticos y la doctrina de los tribunales e instituciones internacionales sobre los derechos humanos.

Moltes gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la propuesta del veto número 1 del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.

No voy a caer en la tentación de contestar al senador que me ha precedido en el uso de la palabra, que no sé si ha presentado un veto al proyecto de ley o un veto al veto que yo voy a exponer a continuación. Pero le quiero decir que desde luego no tiene ni idea cuando habla de anclajes en el franquismo, y cosas por el estilo. Aprenda un poco de historia y que aprendan también quiénes son los sena-

dores que estamos aquí y a qué representamos. Un poco de conocimiento al respecto sería muy importante. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Dicho esto, voy a entrar en la defensa de mi veto, los demás no me importan. Mi partido no existía en aquellos momentos, algunos otros sí y participaron en golpes de Estado, pero, repito, desde luego el mío no, porque no existía. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

En el debate que mantuvimos en la Comisión Constitucional, hace algo más de 15 días, ya expusimos los argumentos principales en los que basamos nuestro rechazo a este proyecto de ley, que consideramos innecesario, irrelevante y engañoso. El ordenamiento jurídico, y no solo el nuestro, está lleno de disposiciones de las que se habría podido prescindir buenamente sin daño ni perjuicio para nadie y que por añadidura muy a menudo no se cumplen. Pero esto es aún más grave cuando esas innecesarias normas no solo no son inocuas sino que, por el contrario, son dañosas, producen graves disensiones y divisiones entre los ciudadanos, reabren viejas heridas o reeditan añejos enfrentamientos que el tiempo parecía haber archivado para siempre.

Este es el caso de este proyecto; un proyecto que además de innecesario y dañoso para el conjunto de la sociedad es irrelevante, y podemos añadir que inútil, porque en nuestro ordenamiento ya existen suficientes instrumentos jurídicos para realizar y cumplir las finalidades a que este proyecto dice atender.

Desde hace 30 años las Cortes Generales y los gobiernos de diferente signo que se han sucedido han promulgado una veintena larga de disposiciones de diverso rango enfocadas a ese objetivo, y cualquiera de las víctimas de aquella terrible etapa de nuestra historia nacional que pudiera sentirse preterida o menoscabada injustamente en sus pretensiones dispone ya de vías en nuestro Estado de derecho para hacer efectivas esas reivindicaciones, tanto en lo que se refiere al justo reconocimiento de esos derechos y a las indemnizaciones que merecen las víctimas de aquella larga etapa como al imprescriptible derecho a buscar los restos de los fallecidos y darles digna sepultura que tienen, sin ninguna duda, sus familiares si así lo desean.

Señorías, este proyecto, además de innecesario e inútil, es sobre todo engañoso porque, como afirmamos en la justificación que acompaña nuestra propuesta de veto, disfraza de iniciativa de concordia, lo que es en realidad un paso más en la estrategia de ruptura del pacto constitucional que este proyecto está alentando desde el inicio de la legislatura. Por eso mismo considero que se puede calificar al proyecto de hipócrita, porque después de hacer al inicio de la exposición de motivos un contenido elogio del espíritu de la transición, se adentra por unos derroteros que suponen un intento de voladura controlada de lo que la transición significó y una desatención rayana en el vilipendio de aquel mismo espíritu.

En la misma línea, tampoco se puede aceptar que, como hace la exposición de motivos, se valore la proposición no de ley aprobada por unanimidad en la Comisión Constitu-

cional del Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002, a propuesta de mi grupo parlamentario, en la que se expresaba la voluntad de no utilizar el pasado como arma y desgranar después una serie de artículos que van exactamente en sentido opuesto. Aquella proposición no de ley proclamaba la voluntad de no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha, y este proyecto de ley hace justamente lo contrario.

Se dice desde el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista que nadie que lea este proyecto puede objetar de buena fe ni una sola línea del mismo. ¿Están seguros de esa afirmación? Veámoslo con atención, señorías, porque no todo es como parece ni es oro todo lo que reluce.

No hace falta ser un experto en semántica para saber que en cualquier texto hay que distinguir el significado manifiesto y el latente o, como dicen algunos, el texto y el subtexto. La estricta literalidad oculta tiene, y con frecuencia, una intención que va más allá de la apariencia, y por eso se dice que es necesario leer entre líneas.

La más elemental aplicación de las técnicas de análisis de contenido nos llevaría a la conclusión de que en este proyecto late una intención revisionista, de ruptura, apenas larvada del pacto constitucional. Es una manifestación más del proyecto de exclusión que abandera este Gobierno, y en ese sentido se podría decir que es un fruto más de lo que se podría llamar la política de *tinellización* que se practica desde La Moncloa. No es extraño que, según confesión propia, sea el presidente del Gobierno quien ha redactado la exposición de motivos; en suma, estamos ante un *tinellazo* más. Casi no puede ocultar su vocación de cordón sanitario. Quien no lo vote, merece la exclusión.

Pues bien, señorías, nosotros no podemos aceptar un proyecto cuya voluntad divisoria apenas si puede ocultarse. El espíritu de la transición al que he aludido hace un momento era y es el consenso, y a la vista está que este proyecto lleva en su frontispicio los gérmenes del disenso, del enfrentamiento y de la discordia.

Saben muy bien que esta iniciativa, conocida por todos como ley de memoria histórica, ha tenido una amplia repercusión popular, y ya antes de su aprobación un triste efecto divisorio. Oyendo algunos discursos, incluidos los pronunciados en la Cámara Baja, o aquí mismo esta misma tarde, se podía percibir como un estremecedor eco de viejos debates de los años treinta del siglo pasado. Estoy seguro de que ninguna ley de las que han pasado por las Cortes en esta legislatura ha producido tanta polémica y despertado tantas pasiones. Solo si se cierran los ojos a la realidad se puede negar este hecho, pero consulten las hemerotecas y podrán comprobarlo. En la polémica sobre este proyecto que se viene desarrollando en la sociedad y que se refleja en los medios de comunicación se ha utilizado un lenguaje y se ha alcanzado un tono que creíamos definitivamente desterrados de nuestra vida pública. La voluntad de excluir al contrario, de eliminar al discrepante, el designio criminal de volver a dividir a la sociedad en dos mitades irreconciliables, el descerebrado intento de distinguir entre españoles buenos y malos, o la arrogante pretensión de imponer unas determinadas ideas como

única ortodoxia aceptable, son todas ellas actitudes que se han enseñoreado de nuevo de nuestro escenario público. Estos son, aun antes de aprobarse, los primeros frutos de este proyecto de ley.

La mal llamada memoria histórica nos ha obligado a presenciar una penosa guerra de esquelas, muestra de un estremecedor culto a la muerte, propio de sociedades primitivas o desvertebradas. Han vuelto a enfrentarse en la calle bandas que se etiquetan con nombres que nada tienen que ver con una sociedad moderna y democrática como es la española, y hasta hemos oído gritar a algunos vándalos, que seguro que no representan a ninguna fuerza política democrática, «a por ellos, como en Paracuellos». Mientras otros, tan nulamente democráticos y tan sedientos de violencia como los primeros, se les enfrentaban envueltos unos y otros en las viejas banderas que presidieron aquella vergonzosa orgía de sangre: una terrible guerra civil, que algunas mentes preclaras, como la de Miguel de Unamuno, habían predicho solo unos meses antes que no sería posible, que no podía producirse, porque España ya era un país civilizado.

A este morbosos guerracivilismo es a lo que la transición puso fin en un esfuerzo de reconciliación inédito en nuestra historia. Plantó las bases para regenerar una sociedad ansiosa de libertad después de un período tan largo de violencia y dictadura. Por primera vez en nuestra historia como nación y con excepción quizás de la de 1812, se redactó una Constitución que seguramente no era perfecta pero que no era la imposición de unos españoles sobre otros ni el trágala de los vencedores sobre los vencidos, sino el espacio jurídico para el reencuentro, la reconciliación y la concordia. Se equivocan los que creen, quizás porque no la vivieron, que la transición fue un acuerdo, casi de espaldas al pueblo, de unos políticos de dentro de aquel régimen con otros de fuera: en absoluto fue así. Aquello fue un gran acuerdo nacional, en el que se sintió implicada toda la sociedad española, todos los españoles, incluidos los que en aquel momento no nos dedicábamos a la política. Muchos de los que no formábamos parte de aquellos incipientes partidos trabajamos también denodadamente para que España accediese a la democracia. Lo hicimos desde la universidad o desde los medios de comunicación, desde los ámbitos en los que desarrollábamos nuestra vida personal y profesional. Fue toda una generación la que, decidida a no repetir los errores del pasado, miró esperanzadamente hacia un futuro de libertad y apostó por lo que significaba la transición e hizo suyo el espíritu de concordia encarnado en la Carta Magna de 1978.

Apostamos por la vía de la reforma, que no era, como se ha dicho, ni un vergonzoso cambalache ni un pacto de olvido, sino todo lo contrario: precisamente porque se tenía muy presente nuestra atormentada historia nacional se hizo un esfuerzo generoso para no repetir jamás los enfrentamientos cainitas del pasado. Había que cancelar de una vez para siempre el medio siglo anterior porque, como ha escrito el profesor Varela Ortega, la guillotina seca de 1923 —cuando empieza la primera dictadura, la de Primo de Rivera— fue el primer eslabón de aquella

larga cadena de disparates catastróficos. La inmensa mayoría de los españoles apoyamos una Carta Magna que no era — insisto— por primera vez en nuestra historia una constitución impuesta a golpe de pronunciamiento para uso exclusivo de un partido, como ya denunciaba Sagasta refiriéndose al siglo XIX, sino la Constitución de la concordia, que garantizaba la convivencia en paz de todos los españoles.

Recurso, si me lo permiten, a la vivencia personal para decirles que yo, que nunca he tenido veleidades marxistas ni comunistas, defendí, cuando fue una cuestión polémica, la legalización del Partido Comunista, y recuerdo vivamente aquel Sábado Santo de 1977 en que, estando yo fuera de España, me enteré de aquella legalización. Entonces pensé que la transición iba en serio, que pronto llegaríamos a una democracia en la que todos tendrían cabida: los que nos gustaban y los que no nos gustaban; en eso consiste la democracia. La voluntad de aquella generación de la transición era liberar a España de una vez para siempre de la plomiza losa del pasado, y creo que lo logramos con la Constitución actual; una Constitución que no es solo un texto legal, sino también un espíritu de convivencia, de inclusión de los contrarios, de respeto al diferente; un espíritu que permea cada letra y cada artículo del texto.

El revisionismo de la transición se ha propagado, sin embargo, en los últimos tiempos, en la idea de que la nuestra no es una democracia de calidad, porque no fue fruto de una ruptura que, jugando a lo imposible y a lo irreal, algunos pedían. ¿Se imagina alguien a los alemanes queriendo volver a la República de Weimar con el argumento de que la actual Constitución —La Ley Fundamental de Bonn, de 1949— se redactó en una Alemania ocupada y dividida, sometida a la tutela americana? Nadie quiere allí volver a la República de Weimar, punto de partida de sus males nacionales. Y es increíble que por aquí algunos sientan nostalgia por una II República cuyos frutos no fueron menos amargos.

Estamos, claro está, abiertos a las reformas cuando son necesarias o convenientes y se basan en amplios consensos porque fortalecen al sistema, pero no aceptamos el revisionismo, que está presente en este proyecto, que echaría por tierra los principios en que se basó la transición, que para nosotros fue, repito, un éxito histórico y político que queremos defender.

Podría decir algo más acerca del propio contenido del proyecto de ley, empezando por eso de que la memoria histórica no aparece en el título pero sí aparece, por ejemplo, en ese centro documental de la memoria histórica, que es propio de regímenes totalitarios y que inevitablemente recuerda —por lo menos a mí me recordaba cuando lo leía— al llamado Ministerio de la Verdad que George Orwell influye y denuncia en su famosa novela *1984* que, como todos saben, es una certera crítica a todos los autoritarismos. Verdaderamente los autores del proyecto no han ido muy lejos porque no han incluido ahí otras cosas que decía Orwell en aquella novela, como la policía del pensamiento o el amor obligatorio al Gran Hermano, pero, a veces, parece que se van a deslizar por ese camino.

Algunos de los protagonistas de aquellos sucesos, que lamentamos todos, se arrepintieron enseguida de lo que había pasado. Yo he citado aquí, con motivo de otro proyecto de ley, hace un año y pico, unas palabras de Azaña, aquellas que termina con «Paz, Piedad y Perdón». Pero el propio Azaña, ya en el exilio, decía que a los mitos idiotas de Burgos se les pueden oponer otros mitos, los nuestros, no menos risibles, porque también nosotros —añadía— hemos tenido nuestros esquizofrénicos y nuestros visionarios. Y esta ley parece que se olvida de todas esas cosas. Indalecio Prieto, añorando una política de concordia que la República no había sabido o no había querido aplicar, afirmaba en 1942 —fíjese en la fecha—: No me sumaré a nada que contribuya a dividir a los españoles ni que signifique la continuación del séquito horrendo de las deudas de sangre. Y ya mucho más cerca de nosotros, uno de los protagonistas de la transición, Felipe González, recordando aquella triste etapa pasada, afirmaba sensatamente que lo que se quiso es impedir la vuelta de aquel clima que resultó tan dañino para España. Y cuando habla así se refería inequívocamente a la II República.

Si quienes han elaborado este proyecto de ley hubieran meditado estas palabras anteriores y muchas otras que hay por ahí de gentes de la derecha y de la izquierda, pero sobre todo de la izquierda, seguramente no hubieran traído este proyecto a las Cortes.

Señorías, está de moda la novela histórica, que consiste en rehacer la historia al gusto de que la escribe. Y este Gobierno parece que quiere hacer una benigna novela histórica... (*Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: ...con un tiempo pasado del que nadie que lo conozca puede enorgullecerse. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular. —Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.— Un señor senador: ¡Viva Franco!*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: La historia es como fue y no como les gustaría a algunos o a muchos que hubiera sido. No se puede adulterar el resultado de las pasadas contiendas ni utilizar la historia como arma arrojadiza. Y este proyecto lo hace.

No voy a entrar en más asuntos porque en el turno de enmiendas podremos analizar con más detalle algunos de los aspectos de esta ley. Pero por estas razones y por muchas más que se podían añadir, nosotros presentamos este veto a este proyecto de ley.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (*Pausa.*)

Tiene la palabra la senadora Rubial.

La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a un grupo de personas que representan a ese colectivo que nosotros consideramos como de nuestra memoria histórica, y también quiero agradecer a mi partido el que me haya dado la oportunidad de intervenir en esta ley. Para mí que, como saben, soy hija de un histórico militante socialista, es muy importante. (*Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!*)

Señorías, cuando el 22 de julio de 1977 se abrieron las Cortes democráticas, después de las primeras elecciones celebradas en el mes de junio, los diputados y senadores que nos antecieron en la noble tarea de representar la soberanía popular sabían que su principal cometido sería abrir un proceso constituyente. Más allá de estrategias partidistas, se afanaron en la tarea de desbrozar el camino que nos permitiera alcanzar las libertades, asegurar la convivencia y no imponer nunca la voluntad de unos sobre otros. Sabían, y la asumieron con prudencia, dedicación y esperanza, que su primera misión era sentar las bases e iniciar los pasos hacia la reconciliación. Esa fecha significó la primera oportunidad para muchos cientos de miles de españoles de ver cumplidos sus deseos y sus ansias de vivir en un país libre con garantías democráticas.

Señorías, han pasado treinta años, es decir, dos generaciones después de aquellos primeros pasos, y me viene a la memoria lo que mi padre —como les decía—, un histórico socialista, expresó hace ya veintidós años y que se recogió en un diario asturiano. Decía: Los españoles somos muy dados a la pasión, y la pasión a veces nos empaña el juicio, y es entonces, con el juicio empañado, cuando somos más propensos a decirle al otro: o estás conmigo o estás contra mí. No me gustaría que hoy, en este clima agitado que vivimos por la cercanía del proceso electoral, la pasión empañase el juicio de quienes debemos dar respuesta a las demandas de justicia y solidaridad de un colectivo de ciudadanos españoles. Nuestra labor hoy es el final de ese camino de reconciliación que nos señalaron quienes dieron aquellos primeros pasos en la transición. Y yo creo sinceramente, lo cree mi grupo, que la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura constituye un valioso y definitivo paso para el colectivo de personas que tuvieron que vivir unos duros años bajo el régimen franquista en las cárceles, en el exilio, en los campos de concentración o en los cementerios, y lo es sobre todo para las familias que les han sobrevivido.

Sin embargo, señorías, tampoco desearía renunciar al entusiasmo y al apasionamiento en la defensa de lo que considero justo y en la respuesta a las afirmaciones que se han venido haciendo sobre este proyecto de ley. Muchas cosas se han dicho en los últimos meses por quienes no desean dar estos últimos pasos en pos del restablecimiento de un orden de justicia que reconozca nuestros errores pasados, los de todos, y en pos de esa reconciliación definitiva que se inició con la democracia.

Han sido muchas las descalificaciones en boca de quienes se muestran abiertamente contrarios a esta ley. Se ha

dicho que este proyecto es una política de vuelta al pasado que elimina los grandes acuerdos, lo dijo el ex presidente del Gobierno, don José María Aznar, y lo dicen quienes nunca mostraron entusiasmo por llegar a esos grandes acuerdos; se dice desde las filas de quienes sistemáticamente se niegan a reprobar las páginas más dolorosas de nuestro pasado para imponer, mediante el ejercicio del olvido, un futuro que no reconozca esos errores; lo dicen quienes, como el parlamentario don Jaime Mayor Oreja, utilizan adjetivos como plácido para definir el periodo más trágico e injusto de nuestra historia reciente.

Se ha dicho que este proyecto de ley no tiene más sentido práctico que sembrar cizaña entre los españoles, que es un gesto diseñado para fomentar la discordia entre nosotros. Lo dijo Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación, y lo dice quien durante cada semana de esta VIII Legislatura, que llega a su fin, ha buscado una excusa para sembrar un nuevo motivo de discordia y crispación y para llenar las calles de nuestras ciudades de descalificaciones. Lo dicen aquellos cuyo sentido democrático se sustenta en las recusaciones de jueces, en los recursos sistemáticos de las leyes aprobadas por estas Cortes Generales y en la persistente apropiación de algunos símbolos que nos definen como sociedad y nos pertenecen a todos.

Se ha dicho que este proyecto de ley es innecesario, irrelevante, engañoso y dañoso, lo dijo el senador Muñoz-Alonso cuando defendió el veto en la comisión del Senado. ¿Es innecesario restaurar sus derechos después de setenta años a quienes simplemente defendieron la legalidad democrática vigente entonces y por ello sufrieron persecución? ¿Es irrelevante cuando la práctica totalidad de los grupos políticos que formamos parte de esta Cámara creemos necesario hacerlo y representamos a la gran mayoría de los ciudadanos? ¿Qué sería más relevante según esa línea de pensamiento? ¿Dejar las cosas como están? ¿Es engañoso, o lo es más, negar que existen aún situaciones que precisan de nuestro decidido apoyo, como han puesto de manifiesto las demandas ciudadanas en el ámbito parlamentario o a través de las asociaciones cívicas? ¿Para quién es dañoso? ¿Para todas esas familias a las que se les restituye su derecho a la memoria familiar y personal, que se vio afectada por conflictos de carácter público?

Señorías, en mi opinión, en la opinión del Partido Socialista, la ley de memoria histórica es relevante porque da respuesta a las legítimas y justas peticiones de nuestros ciudadanos en el marco de concordia que recoge nuestra Constitución. Es necesaria porque, tras las diferentes normas que recogen los derechos de quienes padecieron los episodios más dolorosos de nuestra historia y se han puesto en marcha desde las Cortes Generales, desde los distintos gobiernos de España y desde las comunidades autónomas, se precisa promover su reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar. No voy a enumerar aquí las ocho o diez leyes que se han ido aprobando durante toda la transición.

La ley que hoy nos ocupa no engaña a nadie porque se hace con luz y taquígrafos aquí en el Senado, en el ámbi-

to en el que reside la soberanía popular. Y no la impulsa ningún ánimo revanchista, sino el de fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

Y finalmente, señorías, la ley de memoria histórica no hace daño a nadie porque promete adoptar toda una serie de medidas encaminadas a suprimir los elementos de división entre los ciudadanos. Señor presidente, señorías, flaco favor haría a mi apellido si albergara un ápice de rencor en mi corazón. Por eso hago más las palabras de mi padre, que tras pasar por las vicisitudes que también muchos otros ciudadanos padecieron, verán con esta ley de alguna forma compensadas sus esperanzas. Decía Ramón Rubial: Todo eso que he visto no tendría que ocurrir nunca. No quiero que nadie sufra semejantes torturas, ni siquiera los torturadores, ellos tampoco, nadie. Si esto sirve de ejemplo, que vaya por delante. También decía: No puede haber vencedores, ni vencidos. Esta es una de las bases que debemos dejar bien sentadas con el fin de que no fructifiquen las secuelas y paralicen la buena marcha del país, que necesita del esfuerzo y la solidaridad de todos. Créanme cuando les digo que a los socialistas sólo nos mueve un profundo impulso para restablecer la justicia que jamás debió ser profanada, para restablecer ese concepto aristotélico que concibe la justicia como igualdad proporcional, dar a cada uno lo que es suyo, lo que le corresponde o pertenece. No pretendemos ningún revisionismo, ni hacer electoralismo. Nuestro programa ya lo hicimos en el 2004 con los ciudadanos y, también, lo haremos con ellos en el 2008. En estos programas hemos profundizado en los derechos individuales y colectivos y hemos acometido una gran reforma social. Esa es nuestra única arma electoral.

Senadores de Esquerra, también les voy a hacer una referencia: tampoco pretendemos con esta ley cerrar heridas porque creemos que están bien curadas y que no se van a volver a abrir. España, nuestro Gobierno, cualquiera que sea su color, no puede canalizar o imponer la ideología de los partidos que forman parte de esta Cámara, aunque a algunos nos gusten más o menos. Como se dice en la exposición de motivos de este proyecto de ley, el restablecimiento de este orden justo exige el reconocimiento del derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano como parte inherente del estatuto jurídico de la ciudadanía democrática. Ya sabemos, señorías, que a algunos de ustedes no les gusta cómo se hizo la transición. Una de las razones por las que no les gusta, a su parecer, es porque quedaron cuentas pendientes. Es una pena, señorías, que no se pudiera contar en 1978 con su asesoramiento. Por cierto, además de la Constitución de 1812 y la de 1978, quisiera dejar constancia de la Constitución de 1931, democrática y votada por los ciudadanos. Pero los que hicieron la transición y los españoles que la apoyamos con nuestros votos, adoptamos como principio fundamental la convivencia en paz. No teníamos ninguna preocupación mayor que esa. Y había, entre otras, una razón muy importante, entre 1836 y 1936 los españoles hemos cono-

cido tres guerras civiles, tres, señorías. Un país que ha conocido tres guerras civiles en un siglo es razonable que cuando sale de la dictadura que siguió a la última guerra se haya preocupado, sobre todo, por la convivencia en paz. Es muy razonable. Por eso los españoles decidimos por aclamación aceptar todo aquello que pudiera servir para construir un futuro de entendimiento y rechazar con la misma energía todo lo que pudiera dividirnos. Esto, señorías, no tiene nada que ver con el olvido. Les debíamos este reconocimiento y ese es —tengan total seguridad los grupos del Partido Popular y de Esquerra Republicana de esta Cámara, que son quienes han presentados sendos vetos— el único destino que buscamos, porque la distancia y el tiempo transcurrido no puede olvidar el derecho a nuestra memoria y, sobre todo, porque esta ley tiene que ver con la voluntad. Lo hemos hecho, sobre todo, porque conservamos la memoria. Lo hemos hecho porque nuestra memoria no nos gustaba. Lo hemos hecho porque rechazamos que nuestra memoria sea el carburante de un nuevo rencor. Los españoles que fueron capaces de alcanzar esta altísima cota de nobleza, los españoles que decidieron mirar al frente y ordenar la casa que debían habitar sus hijos no se merecen que se banalice la historia o que alguien pretenda a estas alturas y a esta distancia erigirse en tribunal y determinar quiénes son buenos y quiénes son malos. Creemos que se ha deteriorado el clima de convivencia y que, en el caso concreto de la ley que hoy estamos debatiendo, se tenía que haber convocado a todos los españoles a un proyecto unitario de futuro.

Muchas gracias. (*Fuertes y prolongados aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos a continuación al turno de portavoces.

Tiene la palabra el señor Sampol.

El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre del PSM-EN, *Bloc per Mallorca*, y de todos los senadores del Grupo Parlamentario Mixto, anuncio el voto contrario a este veto y el apoyo al proyecto de ley de memoria histórica, aunque este haya llegado al Senado con algunas carencias que proponemos subsanar mediante enmiendas que justificaremos en su momento. Las más importantes hacen referencia a la necesidad de anular sentencias dictadas por tribunales que el propio proyecto de ley considera ilegítimos, además de responsabilizar al Estado de la localización de las fosas comunes, su dignificación o, en su caso, la identificación de los restos y su exhumación a petición de los familiares. A pesar de estas limitaciones, consideramos necesaria esta ley y no compartimos de ninguna manera los argumentos del Partido Popular para votar su retirada.

Durante los últimos meses hemos asistido a un gran debate en el que los detractores de la ley, básicamente el Partido Popular y medios de comunicación afines, han sostenido que vulnera lo que se ha llamado el espíritu de la transición, reabriendo heridas de la guerra civil. Esta tarde hemos escuchado los mismos argumentos. Unos y

otros dan por sentado que las heridas de la guerra civil y las que continuó abriendo la dictadura durante años están cerradas. Y cabe preguntar: ¿Qué autoridad tiene el Partido Popular para dar por cerradas las heridas de personas que sufrieron prisión, persecución y torturas? ¿Con qué autoridad alguien —sea político, periodista u obispo— se atreve a dar por cerradas las heridas de los familiares de personas desaparecidas? ¿Cómo se atreven a sentir por ellos? (*Varios señores senadores: ¡Muy bien!*) Porque el hecho de que hayan sufrido en silencio durante más de setenta años no significa que no hayan sufrido y sigan sufriendo. ¿Cómo pretenden que esté cerrada la herida de un hijo que perdió a su padre y que ni siquiera sabe dónde está enterrado o, lo que es peor, que sabe que está enterrado en un lugar indigno? ¿Cómo pueden pretender que se cierren estas heridas?

Se ha acusado de revanchista a este proyecto de ley. Y yo pregunto: ¿qué revancha existe en el deseo de restituir el buen nombre de personas que no hicieron ningún mal más que servir a su pueblo y a su Gobierno legítimo? (*Un señor senador: ¡Muy bien!*) (*Aplausos.*) ¿Qué revancha existe en querer saber dónde está enterrado un padre?

El año pasado tuve ocasión de asistir a un acto de homenaje al alcalde republicano de Porreres, un pueblo del interior de Mallorca. Climent Garau tenía una empresa de 30 trabajadores y era muy querido por ellos. Fue elegido alcalde durante la II República y esto le costó la vida. El acto fue muy emotivo. En el silencio se oían sollozos contenidos. En ningún momento del acto se hizo la más mínima alusión a los que prendieron y le dieron muerte; solo se hizo un reconocimiento a su persona y a los que, como él, perdieron su vida. Al final un medio de comunicación hizo una pequeña encuesta entre algunos de los asistentes. Al leer las respuestas me llamó la atención la de una de las cuatro hijas del alcalde republicano del municipio vecino, Montuiri, mi pueblo, que fue fusilado en septiembre de 1936 dejando cuatro hijas huérfanas. La mayor, de ocho años, respondió: *Feia molts d'anys que no passava tant de gust de plorar.* Hacía muchos años que no disfrutaba tanto llorando a gusto. *Passar gust de plorar.* En silencio, para adentro, para quedar en paz. Y es que hay heridas tan profundas que no dejan ni llorar.

Desde entonces he tenido ocasión de asistir a varios actos organizados en memoria de personas asesinadas durante y después de la guerra. En todos se ha dado la misma constante: ni la más mínima alusión a las personas causantes de las muertes. Ningún afán de revancha. Únicamente la voluntad de recordar a los fallecidos y de dignificar su memoria. Por favor, permitan que la gente llore en paz y permítanles el consuelo de poder llevar un ramo a la tumba de su padre. No sé si esto podrá cerrar una herida de toda una vida, pero al menos sí podrá hacerla más llevadera.

Mucho se ha aludido al espíritu de la transición, como si esta ley truncara un pacto no escrito aceptado por todos que permitió la reconciliación. Lo cierto es que no interpretamos la Constitución de la misma manera. A pesar de sus limitaciones yo la veo como un instrumento de liber-

tad. Otros la utilizan constantemente como una espada represora. Se ha hablado de revisionismo esta tarde. ¿Hay algo más revisionista que justificar un golpe de Estado acusando del caos a la II República? Senador, donde usted ve caos yo veo escuelas, veo médicos, veo equipamientos sanitarios. Esto es lo que me ha quedado a mí de la II República. (*Rumores.*)

Yo no sé lo que entienden algunos por reconciliación, pero yo les diré lo que no es reconciliación. Por ello les contaré otra pequeña historia.

Jeroni Alomar Poquet era sacerdote. Pertenecía a una familia mallorquina acomodada. Fue nombrado vicario de un pueblo muy pequeño del interior de Mallorca, Llubí. Cuando estalló la guerra se dedicó a facilitar la huida de la isla a republicanos, a personas que temían por su vida. Fue descubierto, juzgado y condenado a muerte. En junio de 1937 fue fusilado, ¡qué paradoja!, junto a otros dos condenados. Jeroni Alomar fue nuestro Schlinder mallorquín. Nunca sabremos cuántas vidas salvó. Seguramente su lista no es tan larga como la de Schlinder, pero pagó un precio mucho más alto: pagó sus vidas con su vida. (*Fuertes rumores.*) Por supuesto que el sacerdote... (*Rumores. Un señor senador: ¡Respeto al hombre!—Otro señor senador: ¡Vosotros!*)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor SAMPOL I MAS: El sacerdote Jeroni Alomar Poquet... (*Fuertes rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.

El señor SAMPOL I MAS: El sacerdote Jeroni Alomar Poquet (*Un señor senador desde los escaños: ¡Respetadlo!*) no está entre los más de 400 religiosos beatificados por la Santa Iglesia Católica a pesar de haber sufrido martirio por salvar a sus semejantes para después tener que escuchar acusaciones de revanchismo desde el púlpito radiofónico de los obispos.

¿Es este el espíritu de la transición? ¿Así se practica la reconciliación? ¿Quién divide entre buenos y malos? Señorías, nadie pide revancha, ni siquiera nadie pide justicia; ni justicia ni castigo para los culpables; únicamente se exige al Estado que haga lo que la sociedad ya está haciendo: dignificar a las víctimas de una guerra sangrienta y de una dictadura inhumana y cruel.

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.

El señor SAMPOL I MAS: Medio minuto, señor presidente.

Los crímenes fueron cometidos por el Estado o en nombre del Estado. Por eso, el Estado, aunque décadas más tarde, es responsable de su reparación. Por eso, esta ley es necesaria y es justo que se apruebe porque la democracia nunca se puede edificar sobre la injusticia, el dolor o el olvido de las personas que sufrieron represión y muerte por participar en la democracia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (*Aplausos.*)

Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Belda.

El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.

Después de esta emotiva y magnífica intervención del senador Sampol, poco más queda que añadir. Ha sido muy clarificadora, porque ese precisamente es el espíritu de esta ley y el espíritu con que debe aplicarse.

Desde Coalición Canaria, tal y como manifestamos en el Congreso de los Diputados, vamos a apoyar este proyecto de ley y vamos a rechazar consecuentemente los vetos presentados, porque consideramos que durante la tramitación parlamentaria en el Congreso, tras las oportunas enmiendas y transacciones, se ha mejorado notablemente el texto original que fue remitido por el Gobierno en su día a dicha Cámara. Y decimos que fue mejorado porque, en nuestra opinión, este texto que debatimos hoy aquí recaba más apoyos, más consensos, que los que obtenía el texto original.

Señorías, se trata de recuperar la memoria, la dignidad y el honor de todos aquellos que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencias religiosas tanto durante la guerra civil como durante la dictadura. Se amplían y se adoptan medidas de reparación a todas aquellas víctimas y a sus familias. Nos parece adecuado, y además es algo muy esperado, que se incorpore a nuestro derecho positivo lo más que podamos hacer en cuanto a los tribunales, jurados o cualesquiera otros órganos penales o administrativos de aquella época que se constituyeron durante la guerra civil declarando su ilegitimidad, de tal manera que se declara igualmente la ilegitimidad de sus resoluciones; ilegitimidad que, en todo caso, incluye también a determinados tribunales especiales que se crearon en aquella época, durante la dictadura especialmente, y que se extiende a las condenas y a las sanciones dictadas por dichos motivos políticos, ideológicos o de creencias contra quienes defendieron los derechos y las libertades democráticas.

Se establecen medidas que nos parecen justas y oportunas para la colaboración de las administraciones con los particulares en la localización e identificación de las víctimas, así como determinadas medidas de reconocimiento a las asociaciones de víctimas y creación de centros documentales, adquisición y protección de documentos sobre la guerra civil y la dictadura y el derecho de acceso a todos esos fondos documentales sobre esa época depositados en los archivos públicos.

Señorías —y voy acabando ya—, en muchas familias existen víctimas de los dos bandos de la guerra civil, por lo menos en la mía es así, y a mí me parece que esta iniciativa es la adecuada para olvidar el dolor y recuperar la paz y la dignidad.

En lo que se refiere a los símbolos y monumentos públicos —que quizá es uno de los aspectos más polémicos de la ley y que llama más la atención a la opinión pública—,

únicamente queríamos añadir que confiamos en que cuando en la Ley se habla de cuando las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias se esté haciendo referencia implícita a la autonomía local y a la autonomía de las comunidades autónomas, necesaria, por otra parte, para el propio ejercicio de esas competencias y que es uno de los elementos fundamentales de nuestro actual Estado de derecho descentralizado territorialmente, que además está reconocida por los artículos 140 y 2 de nuestra Constitución Española.

Termino diciendo que desde Coalición Canaria esperamos además que en el ejercicio de esas competencias, así como en el desarrollo y en la aplicación de esta ley cuando la aprobemos, se actúe con prudencia y con el adecuado sentido común para evitar que se puedan crear problemas donde hoy no los hay.

Por todas estas razones, señor presidente, señorías, Coalición Canaria va a votar en contra de los vetos presentados y, consecuentemente, votará a favor de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.

El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.

Si he de decir la verdad, no estoy cómodo esta tarde en el hemiciclo, porque me parece que no estamos encontrando el tono acertado de un debate de estas características.

Nosotros no vamos a apoyar ninguno de los dos vetos —ya lo digo por adelantado— porque en el trámite en el Congreso introdujimos algunas enmiendas y creemos que, aunque es mejorable, es mejor dar salida a la ley que no devolverla al Congreso. Pero si me permiten sus señorías haré unas cuantas reflexiones un poco improvisadas, porque no tenía previsto intervenir.

Hay dos vetos, uno presentado por el Grupo Parlamentario Popular y otro por Esquerra Republicana de Cataluña. Es evidente que la ley no está bien hecha. Tocando como toca un tema muy sensible, cuando tiene un veto presentado por un partido a la derecha del PSOE y otro por un partido a la izquierda del PSOE es que algo no se ha hecho bien. De hecho, desde que se aprobó en junio de 2006 hasta que se ha iniciado el trámite parlamentario, que ha sido en octubre de 2007, si me permiten les diré que el debate se ha podrido un poco.

Popularmente se conoce como la ley de la memoria histórica —ya hemos cometido un primer error—. La ley tiene otro título, pero popularmente es la ley de la memoria histórica y la memoria es un tema muy delicado, muy personal, muy íntimo y muy familiar. Escuchaba al senador Sampol una intervención muy emotiva, pero podría venir otra persona que le explicara exactamente casos parecidos de otras épocas. No es este el debate; este no es el debate. La memoria es selectiva, es privada y hay que respetarla; otra cosa es que tengamos la obligación —comparto la idea— de restablecer los derechos legítimos que tienen las familias de personas que sufrieron per-

secución durante el franquismo. Esto hay que hacerlo, aunque, por cierto, se puede hacer mediante decreto, no hace falta una ley. Pero entrar a definir qué es la memoria resulta un tanto peligroso, porque —insisto— entramos en la intimidad de sentimientos de muchas familias, de un lado y de otro, legítimos además. Otra cosa es que reconozcamos que el franquismo tuvo efectos perniciosos en mucha gente y que han de repararse esos derechos. En eso estamos de acuerdo. Pero insisto en que les han vetado desde su izquierda y desde su derecha. Por tanto, algo no se ha hecho bien.

Otra cosa es intentar escribir la historia desde la política. Creo que esto es pretencioso y un grave error. La historia es trabajo de los historiadores. Otra cosa es que la política deba corregir los defectos o evitar que vuelvan a suceder hechos que durante nuestra propia historia fueron malos, incluso dramáticos para los ciudadanos. Pero insisto en que la labor científica hay que dejársela a los historiadores y los políticos lo que debemos hacer es evitar que vuelva a suceder.

En el debate de esta tarde, mientras hablaba el senador Muñoz-Alonso, he oído gritos de «Viva Franco», lo que me ha parecido escandaloso, señorías. Y mientras intervenía el senador Sampol he oído gritos de «Respétenle», que venían del mismo sitio. Me gustaría saber qué estaba pensando el senador que se ha expresado así. ¿Ustedes creen que con este tipo de comportamientos estamos dando un buen ejemplo de lo que queremos resolver con esta ley? ¿Creen que estamos haciendo algo positivo para resolver lo que pretendemos, para mostrar los valores que queremos defender con esta ley? Sencillamente, creo que no. Y si les digo la verdad, si me permiten la expresión, me he sentido como gallina en corral ajeno, me he preguntado qué hacía aquí. Porque hay una tercera España a la que no le gusta este debate, aunque lo sufrió. Ya lo explicó Durán i Lleida, el portavoz de nuestro grupo parlamentario en el Congreso. Hubo gente que fue víctima de unos y de otros que ha sido olvidada por todos, por unos y por otros, y que hoy exige un debate más civilizado. Hagamos lo que tengamos que hacer, restablezcamos los derechos que correspondan a las personas que fueron víctimas de una situación sangrienta, pero hagámoslo de una forma sensata, con la concordia como elemento fundamental y pensando en el futuro.

Se ha hablado mucho de la transición y todo el mundo la interpreta como quiere. Es verdad que no puede ser considerada un punto final de nada, porque en la historia todo son puntos y aparte, la vida continua, pero no me negarán que la transición, con sus defectos, tuvo la virtud de ser lo que ha dado más estabilidad democrática, social y económica al Estado español en toda la historia conocida por nosotros, sin ninguna duda.

La República tuvo valores positivos, es verdad, pero acabó como acabó; no quiero hacer un juicio de valores, pero acabó como acabó. Y lo que es empíricamente comprobable es que lo que más estabilidad social, política y económica ha dado a España y a sus ciudadanos ha sido la transición democrática y la Constitución fruto de esa transición. Me parece que esto es indiscutible.

Por tanto, no interpretemos lo que ha pasado. La transición no es un punto final y, si hay que restablecer derechos, puede hacerse, aunque insisto en que no hacía falta una Ley, porque podría haber sido mediante decreto. En todo caso, el Gobierno, que es el que aprobó el proyecto de ley, debe intentar que se apruebe con el máximo consenso posible y, sin embargo, ha sido vetado a derecha y a izquierda. Por tanto, me gustaría que el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno sea consciente de que alguna cosa ha chirriado durante esta tramitación, porque desde que se aprobó el proyecto de ley por el Consejo de Ministros hasta el día de hoy ha pasado más de un año; algo ha chirriado. Y es bueno que, cuando una cosa no acaba de funcionar bien, se reconozca, se sea modesto y prudente y se intente buscar el consenso de unos y de otros, porque el hecho es que el proyecto de ley ha recibido dos vetos.

Por tanto, cuando hablemos de estos asuntos, de revisar la guerra civil y la República —y han de restablecerse derechos; nunca lo hemos negado—, hay que buscar la forma más adecuada de hacerlo, procurando no herir sensibilidades ni memorias legítimas e íntimas familiares, —porque se pueden explicar muchas, todo el mundo conoce multitud de unos y de otros— e intentar que las generaciones jóvenes sean conscientes de los errores que cometieron sus antepasados e introducir determinados valores para que no vuelvan a ocurrir. Pero, desgraciadamente, con los voceríos que he escuchado esta tarde mientras se producía el debate, creo que no hemos estado a la altura de lo que requiere un diálogo de estas características —perdónenme que lo diga, y yo el primero—, porque, al escuchar algunas expresiones me daban ganas de salir del hemiciclo, ir a tomarme una copa y volver, porque me ha parecido demencial. No es posible que a estas alturas hagamos este tipo de debates.

Quiero acabar, señor presidente, aunque luego en el turno de defensa de las enmiendas explicaré a fondo lo que pensamos de la ley, como terminé el otro día mi intervención en el debate de los vetos en comisión, con una expresión de la que deberíamos ser todos conscientes. Hay algo indiscutible: España es hoy la octava potencia mundial, es un país que juega en primera división, y todos los elementos que tiene en la mano son para seguir jugando en primera división. No hay peligro de bajar a segunda a no ser que lo estropeemos desde la política. Económicamente, aunque haya algunas incertidumbres, que las hay —la vida económica es cíclica—, se pueden reconducir perfectamente bien. Socialmente, es un país muy cohesionado que en los últimos años ha avanzado espectacularmente, sobre todo a partir de la transición. Solo pido sensatez a todos, a mí el primero, para que la política no sea un elemento que nos conduzca a segunda división. Solo pido esto y que estos debates se celebren con más prudencia, con más calma, porque afectan al recuerdo íntimo de muchas familias que tienen derecho a que se les respete sin exabruptos.

Muchas gracias, señor presidente. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.

La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en mayo del pasado año, con motivo del debate en este Pleno de la proposición de ley sobre la declaración del año 2006 como el de la memoria histórica, ya señalé desde esta misma tribuna que era una tarea pendiente del Parlamento y que la proposición de ley no era sino un gesto tímido y testimonial. A mi entender, faltaba la remisión a Cortes de una ley que cubriera todos los aspectos de la obligada reparación a las víctimas, exiliados y represaliados de la guerra civil y de la dictadura franquista. El texto cuyo debate ahora nos ocupa tiene sus luces y sombras, pero lo hace.

El proyecto llegado a esta Cámara tiene una redacción bien distinta a aquella con la que inició su trámite en el Congreso de los Diputados. Hay que reconocer que, desde entonces, ha sufrido un vuelco en toda regla, algo de lo que me congratulo porque el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos nunca hubiera podido apoyar un texto parejo al inicialmente presentado por el Gobierno, porque esta ley no podía quedar relegada al cajón de los asuntos pendientes de esta legislatura.

Con este sentimiento, señorías, mi grupo parlamentario ha enfrentado el debate y el discurrir de la presente ley, y siendo consciente de que el texto que vamos a aprobar hoy no lo es todo, ni lo abarca todo, ni lo puede todo, considere que, ha hecho mucho y marca la pauta para poder hacer mucho más.

Además, conviene subrayar que el texto final ha conseguido un alto grado de consenso. En este contexto, conocidos los vetos presentados y en atención a que mi grupo apoya prácticamente el 90 por ciento del articulado de la ley, les anuncio que vamos a votar en contra de ambos vetos. Traemos dos vetos a debate fundamentados en razones diametralmente opuestas, circunstancia esta que provoca una explicación más concreta de nuestra postura contraria a uno y a otro.

Voy a comenzar por el veto del Grupo Parlamentario Popular, en cuya justificación se señala algo que ya ha rectificado el senador Muñoz-Alonso desde la tribuna: Que es una ley innecesaria porque no hace falta una norma con rango de ley; que es una ley irrelevante porque introduce derechos sin contenido alguno; que es una ley falsaria porque rompe el espíritu de concordia y de conciliación de la transición y el pacto constitucional del 78. En resumen, que es una ley que responde a una voluntad de manipular y tergiversar la historia desde posiciones políticamente interesadas.

Señorías, en la parte que me toca niego la mayor, la menor y cualquier nota intermedia entre tales afirmaciones porque no se ajustan a la realidad de las cosas, porque destilan una prepotencia que en ningún orden de la vida, y menos aún en política, estoy dispuesta a compartir y porque entiendo que se desautorizan por sí solas.

A mi entender, esta ley es oportuna y necesaria. No lo digo únicamente porque la ley de memoria histórica fuera un compromiso adquirido por el Gobierno socialista al comienzo de la legislatura, sino porque otras muchas fuerzas nos sumamos a ella y, además, porque en estos cuatro años ha supuesto una esperanza real para cuantos la vienen demandando desde hace décadas. No hay derecho a que a todos aquellos a quienes durante la transición se les dijo que no porque era demasiado pronto, ahora se les diga que tampoco porque es demasiado tarde.

¿Cómo calificar, desde la responsabilidad política que a cada cual de nosotros compete, una actitud como esta ante quienes han sido relegados al olvido oficial con todas sus consecuencias, primero, durante la dictadura y, luego, bajo el palio del orden constitucional? ¿Cobardía? ¿Irresponsabilidad? Pues yo diría que sí, si dejamos pasar la primera oportunidad real en estos últimos treinta años de aprobar una ley de esta naturaleza, porque estoy convencida de que, si no se aprueba en esta legislatura, señorías, no habrá ya ley de memoria histórica.

Desde luego, para esta portavoz y para su grupo esta ley no es innecesaria, como tampoco lo es para todos aquellos que han esperado forzosamente cuarenta años y generosamente —diría yo— otros treinta años más.

Porque pedir o exigir un adiós digno para quienes todavía hoy siguen, para nuestra vergüenza, enterrados en las cunetas no me parece que sea pedir demasiado, señorías. Pero quizá por eso hay quien dice como hacen ustedes, que esta es una ley inadecuada por excesiva y que hubiera bastado con un par de decretos, con algunas ordenes ministeriales o con unas cuantas resoluciones administrativas de menor rango.

Pero no entremos en cuestiones de carácter técnico, porque esta discusión no es técnica. Aquí, bajo el argumento de que el rango normativo de ley es excesivo para las víctimas de la violencia y de la represión franquista, late lisa y llanamente una razón política que afortunadamente no es la mía.

Una ley, señorías, tiene un valor simbólico que es especialmente pertinente cuando su contenido tiene, como sucede en este caso, un carácter reparador, de reparación pública, y eso es lo que se ha negado hasta ahora a una parte de las víctimas de la guerra y a todas las del franquismo. ¿Y ustedes son los que afirman que quienes apoyamos esta ley adoptamos una posición partidista e interesada y que utilizamos el pasado como elemento de enfrentamiento y arma política? Porque eso es lo que han dicho. Yo entiendo que el espejo tiene dos caras, y su actitud refleja, como también la mía, la posición política y partidista que preferimos.

Tampoco es esta una ley irrelevante o inútil. Introduce derechos, señorías, y establece obligaciones. Con esta ley se ponen en marcha toda una serie de medidas e instrumentos concretos que no responden a un debate jurídico, sino a una cuestión de pura justicia; un abanico de medidas que van desde el reconocimiento de determinadas prestaciones económicas allí donde no han llegado las que ya han sido efectivamente aprobadas o que complementan

estas, hasta abordar expresamente el tema de las exhumaciones, que no es algo en absoluto baladí.

Queda establecida por primera vez la obligación de las administraciones públicas, empezando por el Estado, de impulsar la búsqueda de los restos e intervenir en la exhumación de las víctimas de la guerra civil y los represaliados de la dictadura que, como decía, permanecen enterrados en cunetas y fosas sin nombre, porque hasta la fecha han sido los particulares, los descendientes y familiares de los ejecutados y de los desaparecidos, las asociaciones que los representan y el buen hacer de contados funcionarios de ayuntamientos y tribunales quienes han venido llevando a cabo, con no pocas dificultades, y en ocasiones en el más absoluto desamparo y sorteando siempre todo tipo de críticas, una tarea que solo a la Administración que a todos nos representa correspondía. Por primera vez esta gente tiene el aval de una ley.

Y es verdad que esta ley ampara a las familias de los miles de personas que yacen en estas fosas, a ciudadanos que quieren saber dónde están sus padres, hermanos o abuelos, que quieren recuperar sus restos, a quienes quieren honrar la memoria de sus familiares que padecieron una violencia injusta, a muchas asociaciones, y que tal vez en atención al número de afectados no sea una demanda mayoritaria, pero a mi entender es una demanda justa como pocas pueden serlo. Y aun cuando solo fuera por ello, esta es una ley necesaria que dignifica nuestro quehacer parlamentario.

Hay unas novedades que también reconoce esta ley y que nosotros valoramos positivamente, como es, por ejemplo, el ofrecer unos criterios generales de actuación sobre símbolos y monumentos públicos relacionados con la guerra civil y con la dictadura, evitando exaltaciones de valores antidemocráticos, proclamando la obligación de retirar cuantos elementos hubiera de esta índole y excepciones que vendrán solo determinadas por ley. Un ejercicio de confianza en la prudencia y sentido común con el que deben actuar las instituciones, y a nadie debería extrañar esta apelación a la prudencia y a la cordura, porque a mi entender no es prudente ni acertado mantener en pie, por ejemplo, una estatua ecuestre del general Franco, hincada la rodilla en tierra, en una plaza pública cualquiera —realmente no tan cualquiera, porque están donde están, y ahí siguen— bajo la premisa de su valor artístico o el valor histórico de la figura del caudillo. Aquella administración que ahora defiende tal cosa deberá justificarlo mucho, algo que hoy por hoy no tiene por qué hacer.

Igualmente me parece correcta la apelación directa del proyecto a garantizar el acceso universal a los archivos históricos con matices que más adelante explicaré, puesto que son objeto de la única enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario a este proyecto.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, entiendo que ustedes nieguen valor a esta ley no por los derechos que no reconoce, como dicen ustedes, sino precisamente por todo lo contrario, por todos aquellos derechos y por las muchas obligaciones que definitivamente quedan respecti-

vamente reconocidos y establecidas, y por ello mi grupo parlamentario vota a favor de la ley y el suyo la veta. Tal vez ello sea una simple cuestión de matiz.

Finalmente, dicen ustedes que esta es una ley que rompe el pacto de convivencia de la transición que —y cito textualmente la justificación de su veto— cerró una larga historia de divisiones y enfrentamientos entre españoles, y sobre todo cerró las heridas de la guerra civil y de la dictadura. Una frase rotunda y rimbombante, pero no por ello veraz, que resume clamorosamente el afán de algunos en negar lo evidente: que la historia de este país no comienza con la Constitución de 1978, que hay vida y memoria más allá de la transición y que solo quienes sufrieron la tragedia de la guerra civil y padecieron las consecuencias de la dictadura tienen autoridad moral suficiente como para sentenciar que sus heridas se cerraron definitivamente; ni la Constitución de 1978, ni los constituyentes, ni el Partido Popular, ni el Gobierno socialista, ni ustedes ni yo, solo las víctimas, señorías, y parece mentira que en este país haya todavía vencedores de primera y víctimas de segunda.

Una ley, señorías, que ha experimentado una sensible transformación, consecuencia de las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios y de un intenso esfuerzo colectivo en busca del mayor grado de consenso posible, no es una ley que rompe, es una ley que suma. Una ley cuyo objetivo es avanzar en el proceso reparador y del conocimiento oficial de la dignidad y los derechos de las víctimas y represaliados de la guerra civil y del franquismo no es una ley interesada, es, por el contrario, una ley necesaria, útil, relevante y que dignifica el Estado de derecho.

En lo que se refiere al veto defendido por Esquerra Republicana, he de manifestar que compartimos su punto de partida, que era idéntico al nuestro, frente al texto inicialmente propuesto por el Gobierno. Pero senador Bofill, el texto que ahora debatimos es sustancialmente distinto a aquel primitivo. De otra forma nosotros nunca lo hubiéramos apoyado, y lo que no procede, a mi entender, es mantener una idéntica actitud cuando las condiciones varían.

En este contexto, solamente quisiera explicar nuestra posición en la cuestión en la que ustedes han puesto más énfasis y en cuya valoración nosotros no coincidimos, me refiero al pronunciamiento expreso sobre la ilegalidad de la sentencia de los tribunales franquistas y la revisión de los procesos judiciales. El texto de la ley ha optado por proclamar la ilegitimidad de dichas resoluciones, así como la de los órganos que las dictaron, y sinceramente a esta portavoz no le parece una mala solución.

La proclamación jurídica de la rotunda ilegalidad de dichas sentencias es algo que a mí conceptualmente no me produce reparo alguno, pero una Cámara parlamentaria no está para ir más allá de lo que debe en atención al principio indiscutible de la separación de poderes que informa todo Estado de derecho. Que un Parlamento declare de plano la ilegalidad de resoluciones judiciales es cuando menos, a mi entender, jurídicamente discutible. La dimensión política de este debate ya es otra cosa y es otra tam-

bién la vara de medir, y en el ámbito de lo político el alcance de una declaración general de ilegitimidad, precisamente aquella por la que finalmente la gran mayoría del arco parlamentario ha optado, corre parejo al de la plena ilegalidad.

Entornamos con esto una puerta que antes tenía irremediablemente echado el cerrojo y otorga un nuevo estatus para aquellos quienes opten por acudir a los tribunales en demanda de nulidad de los procedimientos y de las resoluciones que decretaron su condena. Porque la declaración expresa de ilegitimidad de las resoluciones dictadas por los tribunales de la dictadura y la derogación expresa de las leyes ad hoc supone la declaración de condena más enérgica que nunca haya hecho este Parlamento, lo cual tiene trascendencia política, pero tiene también trascendencia jurídica. Senador Bofill, por lo menos es mi opinión.

Yo entiendo que la noción de ilegitimidad es un término asentado en la jurisprudencia que, aplicado al caso que nos ocupa, se identifica con la ausencia de garantías y características de un juicio justo, y al proclamarse expresamente además que todos y cada uno de los órganos represivos de la dictadura eran contrarios a derecho, estamos afirmando, señoría, de facto su radical ilegalidad; e invocar el derecho internacional, que ahí está para eso, singularmente el artículo 6 del Convenio de Roma, la disposición adicional segunda y el artículo 3 de la ley, nos permite acudir a los tribunales, nacionales e internacionales, instando a la nulidad de aquellas resoluciones y de los procedimientos de los que estas traen causa...

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.

La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Termino, señoría.

...sin que puedan invocarse ya nunca más leyes franquistas, como así se ha hecho desde diferentes salas del Tribunal Supremo en muchas ocasiones, para resolver negativamente una demanda de nulidad de las sentencias y demás resoluciones dictadas a su amparo.

Convengo con usted en que la Administración debiera garantizar el acceso a la justicia gratuita para todo aquel que quiera la revisión judicial, pero eso es un debate que hoy ya no nos toca y seguramente competirá a quienes se sienten en estos escaños la próxima legislatura. Por eso decía, y termino ya, que esta ley es, a mi entender, un punto de inflexión, pero sobre todo es un punto de partida, porque todavía queda mucho por hacer, no obstante lo cual la balanza se decanta indubitablemente hacia los aspectos positivos de la ley.

Vamos a votar en contra de los dos vetos. *(Aplausos.)*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo de Entesa, tiene la palabra el senador Molas.

El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor presidente.

Espero conseguir que mi intervención no sea emotiva ni intimista y tratar en concreto del objeto que nos trae aquí. Tampoco va a buscar una adhesión entusiasta de nadie. Voy a intentar razonar por qué esta ley es necesaria, por qué esta ley es oportuna, por qué esta ley es relevante y por qué es leal y noble. Y no intentaré definirlo como negativo, pero algo negativo sí hay en alguna de las razones que ha expuesto el respetado senador Muñoz-Alonso en su intervención tanto aquí como en comisión.

Que es relevante lo prueba el hecho de que haya beneficiarios nuevos que no están contemplados. Usted puede decir que no es adecuada, pero irrelevante, no. Es relevante porque hay derechos nuevos consagrados jurídicamente en esta ley. Por tanto, no diga que es irrelevante.

Usted dice que no es necesaria y al mismo tiempo dice que no ponen objeciones ni enmiendas a las reparaciones. Cierto, pero si no lo hacen no me diga que no es necesaria porque no creo que voten a favor de algo que consideran innecesario. No es ni engañosa ni dañosa porque solo establecen derechos, y los derechos no dañan. Moderación, incluso, en el uso de las palabras.

Si esta ley resuelve problemas que existen, es necesaria y oportuna; si establece situaciones nuevas, es relevante, y si establece solo derechos, no es ni dañosa ni engañosa. Todos tenemos derecho a saber, todos los españoles, los afectados, los allegados, todos tienen derecho a saber y a enterrar a sus muertos, y la lápida en el cementerio va a ser el único monumento que va a recordar su nombre y que han existido, y tienen derecho. Todos tienen derecho a la reparación moral. Todos los afectados tienen derecho a una indemnización económica —no todos lo han querido—. No es ninguna arma arrojada, ni lo fue la otra ley, es una reparación pública que llega hoy, y una reparación no es nunca un arma arrojada. ¿Quién se ha sentido lesionado personalmente por este proyecto de ley para decir que es un arma arrojada? Todos tienen los derechos que puedan establecerse en esta ley y que se consideren convenientes, y nosotros tenemos el deber de cerrar heridas, si es que estuvieran abiertas, de solucionar problemas, que sí existen, y de avanzar en el reencuentro de 1977, reencuentro que no tiene vuelta atrás, que no debe tener vuelta a atrás, y, por lo tanto, debe haber plena conciencia de que lo que pasó pasó y se repara, pero que aquello no debe volver a pasar. Ese es el mensaje de la transición. Nadie va a definir un mensaje de la transición como no haya una memoria histórica. Fue un acuerdo entre sectores distintos que hicimos un pacto para construir juntos el futuro, a pesar de todo, sin olvidar, aunque eso no iba a marcar nuestro futuro. Este es el supuesto básico de la transición. Por tanto, no es un proyecto hipócrita, no esconde nada, sino que lo dice todo. Dice lo que tiene que decir. No hay una posición torticera por parte de nadie, ni por mí, ni por la ley, ni por los que la defienden, ni por los que la combaten. Es leal, y la oposición efectúa una crítica también leal, seguramente un poco tremendista —a veces el tono hace la música más que las notas—. Y mi pregunta sería: ¿no se está ponderando excesivamente

como consecuencia de una exageración surgida no se sabe dónde? Yo no confío mucho en los mensajes de Jehova desde el Sinaí, creo que no son buenos, sobre todo cuando lo que hay es simplemente una ley que no ataca a nadie, que concede derechos a gente que no los tiene y que, además, consideramos que son legítimos, al menos desde mi punto de vista y espero que también desde el punto de vista de sus señorías. Se trata de recordar sin rencor, de cerrar lesiones sin herir de nuevo, de reforzar el reencuentro, de no utilizar el pasado como arma —sí, señorías, no vamos a utilizar el pasado como arma, ni ustedes ni nosotros, nadie— y de no dejar de criticar aquello que consideremos contrario a lo que hemos construido juntos, que es un Estado de derecho, algo que no había antes; y ustedes y nosotros tenemos el derecho y la obligación de decir que aquello no era un Estado de derecho y que, por tanto, las decisiones podían ser, y en algunos casos lo eran, claramente ilegítimas, contrarias a la conciencia recta de los demócratas, de los liberales y de los partidarios de la razón y de la convivencia pacífica. Por eso hicimos una Constitución en la que cupieran todos. Todos cabemos en la Constitución, cada uno con su pasado, cada uno con sus quereres y cada uno con sus amores, para que el marco fuera conjunto y así permitir todas las memorias personales.

La Constitución ampara a todos, incluso a aquellos que no creen en ella. Esa es nuestra grandeza, esa es la grandeza de lo que concebimos en 1977. Y, efectivamente, en el año 2002 hubo una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que fue una demostración clara de que no había odios ni revanchas por parte de nadie, de que había una voluntad de concordia bajo una misma Constitución; y no era ningún revisionismo —porque hay revisionismos de todas partes—, pero corresponden a quienes deban hacerlos, que son los historiadores, los ideólogos, los estetas y aquellos que quieren vivir de quienes les paguen para decirlo, porque no todos los que dicen que son historiadores lo son.

Quiero subrayar —y me permitirán quizá un posicionamiento individual— que esta ley permite que recordemos la grandeza de quienes han practicado los derechos humanos cuando estos estaban prohibidos. Algunos nombres serán recordados por historiadores, algunos nombres son muy importantes y marcan mucho la historia posterior de España, pero sólo quiero recordar los nombres anónimos —como decía Prieto, los hombres sin nombre—, aquellos que practicaron los derechos humanos en condiciones contrarias, que practicaban el derecho de asociación cuando estaba prohibido, que practicaban el derecho a hablar en público y de criticar cuando estaba prohibido, aquellos que defendían lo que no estaba permitido que se equiparaba a delito, aquellos que simplemente querían un régimen de libertad y democracia. Nadie sabrá sus nombres, la historia no los va a recoger a todos, pero España ha de saber que esta gente ha existido y que ha practicado la libertad y que, por ello, muchos sufrieron cárcel, destierro, consejos de guerra, fusilamientos. Los historiadores ya dirán quién tiene razón, quién está en posesión de la

verdad, cuál es la posición dominante. Nosotros debemos favorecer el avance del régimen de convivencia establecido, y, en mi opinión, esta ley contribuye a ello, y hemos de favorecer también que las peticiones legítimas y justas a nuestra democracia, apelando al sentido fundacional de nuestra democracia, deban ser atendidas.

Este es el contenido principal de la ley, el resultado de un imperativo moral de la sociedad: que cada uno pueda tener su propio criterio sobre lo que está bien y lo que está mal, pero recordando el carácter injusto de las condenas, sanciones y violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, no sólo en la guerra de los tres años —una de las diversas guerras civiles que ha tenido nuestro pasado—, sino también durante la dictadura.

El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.

El señor MOLAS I BATLLORI: Acabo enseguida, señor presidente. Muchas gracias.

Y en algunas partes de ese Estado, de un Estado de guerra que en un tiempo oficialmente era un Estado de paz.

No vamos a hablar de los temas que ya han acabado. La amnistía se llevó a cabo, se acabó, no hay persecución posible hoy en día por estas razones, pero no se trata de eso, no es un tema de amnistía. Me gustaría llevarles al convencimiento de que no es un tema de amnistía. Para mí lo más importante es que entiendan que el escarnio del derecho no puede basar un Estado del derecho recto; el escarnio del derecho debe ser denunciado como un escarnio, y, por ello, porque esto refuerza nuestra democracia y nuestro Estado de derecho, es necesario afirmar conjuntamente la existencia de unos juicios ilegítimos, con unas ilegítimas condenas y sanciones, y la existencia de tribunales, jurados y órganos penales y administrativos ilegítimos, porque eso forma parte de la aceptación de la legitimidad de lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, y el reforzamiento de que la convivencia es cada vez más intensa para mirar hacia adelante y no confundir lo ilegítimo con los tribunales de justicia.

Por tanto, el derecho a la declaración de reparación y al reconocimiento personal es uno de los elementos más fuertes de esta ley, porque esta ley se fundamenta en la defensa de la dignidad de los españoles, confirma nuestra voluntad de reforzar su convivencia en libertad y de defender una España con futuro y con orden, capaz de mirar atrás sin miedo ni encono y de mirar hacia delante con libertad y fraternidad. Por ello, votaremos en contra de los dos vetos presentados.

Gracias, señor presidente. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Granada.

La señora GRANADO PANIAGUA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan esta tarde en la tribuna.

Han pasado más de treinta años y todavía se producen ante nuestras instituciones reivindicaciones justas y razonables. No voy a cuestionar para nada nuestra transición, todo lo contrario, pero nuestra democracia de las décadas de los ochenta y los noventa confundió en exceso, perdón, con olvido, a pesar de que los sucesivos gobiernos democráticos de cualquier signo establecieron medidas para restañar las heridas, lo cierto es que millones de españoles, perdedores y sufridores de la guerra y de la represión posterior de la dictadura, lloran en silencio a sus seres queridos.

Porque, señorías, quedan pendientes muchas causas de justicia para quienes defendieron el Gobierno legítimamente constituido de 1936 y la libertad, la justicia y la democracia durante los terribles años que duró la dictadura: desde la identificación y localización de fosas comunes a la exhumación de sus restos, desde la apertura total de archivos para la investigación y documentación particular hasta el reconocimiento de las enormes injusticias cometidas en los juicios sumarios, incluso la ausencia de reparación para quienes encontraron la muerte en los años del tardofranquismo, ejercitando derechos que posteriormente reconocía nuestra propia Constitución; y también la deuda contraída con los miles de hombres, mujeres y niños que sufrieron el desgarramiento del exilio, el abandono obligatorio y forzoso de su patria por la que habían luchado y con sus descendientes, a los que esta ley trata de hacer justicia reconociéndoles la nacionalidad española y que hoy nos acompañan. Gracias por haber mantenido vivo el recuerdo y el amor a España que vuestros padres y abuelos os inculcaron.

Es en este contexto, señorías, para dar respuesta a estas situaciones de olvido e injusticia, en el que el Gobierno presentó este proyecto de ley; proyecto de ley; que rechaza impulsar una determinada memoria histórica colectiva, pero que protege el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de una plena ciudadanía democrática.

Este proyecto de ley, tras su paso por el Congreso de los Diputados y el enorme esfuerzo de integración de la mayoría de los grupos parlamentarios, ha sufrido importantes modificaciones que han mejorado sustancialmente el contenido inicial del proyecto que presentó el Gobierno. Gracias, por tanto, en nombre de mi grupo, al trabajo y al esfuerzo de todos los grupos parlamentarios. Este proyecto responde a un mandato parlamentario contenido, por un lado, en la moción que se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002 y, por otro, en la proposición no de ley de 2004. También responde al informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se firmó en París el 17 de marzo de 2006, en el que se enunciaban las graves violaciones de derechos humanos que se habían cometido en España entre los años 1935 y 1937. Se basa en la necesidad de establecer públicamente el valor de la memoria de todas aquellas personas que sufrieron injusticias provocadas por la violencia que tanto dolor y sufrimiento causó en nuestro país. Esta ley trata de reparar públicamente el honor y la dignidad de los españoles y españolas que, durante lar-

gos años, han sufrido la tremenda injusticia de ver cómo no se recuperaba la memoria ni el respeto a sus familias. Trata de establecer derechos y medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas, a todas las víctimas, lo hace completando la tarea que empezó en la transición, continuando la labor y el espíritu de la transición a la luz y sobre la base de valores y principios democráticos consagrados en nuestra Constitución, Constitución, señorías, que no todos defendieron o que no todos defendieron de la misma manera. No hay más que echar una ojeada a las hemerotecas para ver algún artículo periodístico de alguna provincia.

La transición, señorías, supuso la reconciliación de todos los españoles y la llegada de la Constitución y de la democracia a nuestro país, pero la reconciliación de la transición no nos obliga al olvido, no puede obligarnos. La memoria sin ira, sin afanes vengativos, no abre las heridas sino que las cierra. La recuperación personal de nuestra memoria histórica y familiar y la compensación consensuada de nuestras deudas con la historia nos hacen más fuertes en los fundamentos de nuestra convivencia. Quienes apostamos por la democracia y convivimos dentro de ella y creemos firmemente en los valores que representa tenemos el deber de proclamar la injusticia de todas las actuaciones que han desconocido la dignidad del ser humano y los derechos más elementales que le son inherentes. Como españoles y como demócratas, tenemos una deuda de gratitud con quienes defendieron, a pesar de las adversidades, los mismos valores de libertad, justicia y pluralismo político que hoy fundamentan nuestra convivencia.

Señorías, creemos que es necesario fundamentar nuestra convivencia y la memoria democrática en la verdad, en la justicia y en la reparación, superando el silencio y el olvido al que las víctimas de la represión y de la dictadura fueron sometidas. El hecho de posibilitar a muchos españoles y españolas y a sus familias recuperar la memoria personal y proclamar la dignidad de su conducta, si así lo desean, es un acto de justicia que nos honra a todos y a todas. Estamos ante una ley que posibilita que las víctimas se encuentren con su historia, con su memoria personal, una ley que pretende simplemente hacer justicia, compensando a las víctimas de la guerra y de la represión por un régimen criminal, que no de placidez, que duró cuarenta años.

Esta ley, señorías, llega hasta donde es posible llegar, sin menoscabar las bases de nuestra convivencia, y ajusta las últimas deudas con nuestra historia, sin reabrir la herida que atravesó las entrañas de nuestro pueblo. No es una ley contra nadie, ya se ha dicho esta tarde aquí, es una ley para alguien: para los que defendieron los valores de justicia, de libertad y de solidaridad y para los que se quedaron atrás sin el disfrute de sus derechos fundamentales. Nada, señorías, nada hay en esta ley que un demócrata no pueda aprobar, ni por exceso ni por defecto. Las víctimas tienen necesidad de ese reconocimiento, lo necesitan, y nosotros como demócratas tenemos la obligación moral de posibilitárselo. Por eso, incluye medidas que han solicita-

do unánimemente los colectivos que agrupan a los afectados, medidas que son justas porque, a pesar de que desde 1979 se han puesto en marcha muchas medidas y acciones, aún quedan muchas situaciones por resolver, a las que quiere dar respuesta este proyecto de ley; una ley, señorías, que va a permitir que cada español que así lo sienta pueda conocer su historia personal y la de su familia, que se le reconozca la injusticia que padeció, que se le restituya el honor que injustamente se les ha arrebatado por un régimen político en el que las palabras democracia y perdón no tenían cabida.

Sabemos que, para una parte de sus señorías, el reconocimiento legal de todo esto no les parece relevante, pero a mi grupo, al Grupo Parlamentario Socialista, sí, igual que a muchos españoles que han sufrido persecución y violencia y, también, cómo no, a muchos ciudadanos y ciudadanas anónimos que simplemente se sienten demócratas les parece relevante esta ley.

Desde mi grupo en ningún momento hemos mantenido que la transición se basara en el olvido o en la amnesia, ni que se silenciara lo que ocurrió, todo lo contrario. Recordar y valorar el papel de la transición a la democracia, recordar y valorar el papel que la transición ha significado en la recuperación de la memoria no significa que no quede nada por hacer ni que todo lo que se hizo sea inamovible. Sencillamente, señorías, entendemos que todavía queda un camino por recorrer y es el que ahora tratamos de hacer, y si fuera posible juntos, sería mucho mejor.

Es un proyecto que reconoce que la guerra y la dictadura fueron dos fuentes de injusticia, que los ciudadanos encarcelados, torturados y desaparecidos durante este periodo lo fueron injustamente. Es un proyecto de ley del derecho a la memoria individual y familiar, no una revisión oficial sobre una historia reciente y que otra mayoría parlamentaria pudiera cambiar. No hace ni revisa ni reinterpreta la historia, como algunos pretenden hacer ver, eso, señorías, corresponde a los historiadores. La historia está escrita por quienes pueden y deben hacerlo, los historiadores, los de verdad, los que lo hacen con rigor, no los falsarios que tratan de retorcerla con una visión torticera de la realidad y que tanto gusta a algunos.

Nuestro objetivo no pasa por distorsionar los hechos ni por reivindicar batallas para que la izquierda gane lo que entonces perdió. La guerra la ganó quien la ganó —los sublevados contra el Gobierno legítimamente constituido— y la perdieron los que representaban la legalidad democrática. Eso, señorías, es la historia y eso, aunque quisiéramos —que no es el caso—, no lo podemos cambiar. Además, les aseguro que si hoy quisiéramos cambiar la historia, no lo haríamos para cambiar el nombre de los vencedores ni de los vencidos, sino que lo haríamos para impedir la guerra y la dictadura y evitar con ello el sufrimiento de nuestro pueblo.

Es una ley que no resta, todo lo contrario, suma; suma derechos y acciones a lo que ya hay hecho; suma, no resta, porque continúa el camino iniciado desde el comienzo de la transición a favor de las víctimas desde un espíritu de concordia y de reconciliación.

Esta ley se hace necesaria porque tenemos un pasado en el que muchas personas fueron condenadas a la muerte, a la represión, a la dignidad y al olvido; porque es necesario que se les recuerde como lo que eran, por lo que fueron, no como se les calificó de manera arbitraria en esa sentencia y resoluciones injustas dictadas por tribunales sin prueba ni garantías; sentencias injustas que despojaron de su dignidad a hombres y mujeres inocentes que quieren recuperar —y lo van a conseguir con esta ley, aunque sea demasiado tarde— el reconocimiento...

El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.

La señora GRANADO PANIAGUA: Voy terminando, señor presidente.

Como decía, que quieren recuperar el reconocimiento de su honor y la dignidad que les arrebataron, pero que no perdieron, porque, señorías, la dignidad no se pierde, no puede perderse por luchar por la justicia, la libertad y la democracia.

Con este proyecto de ley se pretende sencillamente que desde la legalidad democrática en que se basa el pacto de la transición demos satisfacción a muchas personas y les ayudemos no a abrir sino a cerrar sus heridas. No hay ni una sola disposición, ni una sola, en esta ley que rompa el pacto constitucional por el simple hecho de reconocer y hacer justicia, de reconocer dignidad y derechos donde había olvido y falta de justicia.

En nombre de mi grupo, del Grupo Parlamentario Socialista, agradezco a todos los grupos políticos su esfuerzo para mejorar esta ley y el apoyo que la mayoría de sus señorías van a darle.

Termino. Me siento orgullosa como socialista y como extremeña, ya que mi tierra, señorías, tiene el triste privilegio de ser una de las que más —sino, la que más— duramente fue castigada, de participar en la defensa de este proyecto de ley, proyecto que entiendo y entiende mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, necesario, relevante y que responde a un acto de justicia. Con esta ley damos un paso importante en el reconocimiento del sufrimiento de tantos y tantos españoles que, con su sacrificio, su silencio y su generosidad, han hecho posible que hoy estemos viviendo los mejores años de nuestra historia y se cumpla, por fin, el deseo de tantos hombres y mujeres vilmente asesinados de que su nombre no se borre de la historia.

Termino. La reconciliación no nace del olvido, sino del recuerdo, del recuerdo sereno y sin rencor de la parte más terrible de nuestra historia de siempre para que nunca más, jamás vuelva a repetirse.

Gracias. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, una buena parte del debate que hemos escuchado aquí esta tarde viene a darme la razón en lo que yo he planteado desde el principio, que no hay que reabrir heridas del pasado y que hay que seguir apostando por la reconciliación que significó la transición. Y si nos descuidamos un poco, aquí habríamos empezado a tirarnos unos a otros los muertos a la cara, porque han hablado de algunos muertos y... Desgraciadamente, muertos ha habido en todas las familias, yo creo que todos tenemos a alguien más o menos lejano o próximo víctima de aquellos terribles acontecimientos. Hoy mismo me decía un senador de mi grupo que sus dos abuelos —el paterno y el materno— habían sido asesinados, uno por un bando y el otro por el otro bando. Eso es común, y por eso la transición llegó a la conclusión de que íbamos a dejar de arrojarnos cadáveres a la cabeza.

Me preguntaban aquí en otro debate hace año y medio: ¿Y los muertos en la cuneta? Y dije: Desgraciadamente, las cunetas están a la derecha y a la izquierda. Hay muchas cunetas en nuestro país, y la transición, no por ningún malentendido olvido, sino con un afán de concordia y de reconciliación, llegó a la conclusión de que lo mejor era dejar eso atrás.

Hoy he oído aquí unas cosas que no puedo en absoluto compartir. Haría dos excepciones: el senador Casas, que ha hecho una gran aportación de sensatez y de sentido común, que creo que es muy de agradecer, y el senador Molas, que ha expuesto un discurso muy bien montado desde el punto de vista racional pero que en algunos momentos llegaba a conclusiones que yo no podría aceptar en ningún caso. El senador Molas hablaba de la Constitución y del consenso en que se basó y conectaba de alguna manera este proyecto de ley con la Constitución. Me parece una buena idea, por eso, suponiendo —que es mucho suponer, porque ya he dicho que pienso de otra manera— que esta ley hubiera sido necesaria, tendría que haberse basado en un amplísimo consenso. El Gobierno en ningún caso debería haber enviado una ley de estas características sin haberse garantizado previamente ese consenso amplísimo, en el que, evidentemente, todos teníamos que haber estado incluidos. Pero no ha sido así, y su propia trayectoria en las dos cámaras lo demuestran, sobre todo en el Congreso de los Diputados, porque aquí llega con un hay que decir amén y no me toquen ustedes ni una coma porque no se puede aceptar, que ya no da tiempo. Así nos llega esta ley. ¿Para qué estamos aquí reunidos? Este debate no vale absolutamente para nada, no se va a modificar ni una coma, ni un acento, porque ya está previsto que se haga así. La trayectoria tan larga en el Congreso de los Diputados lo demuestra, porque esta ley, que no obedece a ningún tipo de consenso, sino más bien a un capricho presidencial —creo que está bastante claro—, a lo largo de esa trayectoria ha ido perdiendo —como un árbol al que van podando— hasta el título, porque inicialmente se llamaba Ley de la Memoria Histórica y ya ni siquiera se llama así; ya no sabemos de qué estamos tratando. Se ha convertido en una ley —insisto— que no tiene ningún sentido, y no lo tiene no porque no sean res-

petables los casos personales —lo he dicho— que pudieran existir sin ser debidamente atendidos, sino porque en primer lugar, creo que hay vías suficientes en el ordenamiento jurídico para atender esas reivindicaciones y, en segundo lugar, si diera la casualidad de que hubiera casos que no están, y se pudieran demostrar, como ha dicho el senador Casas, se podrían haber resuelto por la vía del decreto de una manera clarísima y plenamente satisfactoria. Pero esta ley tenía otros objetivos políticos latentes y no manifiestos, y de eso es de lo que menos hemos hablado aquí esta tarde —creo que yo he sido el único que ha hablado abiertamente de ese asunto—. No me hablen ustedes de las víctimas y de los justos derechos porque estoy claramente de acuerdo.

Lo primero que diría es lo que dijo el portavoz de mi grupo parlamentario en el Congreso. Lo leo literalmente y lo suscribo: El Partido Popular ha ofrecido siempre su impulso y apoyo para llevar adelante cuantas medidas pudieran resarcir a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura en la convicción de que no debía existir ningún español, ninguno, que pudiera verse desatendido en sus derechos como consecuencia del pasado. Y esa seguirá siendo nuestra posición en todo lo referido a la reparación de las víctimas, y a ello seguimos estando dispuestos y abiertos.

Lo que pasa es que para ese nobilísimo fin entendemos que no era necesaria esta complicada ley, que hasta ha perdido el título. Ha perdido el título, y le han puesto uno larguísimo, que no voy a leer porque sería perder el tiempo, que ya no sabemos muy bien a qué atiende; y hay un montón de artículos: los que hacen referencia al Valle de los Caídos, a los símbolos y monumentos públicos, a la adquisición y protección de documentos sobre aquel período, que nos preguntamos qué tienen que ver con los derechos. La verdad es que no tienen nada que ver directamente con los derechos, lo cual demuestra que esta ha sido una ley que se ha ido improvisando, improvisada al principio, en su nacimiento, y reimprovisada continuamente porque el Gobierno se tenía que ir adaptando a las peticiones de los grupos que le apoyan, con los que tampoco parece ser que la había consensuado. Desde luego, con nosotros no.

Y nos encontramos con lo que yo decía al principio, cuando defendía el veto: con una ley innecesaria, inútil e incluso hipócrita. Lo pienso, y no me arrepiento del adjetivo, por duro que pueda parecer, porque considero que es una ley que no dice la verdad de lo que quiere. Es una ley que no tiene ningún sentido y que está produciendo muchos efectos negativos en la sociedad española. Ya hay una buena colección de documentos en las hemerotecas —seguro que yo no los tengo todos— sobre esta ley que demuestran una enorme división de la sociedad española que nos podíamos haber ahorrado, una división que ha trascendido, por supuesto, lo estrictamente parlamentario y hasta lo estrictamente mediático, porque ha llegado a sectores de la sociedad a los que normalmente nuestros debates no suelen llegar, seguramente por desgracia. Y que lleguen en este caso, la verdad es que me sorprende mucho.

El senador Molas decía que le parecía muy bien esa declaración de reparación y reconocimiento personal. Yo

no voy a decir que me parezca mal; respeto, por supuesto, la dignidad de todas las personas. Pero el artículo que se refiere a esa declaración, después de cinco detalladísimos párrafos dedicados a cuestiones puramente procedimentales, acaba diciendo que la declaración no dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. Entonces, ¿para qué está? ¿Para ponerla en un cuadrito? Seamos serios; todo el mundo tiene una dignidad, y a nadie le hacen falta papelitos para que le sea reconocida. Y en lo que hace referencia a indemnizaciones u otro tipo de derechos, siempre estamos dispuestos, pero no organicemos el lío que han organizado ustedes con esta ley para un objetivo deseable, que podíamos haber conseguido de manera clarísima, sin tanto lío, insisto, y sobre todo sin tanta discusión.

Y se vuelve a hablar de olvido, pero es que no lo hay. ¿Cómo va a haber un olvido de todo lo que pasó en España en los años treinta y siguientes si, como dicen los historiadores, y no hace mucho el historiador Santos Juliá, nuestra guerra civil es, junto con la II Guerra Mundial, la que más bibliografía ha producido de toda la historia? ¿Qué olvido es ese? Lo conocemos muy bien, y cada historiador aporta lo que aporta; y tampoco voy a empezar a justificar a unos historiadores porque me parezcan bien, y a otros no porque no me lo parezcan. A mí los historiadores que me convencen son los que trabajan con documentos. Y excluir a los que no nos gustan, aunque trabajen con documentos, me parece sencillamente impresentable.

Termino diciendo que, en contra de lo que decía el senador Molas —siento haber personificado en su señoría la intervención, pero lo hago con todo respeto, como usted bien sabe—, esta ley tiene mucho de arma arrojadiza. Quizá a primera vista pueda no comprenderlo, pero yo creo que así es, y nos lo podíamos haber evitado. Precisamente por esa convicción, nosotros hemos presentado este veto. Y me parece sencillamente lamentable que se digan aquí cosas como: Ustedes siguen siendo nostálgicos del franquismo. Permítanme que lo diga en la Cámara: son solemnes estupideces; a mí que no me hablen de antifranquismo, que me lo sé muy bien, porque yo era antifranquismo —ya lo dije en la comisión— cuando había que serlo. Y todos estos antifranquistas de ahora se dedican a lanzadas a moro muerto. Lo dije entonces allí: lanzadas a moro muerto. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Insisto, seamos serios y abordemos estas cuestiones en sus justos términos. Sencillamente, nos parece que esta ley no tiene razón de ser, y por ese motivo hemos presentado este veto.

Muchas gracias, señor presidente. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señorías, vamos a proceder a la votación de los dos vetos presentados.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores Bofill, Aragonès, Esquerda y Bonet. Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 248; a favor, cinco; en contra, 243.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 248; a favor, 117; en contra, 131.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalizado este turno, pasamos a continuación al debate de las enmiendas.

En primer lugar, señorías, tiene la palabra el senador Sampol. (*Rumores.*)

Señorías, silencio, por favor.

Señorías, estamos en el turno del debate de las enmiendas. Ruego silencio. Tiene la palabra el senador Sampol. (*Rumores.—El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.*)

El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a defender seis enmiendas, en coherencia con la intervención del debate anterior. (*Rumores.*)

En primer lugar, se propone en el artículo 3...

Señor presidente, tendré que esperar porque... (*Rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, un momento, por favor. (*Pausa.—Rumores.*)

Señores senadores, cuando ustedes gusten podremos proseguir la sesión. (*Pausa.—Rumores.*)

Señorías, cuando quieran ustedes podremos seguir, no hay prisa; la Presidencia no tiene ninguna prisa para que este debate se pueda desarrollar con todo el tiempo que se precise y, eso sí, con el silencio que ha de corresponder a todo debate.

Señoría, puede proseguir cuando desee.

El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señor presidente.

Decía que uno de los puntos débiles de este proyecto de ley es que, a pesar de que en él se declaran ilegítimos los consejos de guerra, los tribunales de orden público, etcétera, curiosamente no se anulan los actos derivados de esos tribunales ilegítimos y, por tanto, no se anulan taxativamente las sentencias promulgadas por ellos. Por ello, nuestra enmienda propone añadir que se anulen los actos dictados por esos tribunales. Eso permitiría que los secretarios de los juzgados, a petición de parte interesada, pudieran expedir certificados de nulidad de las sentencias condenatorias de determinadas personas o de sus familiares.

Otro tema que algún portavoz ha suscitado en el debate anterior es la indemnización a las víctimas que hubo a partir del 1 de enero de 1968. Pues bien, nosotros proponemos que sean indemnizadas todas las víctimas habidas a partir del 18 de julio de 1936, ya que se da la circunstan-

cia de que hubo víctimas durante toda esa época, es decir, desde el final de la guerra hasta prácticamente principios de los años sesenta, entre otras, por ejemplo, activistas antifascistas que, por cierto, en el Estado vecino, en Francia, serían considerados héroes nacionales aunque aquí son considerados como bandoleros. Me refiero más concretamente, por ejemplo, a los maquis, luchadores contra el franquismo y muchos de los cuales perdieron su vida. Pero por la fecha que se establece en el proyecto de ley quedan excluidos de las indemnizaciones.

En la enmienda siguiente proponemos que los descendientes directos de las víctimas que soliciten las indemnizaciones a que da lugar esta ley puedan delegar en personas físicas o jurídicas para que no sea necesario que soliciten personalmente los datos para la localización e identificación de las personas desaparecidas.

Y me voy a entretener en dos enmiendas referidas, a nuestro juicio, al punto más débil de este proyecto de ley. Este dice que el Gobierno del Estado colaborará con los familiares de las víctimas o con asociaciones para la localización de fosas comunes, la identificación y, si es necesario, la exhumación. Pero el Gobierno del Estado no puede delegar en familiares, en asociaciones, en particulares, en privados, una labor tan compleja. El Estado es el responsable y, por tanto, proponemos que el Gobierno del Estado elabore un plan de trabajo con objeto de localizar y exhumar fosas comunes, si eso fuera viable, y en el caso de que no fuera viable la exhumación, proceder a la dignificación de dichas fosas. Y eso, señorías, insisto en que no se puede delegar en particulares.

El senador del Grupo Popular que ha defendido el veto ha sostenido que con el ordenamiento jurídico actual es perfectamente viable que los familiares localicen las fosas y que procedan a la exhumación de restos y los entierren dignamente. Señorías, eso no es así por las trabas burocráticas existentes, aun para asociaciones que cuentan con juristas que de manera altruista están colaborando con ellas, que se encuentran con muchísimas dificultades para localizar las fosas, y no digo nada para la exhumación y mucho menos para la identificación de los restos, con algo añadido: el miedo que 70 años después amordaza a muchas personas que buscarían los restos de sus familiares y que por miedo, como digo, por un miedo totalmente justificable, no se atreven a ello. Insisto, pues, en que es el Gobierno el que tiene que acometer esa tarea.

Igualmente, en la enmienda siguiente proponemos que corresponde al Gobierno financiar la aplicación de métodos científicos para identificar los restos localizados. El método del ADN, al igual que otros métodos, es costosísimo, y ningún particular ha de acometer esa tarea y sufragar los gastos, aunque después puedan ser subvencionados parcial o totalmente. Esa es una tarea del Gobierno, aplicando métodos científicos, y repito que no puede delegar esta tarea en particulares, en asociaciones.

Finalmente, presentamos una enmienda muy sencilla a algo que se establece en el proyecto de ley: que las exhumaciones se hagan de acuerdo con la normativa sobre patrimonio histórico. Pues bien, señorías, la normativa sobre patrimonio histórico es muy restrictiva y en la prác-

tica supone unas tramitaciones burocráticas muy complejas, innecesarias cuando los restos no estén situados en un sitio que esté declarado de interés patrimonial. ¿Qué patrimonio histórico puede ser la cuneta de un camino, como aquí se ha dicho? Por tanto, el Gobierno tiene instrumentos, puede decretar protocolos de actuación, y cuando los restos estén situados en un lugar declarado patrimonio histórico sí se tendrá que cumplir con la normativa, pero cuando no lo estén no se habrá de estar sujeto a esas tramitaciones burocráticas.

Esto es todo, señorías. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.

Para defender las enmiendas presentadas por el senador Jorquera tiene la palabra el citado senador.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

El Bloque Nacionalista Galego participa del acuerdo al que han llegado distintos grupos en el Congreso para hacer posible esta ley. Estamos total y absolutamente de acuerdo con su necesidad, y aunque consideramos que es mejorable en muchos aspectos, somos leales al acuerdo suscrito en el Congreso; por eso no hemos presentado enmiendas, mejor dicho, hemos presentado una única enmienda que afecta a una cuestión que entendemos no es sustancial en la ley, que no tiene que ver con la memoria histórica propiamente dicha, pero que puede tener implicaciones jurídicas extraordinariamente relevantes. Me refiero, señorías, a lo que se regula en la disposición adicional séptima, apartado 2. La citada disposición adicional se refiere a la adquisición de la nacionalidad española, y el apartado dos dice textualmente: Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

Pues bien, señorías, quiero llamar su atención sobre varias cuestiones. Primero, el derecho que aquí se reconoce no está reconocido para el resto de los nietos de españoles; por tanto, entendemos que no tiene sentido reconocerlo para los nietos de aquellas personas que tuvieron la nacionalidad española y la perdieron por razón del exilio, cuando no lo está, como digo, para el resto de los nietos de españoles.

En segundo lugar, señorías, el Bloque Nacionalista Galego no es partidario de técnicas legislativas tales como que a través de un proyecto de ley se enmienden cuestiones que tendrían que referenciarse en otra ley. Señorías, las cuestiones de nacionalidad hay que tratarlas en el Código Civil. No es de recibo desde el punto de vista jurídico que a través de una ley de rango inferior, como es la de la memoria histórica, que no es una ley orgánica, se pretenda modificar una ley de rango superior. Además, entendemos que la extensión de la nacionalidad, si conlleva el ejercicio del derecho al sufragio, exige una regulación previa. En este sentido, el Bloque Nacionalista Galego ha denunciado en multitud de ocasiones que los actuales mecanismos de votación en el exterior no garan-

tizan el carácter libre y democrático del proceso, y entendemos además que no tiene sentido que se pueda votar simultáneamente, en el caso de personas con doble nacionalidad, en dos países a un tiempo.

Por ese motivo, señorías, presentamos una enmienda a la disposición final segunda, la número 35, del BNG, con la que se pretende acotar la entrada en vigor del proyecto de ley en lo que se refiere a lo regulado en la disposición adicional séptima, apartado 2, haciendo el siguiente añadido: La presente ley entrará en vigor..., salvo lo relativo al derecho al sufragio de los ciudadanos a que hace referencia el apartado segundo de la misma, que entrará en vigor cuando se apruebe una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que establezca la regulación de las condiciones de ejercicio del citado derecho.

Pensamos que por la transparencia y el carácter democrático de la votación en el exterior es necesario aceptar esta propuesta; pero, además, jurídica y políticamente...

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya concluyendo.

El señor JORQUERA CASELAS: ...tiene toda congruencia, porque no se puede extender la nacionalidad en una ley que no tiene ese objeto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.

Por el Grupo Parlamentario Mixto también han presentado enmiendas el senador Urrutia y el senador Tuñón. En primer lugar, tiene la palabra el senador Urrutia.

El señor URRUTIA ELORZA: *Eskerrik asko*, señor presidente. *Arratsalde on*, señorías.

Nos encontramos ante un proyecto de ley del que Eusko Alkartasuna esperaba bastante más. Teníamos grandes esperanzas de salvar la memoria colectiva y reivindicativa de aquellos que habían sufrido los rigores y los horrores de la guerra y todos los problemas de la dictadura franquista, así como de sus familiares y allegados; pero, al final, creo que este proyecto de ley ha quedado bastante desfigurado y un poco desnaturalizado, además de haberse aplazado más de un año.

Por eso, desde Eusko Alkartasuna hemos presentado 18 enmiendas con el fin de reforzar una serie de puntos que nos parecen imprescindibles para que en el devenir de esta ley, cuando se analice y se aplique, queden las cosas bien claras.

Empezamos por el título. Hemos querido reforzar la idea de la memoria colectiva, de la memoria reivindicativa, al objeto de dignificar a las víctimas, a los sufridores, así como a sus allegados y familiares, que sufrieron los rigores y los horrores de la guerra. También hubiésemos querido que en el título de la ley figurase algo que indicase el rechazo de esos desmanes, a fin de que las generaciones futuras eviten la repetición de lo que sucedió en aquella época.

Lo mismo hemos querido hacer respecto de la exposición de motivos, que casi hemos cambiado por comple-

to, puesto que nos parece que ha quedado un tanto ligera. Creo que no tiene una base ni una filosofía propias como para que la gente, los herederos, las siguientes generaciones conozcan bien cómo se puso fin al régimen democrático de 1936, cuál fue el origen histórico del golpe militar y la dictadura franquista, cómo fue la transición a la democracia, la generosidad y el silencio de las víctimas; es decir, se trata de la recuperación de la memoria histórica, contemplando profundamente lo sucedido durante la guerra y la posguerra.

Esas son las dos primeras enmiendas que queremos incorporar al texto del proyecto de ley.

La tercera enmienda está referida al artículo 1, porque nos interesa reconocer el derecho a favor de los que han padecido y siguen padeciendo los horrores de la guerra civil y la dictadura franquista. También hemos querido incorporar el reconocimiento e información sobre lo que fue la II República, lo que esta hizo y lo que no quiso hacer.

La enmienda número 4 pretende una mejora técnica puntual.

Mediante la enmienda número 5 pretendemos incorporar una declaración genérica por la doble injusticia que están sufriendo y han sufrido las víctimas de la guerra civil y el régimen franquista, no solo durante la guerra sino en la situación posterior, hasta la época de la transición y aún hoy en día. Por eso, a esas víctimas las hemos llamado revíctimas, porque ha habido un doble sufrimiento.

Mediante la enmienda número 6 proponemos la anulación de las sentencias dictadas en los consejos de guerra por los tribunales de orden público, los tribunales de responsabilidad política, por el tribunal especial de reprobación de la masonería y del comunismo al objeto de reforzar y reconocer a las personas que sufrieron la guerra civil y los rigores de la dictadura, así como a sus familiares, que en estos momentos están padeciendo lo mismo.

La enmienda número 7, al artículo 4, propone que reglamentariamente —porque espero que esta ley tenga un reglamento— proceda al reconocimiento de orden jurídico, moral e incluso económico de aquellas personas que sufrieron prisión, internamiento en campos de concentración, batallones de trabajadores, presidio, exilio, destierro, tortura, detenciones o arrestos por las fuerzas del orden público o militares. Es una forma de reconocer un pasado de cara al futuro.

En la enmienda número 8, que se formula al artículo 5, proponemos la reparación a las familias de las personas fusiladas en virtud de condenas en consejos de guerra y hasta proponemos una compensación económica. Los consejos de guerra sumarísimos, por lo menos en nuestra tierra en el País Vasco, en Euskal Herria, fueron tremendos y el sufrimiento de los familiares es todavía grande.

La enmienda número 9 es eminentemente técnica. No así la enmienda número 10, relativa al artículo 11, en el que se pide al Estado que asuma la responsabilidad de la investigación. No se trata de dejar que se revise, sino de que el propio Estado investigue por tratarse de una reivindicación de la sociedad. Además, la reivindicación de un

análisis y de una investigación está sustentada por el derecho internacional.

Las enmiendas números 11 y 12 se formulan al artículo 11, apartados 1 y 2, y pretenden mejoras técnicas.

En la enmienda número 13 se insta al Gobierno a que facilite el acceso a los datos que consten en los archivos, tanto públicos como privados, al objeto de recuperar la verdad en los casos particulares. Es fundamental facilitar este acceso, y no basta con decir que se suministrará la información; es necesario conocer los casos concretos y particulares porque los familiares y allegados tienen ese deseo explícito.

La enmienda número 14 se refiere al artículo 22 y solicita, fundamentalmente, una reclamación histórica: la devolución del patrimonio de Euskadi incautado en los archivos de Salamanca. Se trata de una reclamación que pondremos una y mil veces sobre la mesa. Es sensato reconocer que es necesario que estos archivos que forman parte del patrimonio histórico de nuestra tierra vuelvan allí. Lo mismo que en su momento reclamamos el *Guernica* de Picasso, y volveremos a hacerlo, el archivo debe regresar a Euskadi.

La enmienda número 15, relativa al artículo 22, es novedosa, y se refiere a la creación de una comisión de la verdad. Esta comisión de la verdad tiene por objeto dar mayor participación a la sociedad. Lo cierto es que no queremos abrir heridas, sino que la gente pueda dignificar a las víctimas y a aquellos que han sufrido. Por ello, intentamos que cinco personalidades de reconocido prestigio en el ámbito del área social procuren mejorar la reparación de aquellos que sufrieron los horrores y errores de la guerra civil y del periodo franquista, el deterioro y las heridas de muchas familias y allegados que murieron.

La enmienda número 16 —y estoy terminando, señor presidente— se refiere al artículo 22. Creemos que esta comisión de la verdad debe recoger los testimonios, la historia de la guerra y las repercusiones franquistas, así como toda la represión de aquella época. Existen multitud de historias y casos de uno y otro bando, y conviene que la gente los explicite. Es necesario que la gente abra sus conciencias y sus corazones porque es la manera de que las heridas cierren mucho mejor, y no como sucedió en la transición, cuando el malestar y los sinsabores, sobre todo entre los de cierta edad, no llegaron a superarse. Este reconocimiento y esta reparación hacen necesario que esta comisión de la verdad pueda llevarse a efecto y cumplir su objetivo.

La enmienda número 17, al artículo 22, es otra de las novedades que Eusko Alkartasuna quiere incorporar. Se propone la creación de una fiscalía especializada al objeto de esclarecer, sancionar y reparar los crímenes de la guerra civil y del régimen franquista. No queremos crear tensiones, queremos que se analice, que se esclarezcan los hechos y que se reparen. Esta fiscalía especializada debería colaborar con las instituciones públicas, pues ello facilitaría, en unidad de acción con miembros de uno y otro bando, la resolución y la terminación de esta triste contienda que todavía genera problemas en las siguientes generaciones.

La última enmienda propone, señorías, una disposición adicional nueva, y creo que hay algún otro portavoz que ha presentado la misma enmienda. Con ella se intenta reforzar el reconocimiento jurídico de las víctimas para aquellas personas fallecidas en defensa de los derechos y las libertades democráticas entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977.

Señorías, estas son las enmiendas que presentamos. Sabemos que, tal y como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, este proyecto está cerrado y que tal vez no se pueda incorporar ninguna de las enmiendas, pero lo que nos interesa es que esta no sea una ley de enfrentamiento entre vencedores y vencidos, sino una ley para la dignificación de las víctimas, una ley para la dignificación de las personas y familias que han sufrido, una ley que ponga punto final, cerrando las heridas, curando las cicatrices y mirando hacia el futuro en paz y concordia, y con caridad y amor.

Eskerrik asko.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda presentada por el senador Tuñón, tiene la palabra su señoría.

El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para defender la única enmienda que he mantenido viva y con la que se pretende ampliar el plazo de dos meses para el derecho al reconocimiento a favor de personas fallecidas en la defensa de la democracia y situarlo, en vez de en el 6 de octubre de 1977, en el 5 de diciembre para incluir así la muerte de José Manuel García Caparrós, que tuvo lugar en Málaga, el día 4 de diciembre de dicho año.

Según dicen las crónicas, José María, joven de 19 años y militante de Comisiones Obreras, murió como consecuencia de una bala perdida de la policía durante una manifestación en Málaga a favor de la autonomía andaluza; un asesinato nunca aclarado porque no se quiso. En una reciente publicación de Rosa Burgos esta dice precisamente que hay que reaccionar para evitar lo que llama la segunda muerte de este joven debido a su exclusión de la ley de la memoria histórica.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.

El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario mantiene vivas dos enmiendas, las números 59 y 60, que doy por defendidas en sus propios términos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.

La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario mantiene viva la única enmienda que ha presentado a este proyecto de ley, la número 27, de adición, en la que solicitamos la incorporación de un nuevo artículo 20 bis al proyecto de ley a fin de facilitar la restitución a las instituciones autonómicas y forales de Euskadi de los documentos incautados durante la guerra civil.

Como ya hemos dicho muchas veces, consideramos que ello es una cuestión de mera justicia, pues esos documentos que obran ahora en el Archivo Histórico de Salamanca tienen sencillamente dueño, y porque, además, en esta misma situación estaba la Generalitat de Catalunya, que sin embargo sí ha visto reconocido su derecho y ya tiene en su poder los documentos que también le fueron robados, una devolución que se llevó a cabo con todos los honores y por ley.

Si la demanda del Gobierno vasco es igual de legítima que la que en su día hizo la Generalitat, ¿por qué entonces esa diferencia de trato?, ¿o es que el Gobierno vasco, el de entonces o el de ahora, es indigno a los ojos del Estado para recuperar lo que solo a él pertenece? No entendemos a qué obedece esta reiterada negativa. Nuestra petición es, como decimos, una cuestión de mera justicia a la que sumamos hoy, además, el precedente catalán que expresamente invocamos en derecho.

Eskerrik asko.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.

Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: *(El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.)*

«Gràcies, senyor president.

Les esmenes del nostre grup configuren de fet un projecte de llei nou que parteix de la base de la declaració de la il·legalitat de totes les actuacions repressives de la dictadura contra els seus opositors i del reconeixement de les víctimes com a subjectes de dret».

Continúo en castellano, como siempre, por imperativo legal. No voy a decir exactamente lo mismo en castellano que en catalán, ya que voy a precisar que las enmiendas de mi grupo son, por un lado, las de Iniciativa per Catalunya Verds, que son la 61, la 62, la 63, la 64 y la 65, que en su nombre retiro en este momento. Por otro, las 46 restantes son enmiendas de Esquerra Republicana, las cuales sí configuran un proyecto de ley nuevo que parte de la declaración de la ilegalidad de todas las actuaciones represivas de

la dictadura contra sus opositores y del pleno reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho.

El contenido básico de nuestras enmiendas queda resumido —no quiero cansarlos leyendo las 46 enmiendas y justificándolas— en los dieciséis puntos del veto de los senadores de Esquerra, que hoy tengo el honor de representar en esta tribuna, y que esencialmente son los siguientes.

En primer lugar, el reconocimiento jurídico por parte del Estado español de la condición de víctimas a todas las personas que sufrieron la persecución y hasta la muerte durante la dictadura franquista; la localización e identificación de víctimas desaparecidas y asesinadas, independientemente de su adscripción ideológica, y el reconocimiento de los derechos de sus familiares como una responsabilidad del Estado.

En segundo lugar, un punto que para nosotros es fundamental y quizás sea uno de los que ha determinado nuestra exclusión de todo el proceso de la negociación de esta ley: la anulación de todas sentencias dictadas en consejos de guerra desde el 18 de julio de 1936 hasta la muerte del dictador en relación con supuestos delitos de rebelión militar contra la seguridad del Estado, de bandidaje y terrorismo o similares. La anulación de todas las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público, por los tribunales de responsabilidades políticas y por el denominado Tribunal Especial para la represión de la masonería y el comunismo.

En tercer lugar, y es otro de los puntos fundamentales, la compensación a las víctimas de estas sentencias y en particular a los familiares de las personas fusiladas en virtud de los consejos de guerra citados, compensación que no puede ser discriminatoria en relación con otras víctimas ni distinta unas de otras, como en la ley se establece.

En cuarto lugar, reclamamos el reconocimiento jurídico y moral de las personas que formaron parte de las distintas organizaciones armadas antifranquistas, particularmente de muchas personas perseguidas que se tuvieron que refugiar en los maquis durante muchos años para no sufrir persecución y muerte; de las personas represaliadas por sus convicciones democráticas; de los que sufrieron prisión, internamiento en campos de concentración, batallones de trabajadores, exilio, presidio, destierro, tortura, detención o arresto por parte de las fuerzas de orden público o militares a causa de la guerra o durante la represión franquista; de las personas que perdieron la vida ante las fuerzas de orden público o militares en acciones contra la dictadura, y el establecimiento de indemnizaciones para estas personas o sus familiares. Esta lista parece a veces exagerada; parece que estamos exagerando, pero la casuística es amplísima porque la represión fue sistemática.

No deberíamos olvidar nunca que en un país de más de veinte millones de personas —23 millones de personas había después de la guerra— que en los famosos archivos de Salamanca había 2 millones de personas fichadas. Este es un hecho de gran magnitud —solo el nazismo fue capaz de organizar una represión tan sistemática—, que duró cuarenta años y, por tanto, las formas de la persecu-

ción, las características de las víctimas son muy diversas. Es cierto que hay víctimas de todas las ideologías y de todos los bandos, pero es de justicia que justamente hoy hagamos la reparación a esta cantidad de víctimas de los diferentes actos de represión del franquismo. Una cosa no quita la otra, y en este momento es en esto en lo que estamos.

Continuando con la misma lista, pedimos el reconocimiento y el restablecimiento de los honores de los militares y miembros de los cuerpos de Seguridad del Estado que defendieron el orden legal democrático y constitucional de la República. Aquí quisiera recordar, por ejemplo, un hecho que me parece muy significativo, y es que la persona encargada de la defensa de Lluís Companys, que era un militar, se vio tan afectada por lo que vivió en el juicio que acabó siendo él mismo perseguido por el franquismo y terminó viviendo en el extranjero porque no soportaba esa situación. Situaciones de este tipo se han dado muchas porque el franquismo duró, por desgracia, demasiados años.

En este mismo sentido pedimos el reconocimiento, la rehabilitación y la restitución de todos los honores de los maestros y de todos los funcionarios públicos expulsados de sus puestos de trabajo por motivos políticos; el reconocimiento jurídico y moral de las personas, colectivos, asociaciones, entidades, instituciones, empresas, escuelas, editoriales, discográficas y radios que sufrieron persecución por motivos de su lengua y cultura, que sufrieron persecución, discriminación, castigos sanciones y vejaciones por el uso de la lengua catalana, de la lengua vasca o de la lengua gallega, por su enseñanza, por su fomento y difusión; el reconocimiento jurídico y moral de las personas y colectivos que sufrieron persecución por motivo de pensamiento, creencia religiosa o cultura o por motivo de su orientación sexual.

Pedimos también en estas enmiendas la restitución a la Generalitat de Catalunya y al Gobierno vasco de todos los honores y bienes que les fueron incautados por la dictadura franquista. Aquí recogemos lo que está contenido en las enmiendas tanto del senador Urrutia como del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Asimismo, y esta consideramos que es una cuestión fundamental, pedimos la restitución de los bienes inmuebles, dinero y otros valores y bienes muebles incautados por el régimen dictatorial a personas, instituciones, partidos, sindicatos, organizaciones y entidades. En este sentido —ya he insistido antes— es muy importante que no se excluya a las personas y que no solo se reconozca a partidos y sindicatos.

También pedimos la restitución de los documentos incautados por las fuerzas represivas durante todo el período dictatorial desde sus orígenes en 1936. Aún hay que recordar que existen cantidad de estos documentos depositados en los archivos de Salamanca que, además, tienen dueños con nombres y apellidos.

Solicitamos la preservación de los lugares de la memoria, de la represión y de la resistencia en la lucha antifranquista más allá de los que reconoce la ley, que debería

incluir la *museización* de algunos de estos lugares, en particular del Valle de los Caídos. En este sentido nos parecerían muy procedentes algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

Pedimos también la retirada de los símbolos franquistas de todos los espacios, vías y edificios públicos sin distinciones, así como la invalidación de las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personajes vinculados al régimen franquista, en primer lugar la de aquellos vinculados a organismos relacionados con la represión, con la rectificación de sentencias represivas o con el aval de actos represivos de la dictadura. Lo que no es de recibo es que se mantengan todavía los honores a personas que fueron responsables de crímenes que si no se han perseguido en los tribunales internacionales por crímenes contra la humanidad ha sido, quizá, por la generosidad de las víctimas, pero lo que no puede ser es que el Estado mantenga las distinciones y los honores para estas personas.

Igualmente, vamos más allá de lo que la propia ley reconoce en relación con la apertura de todos los archivos de la represión, garantizando su fácil y libre acceso a todos los ciudadanos.

Asimismo, pedimos en nuestras enmiendas la investigación sobre la desaparición de fondos documentales del Estado durante la transición, su recuperación cuando sea posible y el traslado de los resultados a la Fiscalía del Estado por si hubiera responsabilidad penal en su desaparición. Este es un elemento fundamental porque el derecho a la verdad lo tienen todas las víctimas y, como decía anteriormente el portavoz de nuestro grupo, el senador Molas, el derecho a conocer la verdad es un derecho de toda la sociedad.

Por otro lado, en la misma línea de conocimiento de la verdad defendemos en nuestras enmiendas el fomento de la investigación y la divulgación de la memoria y los valores democráticos y la incorporación a la enseñanza obligatoria de un temario específico sobre esta cuestión, concretamente sobre el intento de genocidio cultural y lingüístico de las lenguas y culturas catalana, gallega y vasca por parte de la dictadura franquista.

También solicitamos el reconocimiento del exilio como una de las consecuencias de la sublevación y la guerra contra la república y la persecución antidemocrática y la represión de la dictadura franquista; el reconocimiento de las personas forzadas al exilio como víctimas y la reparación de los daños, lo que debe incluir la posibilidad de recuperar, como ya establece en parte la ley, la nacionalidad para estas personas y sus familiares; el reconocimiento y la reparación singular de los que a causa del exilio sufrieron internamiento en los campos de concentración del Estado francés, así como la realización de un inventario de los fondos documentales relacionados con el exilio republicano y antifranquista en todo el mundo y el fomento de su estudio y difusión, singularmente para evaluar su alcance y magnitud.

En la misma línea, exigimos el reconocimiento de las víctimas originarias del Estado español de los centros de

trabajos forzados y de los campos de exterminio nazis durante la II Guerra Mundial y la reparación moral, jurídica y económica a los supervivientes o a los familiares de dichas víctimas.

Igualmente, exigimos facilitar las demandas de documentación u otros trámites y el apoyo a los ciudadanos, entidades o instituciones que deseen formular reclamaciones ante los tribunales españoles e internacionales por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, desde sus orígenes hasta la muerte del dictador, o por sus aliados nazis y fascistas durante la II Guerra Mundial. Los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, no solo en Chile o en Argentina, sino también en este país.

Finalmente, en nombre del Estado español, pedimos la formalización solemne por el Jefe del Estado de la demanda de perdón a las víctimas, que no es otra cosa que el reconocimiento de las víctimas de la dictadura, desde sus orígenes en la sublevación contra la república, de su dignidad y de su honor, del valor de su defensa de la libertad, de la democracia, de su resistencia y lucha contra la dictadura y de la condena explícita del levantamiento militar contra la República del régimen dictatorial que instauró y de los crímenes que cometió. Esta cuestión puede ser malinterpretada, pero no se trata de humillar a una determinada persona sino de que el Estado, en su máxima representación, reconozca el carácter criminal del régimen franquista.

Por último, quiero subrayar que hay muchas enmiendas de otros grupos parlamentarios que coinciden con una parte de nuestras demandas, por lo que votaremos favorablemente las de los senadores Urrutia Elorza, de Eusko Alkartasuna, y Sampol i Mas, del Partit Socialista de Mallorca, porque, entre otras cosas, defienden una cuestión fundamental, que es la incorporación a la ley de la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas. Si esto se aceptara, seguramente podríamos hablar de muchas otras cosas.

Moltes gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): *Moltes gràcies.*

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Van-Halen.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta 20 enmiendas, de la 37 a la 56. Voy a hacer una referencia lo más breve posible a todas ellas.

La enmienda número 37 pide la supresión de la exposición de motivos. Señorías, habría muchos argumentos para pedir la supresión de la exposición de motivos, entre otros, que se dicen cosas tan pintorescas como que se reconoce el derecho a la memoria individual. Esto es una contradicción en sus propios términos, porque nadie necesita que le reconozcan su memoria individual. También se habla de una expresión que no acabo de captar, que es memoria democrática; tampoco intento captar memoria

histórica porque, evidentemente, la memoria es algo individual y no tiene nada que ver con la historia. En cuanto a las declaraciones que se hacen en la exposición de motivos ya están recogidas en la legislación anterior.

La enmienda número 38 es de sustitución y pretende que se tengan en cuenta a las víctimas de los levantamientos contra el Gobierno legítimo de la II República; sinceramente nos parece justo, porque aquí somos todos muy demócratas pero nadie habla de los levantamientos contra la II República: uno, en el año 1931, y dos y medio —podríamos decir— en 1934, si tenemos en cuenta los enfrentamientos en Mondragón, en el País Vasco, entre otros sitios. ¿Por qué van a quedar injustamente olvidadas las víctimas de los enfrentamientos contra la II República de 1934? Produjeron víctimas y produjeron muertos. Anteriormente un senador ha citado a uno de nuestros colegas en política conocido por todos, Marcelino Oreja, que es una víctima porque su padre, que había sido diputado, fue asesinado en el año 1934. Entonces, ¿por qué no vamos a tener en cuenta a esas víctimas?

La enmienda número 39 es de supresión, porque no se puede entrar en la memoria personal y familiar.

La enmienda número 40, al artículo 3, se refiere al desarrollo de derechos que ya están contenidos en la legislación.

En cuanto al espíritu general de la ley, que también se recoge en este artículo, he de decir que es conmovedor, si tenemos que creer, —y no tenemos por qué dudar—, que de lo que se trata es de cerrar heridas. El senador Sampol se preguntaba cómo se cerraban las heridas; que era algo imposible. Su compañero político, don Jesús Caldera, persona que todos conocemos, en un debate parlamentario celebrado en el año 1994, le contestó diciendo que las heridas de la guerra civil se habían cerrado y habían sido superadas y recuperadas por la libertad al conseguir un Estado social y democrático de derecho; es decir, hablar de las heridas es volver a abrirlas. ¿Quién no tiene en su familia —yo las tengo— víctimas de ambos bandos de la guerra civil española? (*El señor presidente ocupa la Presidencia.*)

El senador Sampol me ha conmovido, ha hecho que me emocione, acaso por mi condición de aprendiz de poeta. Lo digo con toda sinceridad, porque ha citado a una persona que sufre —y cuando se cita a una persona que sufre hay que tenerlo en cuenta y creérselo—, un hecho que vivió hace poco en un ayuntamiento de Mallorca, donde había una familia que sufría por un asesinato ocurrido en la guerra civil. Y yo recordaba, —me interesa precisamente porque iba a intervenir en este debate— el caso de Petra Montoro Romero, la primera alcaldesa de España —ahora que estamos hablando de feminismo—, que fue promotora de escuelas femeninas, y que fue asesinada junto a sus dos hermanas, Natalia y Marta, el día 29 de noviembre de 1936, justo por los otros, por las milicias de izquierda en Sorihuela del Guadalimar, en Jaén, y que tuvo hijas, nietas y biznietas.

El compañero Sampol nos hablaba de ese alcalde, y he de decir que no solo estamos con su familia, sino que he recordado el caso de esta mujer, primera alcaldesa en

España, que con sus dos hermanas también fue injustamente asesinada —son injustos todos los asesinatos— el 29 de noviembre de 1936 por los contrarios. Por tanto, es una guerra de emotividades. Repito que a mí me ha conmovido oír al compañero Sampol, y creo que él se habrá conmovido cuando le he recordado este triste caso.

El resto de nuestras enmiendas, hasta la número 56, tiene el mismo sentido, pero quiero detenerme en algunas. Por ejemplo, la número 50 propone la creación de un nuevo artículo 16.bis, y se refiere a la exaltación de la guerra civil que, al menos a mí y a mi grupo parlamentario nos parece muy mal, porque es exaltar un hecho trágico. El senador Muñoz-Alonso, que tiene conocimiento de la historia, ha dicho que posee la mayor bibliografía de cualquier acontecimiento universal de la guerra civil española. A mí me parece mal cualquier exaltación que no sea historiográfica, que no sería exaltación sino investigación. Nosotros proponemos en la enmienda número 50 que se diga exaltación protagonizada por cualquiera de los dos bandos de la guerra civil. Si se ensalza a un bando, eso es recordar la guerra civil olvidando al otro bando. En definitiva, creo que no debemos exaltar; debemos hacer justicia, pero no exaltar a ningún bando de la guerra civil.

Por otra parte, tenemos una enmienda que nos parece importante. Hay que tener en cuenta las víctimas que no son de la guerra civil ni del tiempo del franquismo. Se habla de ello en la enmienda número 44, al artículo 10. Nosotros incorporamos: siempre que su actuación, para tener en cuenta su sacrificio, resultara conforme a los principios y valores constitucionales. Decimos esto porque nos podríamos encontrar con la curiosa y tortuosa circunstancia de reconocer, a efectos de las ayudas y reconocimiento que fija este artículo, a personas que hubieran utilizado la violencia; y la violencia es condenable en todo caso.

En cuanto a la enmienda que dice que se va dar una declaración a las víctimas, tenemos que señalar que la mejor declaración es apoyarlas, reconocerles derechos. Pero si se habla de una declaración que jurídicamente no se especifica en absoluto en qué consistirá, parece, como decía el senador Muñoz-Alonso, que se les va a dar un papel. A lo mejor les parece importante moralmente, pero yo no lo entiendo.

Hay varias enmiendas que se refieren al centro documental de la memoria histórica, que nos parece una duplicidad del Archivo General de la Guerra Civil, por lo que no consideramos que encaje en esta ley.

En cuanto a que había que hacer una condena de la sublevación y de la guerra civil, ya se hizo, como todo el mundo sabe, en una declaración de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, de 20 de noviembre —curiosa fecha— de 2002. Todos los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo para publicar una condena —no podía ser de otra manera— de un hecho completamente trágico de la historia de España. A nosotros nos gustaría que alguien publicara una condena de las jornadas de octubre de 1934, que seguramente conoce muy bien desde el punto de vista histórico mi queridísimo y

admirado —como él sabe— señor Bofill, o de las jornadas de 1934 en Asturias.

Nuestras enmiendas tratan de situar esta ley, que no se llama de memoria histórica porque, razonablemente, alguien con rigor le cambió el nombre, puesto que, como ya dije en la comisión, ningún historiador mencionará ni en la historiografía de ningún país aparecerá el concepto de memoria histórica, porque la memoria es individual. Así que se quitó el título de memoria histórica, y me parece acertado.

En cuanto al reconocimiento de derechos y al reconocimiento a las víctimas, que se viene haciendo, por cierto, desde 1977, y en cuanto al reconocimiento de mirar hacia adelante en vez de mirar al pasado, nuestras enmiendas se sitúan en ese espíritu; espíritu en el que deberían haberse situado, a mi humilde juicio, todas las intervenciones. Desde luego, felicito a todos los compañeros porque han estado brillantes, cada uno defendiendo sus ideas, como debe ocurrir en la Cámara.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra la senadora Castillo.

La señora CASTILLO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar la posición sobre las enmiendas que se han defendido en este amplísimo debate sobre una ley que reconoce y amplía derechos, y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y durante la dictadura franquista. Por cierto, quiero resaltar que no es fruto de la casualidad que hayamos sido cinco senadoras las que hemos intervenido en este debate: la senador Etxegoyen y cuatro senadoras socialistas. Digo que no es fruto de la casualidad: somos todas hijas y nietas de mujeres que vivieron la etapa más negra de nuestra historia; por tanto, de mujeres que fueron víctimas y represaliadas durante todo el tiempo que duró la guerra civil y, por supuesto, la dictadura franquista.

Quiero resaltar también que el contenido de las enmiendas reproduce mayoritariamente las que ya se presentaron en el Congreso de los Diputados y, por tanto, el debate se ha desarrollado en los mismos términos. Desde el respeto que nos merecen todas las aportaciones que cada grupo haya querido hacer, entendemos que el texto del proyecto de ley no mejora con la redacción de estas enmiendas, ni por supuesto su contenido.

Señorías, estamos ante una ley de enorme carga sentimental y simbólica. El objetivo central de esta ley es restituir, como decía antes, y reconocer los derechos de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o religiosas durante una cruel guerra y una dictadura de 40 años. La ley lo que quiere es promover las medidas necesarias para llevar a cabo esta reparación moral, y no quiere que se produzcan enfrentamientos

entre grupos ni enfrentamientos en un debate como el que se ha producido aquí esta tarde entre unos y otros, ni entre la derecha, que es verdad que el Partido Popular aglutina a toda la derecha y, por tanto, algo habrá de ese reducto de aquella época, ni tampoco con las acusaciones... (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

La señora CASTILLO JIMÉNEZ: El Partido Popular, señorías, representa a toda la derecha de este país y, por tanto, supongo que tendrán herederos de aquella etapa. No creo que se hayan extinguido en la historia. Espero que no haya sido así, desde luego.

Ni, por supuesto, tampoco vamos a compartir las acusaciones que una vez más desde esta tribuna ha hecho Esquerra acusándonos de que nos hemos sometido a un chantaje por parte de esa derecha, porque no es cierto. En ningún momento hemos sentido ni ese chantaje al que alude Esquerra ni esa amenaza; ni nos ha amenazado ni nos ha chantajeado la derecha, ni ahora ni nunca.

Creo, señorías, que esta ley —y se ha dicho aquí— es necesaria, oportuna, sobre todo para algunos territorios de España en los que, además, se hace imprescindible, imprescindible para comenzar cuanto antes esa tarea de reconocimiento hacia las víctimas. La percepción que yo tengo es la de obtener resultados, fruto del trabajo, para conseguir los objetivos que ahora se marca esta ley. Hemos superado —y se ha dicho también aquí, lo han dicho prácticamente todos los portavoces— una etapa de nuestra historia dando ejemplo de convivencia. Tras 40 años de dictadura y de recorte de libertades, hemos cicatrizado, hemos tenido heridas pero las hemos cicatrizado; hemos conseguido vivir sin rencor, pero eso no significa sin memoria. Un pueblo que olvida su historia tiende a repetirla.

Esta ley, por tanto, ¿qué es lo que va a permitir o aportar? Escriturar con fuerza, con la fuerza irrevocable que tienen las normas, todo lo que por otro lado hemos venido haciendo durante toda la transición al lado y por petición de los colectivos de víctimas y familiares, en la tarea en la que seguimos: dignificar la memoria de los padres, de los abuelos, de las madres y de las abuelas. Por cierto, quiero saludar desde la tribuna a los nietos de exiliados que nos acompañan esta tarde.

Señorías, en Andalucía sólo en esta legislatura se han emprendido acciones que nos llenan de satisfacción, y ello porque nos hemos adelantado a lo que pretende esta ley que hoy discutimos, sin otro mérito que haber escuchado y dotado de medios a las demandas que nos hacían las organizaciones, las instituciones y los ciudadanos en general, que pidieron al Gobierno de la Junta de Andalucía su implicación en lo que ahora recoge esta ley y, por tanto, se garantiza y deja de estar a voluntad del Gobierno que muestre más o menos sensibilidad ante el déficit democrático del olvido, del olvido de quienes con su vida construyeron el germen de esta sociedad libre y democrática que hoy disfrutamos. Somos los hijos y los nietos de los que

perdieron la vida en esa lucha. Quiero mencionarle algunas de las acciones que demuestran que es posible, que la ley es necesaria y que para muchos territorios y para muchos gobernantes es imprescindible.

En Andalucía, los pasados 28 y 30 de noviembre celebramos el primer Congreso Internacional sobre la Historia y la Memoria; creamos una comisión interdepartamental donde se implica a las consejerías de Presidencia, de Justicia, de Gobernación, de Educación, de Cultura, de Economía, de Igualdad y de Innovación; creamos la figura del comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica; venimos pagando indemnizaciones desde 2001 a las víctimas que fueron presos y represaliados durante la guerra y la dictadura; creamos un Comité Técnico de Coordinación para el análisis y la evaluación de todas las actuaciones de la Junta de Andalucía, del Ministerio Fiscal, de las universidades andaluzas, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y de todas las asociaciones que colaboran en la recuperación de la memoria histórica.

Señorías, el año pasado yo participé en el debate de la Ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica, y me mostraba escéptica. Tengo que reconocer hoy aquí que ha servido, ha servido para que en muchos sitios en los que no se había hecho nada se hicieran cosas; ha servido, por ejemplo, en Andalucía para que creemos e impulsemos un proyecto científico con todas las universidades andaluzas sobre los tribunales de responsabilidades políticas, para que celebremos más jornadas, más homenajes, para que hayamos publicado libros; ha servido. Repito, yo era escéptica, creía que estábamos perdiendo el tiempo y ahora tengo que rectificar desde esta tribuna y decir que ha servido.

Hemos creado también el Centro de Documentación y Banco Audiovisual de la Memoria Histórica y, sobre todo, señorías, déjenme que les cite proyectos que tenemos en marcha para seguir trabajando a partir de ahora, con la garantía de que una ley como instrumento va a extender al conjunto del Estado español todas estas acciones que en Andalucía ya están en marcha. Son tres proyectos: el primero se refiere a la recuperación y construcción del mapa de las fosas en Andalucía, dándoles el tratamiento, porque así nos lo han pedido los colectivos, de lugares de memoria.

En segundo lugar, el impulso —del que hablaba antes de los tribunales de responsabilidades políticas. Investigan diez universidades andaluzas en proyectos científicos para que nadie se invente nada, y además se dotan becas a través del Plan Andaluz de Desarrollo e Investigación para todos aquellos jóvenes andaluces que quieran trabajar en materia de recuperación de la memoria histórica de nuestra tierra.

Y, por último, el proyecto del que quizá nos sentimos más orgullosos. Se llama «Todos los nombres». Se trata de un archivo informatizado donde se relaciona a todas las personas represaliadas y desaparecidas durante la guerra civil y la posguerra. Señorías, se trata de poner a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al

servicio de identificar y de encontrar algún testimonio de los destinatarios de esta ley, del objetivo de esta ley, que no es pelearnos sino que estén todos los nombres. Actualmente, en Andalucía son 30.805 testimonios, personas que están incluidas en «Todos los nombres», con más de 68.000 visitas en la página web que, como digo, soporta este proyecto. Se trata, por tanto, de un espacio para la sensibilización de la ciudadanía hacia el injusto olvido de las víctimas. Por cierto, más injusto si nos referimos a las mujeres, más injusto, señorías, porque tuvieron un doble castigo, un doble dolor, porque si injusto es que perdieran la vida los hombres, más injusto quizá era que las mujeres, absolutamente invisibles en esta etapa, viudas, madres, compañeras, hijas y nietas, sufrieran en su carne las represalias y además perdieran a los suyos.

Señoría, voy a terminar con unas palabras que no son mías, podrían serlo, o de cualquiera de las personas que están en la tribuna, pero no son mías, son de Ana María, y dicen así: «He cavado la fosa / de mis muertos en el aire, / donde sus huesos ligeros / se mezclan con las ramas / más altas de los árboles, / y mansamente los luceros / les brindan sus luces blancas. / He cavado su tumba breve / entre las nubes, cielo adentro, / en un lugar preciso, donde / cada día un dulce viento / dice al fin todos los nombres». Lo que quieren esos hombres y esas mujeres que sufrieron y que perdieron su vida, señorías, es que sus nombres no se pierdan en la historia, que nadie los olvide, y esta ley va a servir para que nadie se quede sin olvido, para que nadie se quede sin nombrar.

Gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a procurar no extenderme mucho en los argumentos porque creo que el debate ya se ha producido en lo sustancial. Sí diré, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, que nosotros sí que pensamos que existe una memoria colectiva. Si no me confundo, una de las frases que más repetía el anterior jefe del Estado, aunque no era original suya, era que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Por supuesto, difiero de las conclusiones que pretendía extraer el anterior jefe del Estado de esta frase, pero la frase en sí misma es brillante y es cierta. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, y nunca se pueden cerrar heridas de verdad desde la ignorancia de la historia y sin sacar las conclusiones que de ello se derivan, como es reparar a las víctimas y las injusticias históricas que aún se arrastran. Por eso el Bloque Nacionalista Galego apoya con entusiasmo esta ley. Por eso el Bloque Nacionalista Galego considera que esta ley es necesaria y pertinente. Y por eso el Bloque Nacionalista Galego participó del acuerdo que hubo entre distintos grupos parlamentarios en el Congreso, para impedir que esta ley embarrancara, para permitir

que esta ley llegase a prosperar. Nosotros siempre tenemos perfectamente claro que llegar a compromisos, llegar a acuerdos significa también asumir renunciaciones. Desde nuestro punto de vista, esta ley sigue siendo mejorable en muchos aspectos; en cualquier caso, ante la disyuntiva de que hubiese ley o no hubiese, el Bloque Nacionalista Galego optó por asegurar que hubiese ley y, por lo tanto, por participar de ese acuerdo y de ese consenso.

Precisamente, por esta razón, como ya expuse en el turno de defensa de enmiendas, el Bloque Nacionalista Galego ejerció a la hora de presentar enmiendas a este proyecto en el Senado una autolimitación: retrotraernos a los acuerdos a los que habíamos llegado en el Congreso y, por lo tanto, no presentar de nuevo enmiendas en temas que quedaron al margen de la negociación y del acuerdo al que se llegó en el Congreso, e introducir únicamente una enmienda en una cuestión que no tiene que ver con los aspectos sustantivos de este proyecto de ley. Pero, señorías, creemos, sinceramente, sin pretender por ello dar lecciones a nadie, que la autolimitación que ejerció el Bloque Nacionalista Galego debía ser correspondida también con otras autolimitaciones, en particular por parte del partido del Gobierno. Primera autolimitación: no introducir cuestiones que no deben sustanciarse en este proyecto de ley porque afectan a otros aspectos del ordenamiento jurídico español, cual es uno tan importante como el de la nacionalidad. Aspecto que por sí solo debería exigir un debate mucho más profundo, mucho más demorado y, por lo tanto, entendemos que no es en un proyecto de ley de memoria histórica —nosotros seguimos prefiriendo llamarlo así— donde éste se tenía que sustanciar. Y una segunda autolimitación, señorías, desde nuestro punto de vista es el respeto al Senado. El sistema parlamentario español —y no lo inventamos nosotros, precisamente, no lo inventó el Bloque Nacionalista Galego— es bicameral, un sistema compuesto por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Es cierto que el Bloque Nacionalista Galego participó del acuerdo que hizo posible que prosperase un texto en el Congreso de los Diputados, pero nunca se debe ignorar, señorías, que la configuración política del Senado no es plenamente coincidente con la del Congreso. Por ejemplo, aquí hay senadores de formaciones políticas que no tienen representación en el Congreso, y tienen el derecho legítimo como senadores de intentar mejorar, vía introducción de enmiendas, este proyecto de ley. Por eso no podemos compartir prácticas, que desde nuestro punto de vista demuestran una total y absoluta falta de respeto a esta Cámara, de blindar los proyectos de ley que salen del Congreso para evitar la introducción de cualquier modificación en el Senado, y convertir el trámite en el Senado en eso, única y exclusivamente en un trámite.

Precisamente por ese motivo, anuncio, como no podía ser de otra manera, el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a este proyecto de ley, pero también manifiesto que apoyaré todas aquellas enmiendas que creo contribuyen claramente a mejorarlo, empezando por las enmiendas presentadas por mis compañeros de grupo: el senador

Sampol, el senador Urrutia y el senador Tuñón, y, por supuesto, las enmiendas de formaciones amigas de Galeuska: Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió.

Muchas gracias, señorías, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene a la palabra el senador Casas.

El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.

Señorías, el debate de este proyecto de ley se ha sustanciado prácticamente durante la tramitación de los dos vetos. Sin embargo, intervendré brevemente para decir que nosotros votaremos favorablemente la ley. No obstante, he de confesarles que hemos tenido dudas sobre si el voto final debía ser favorable o de abstención, habida cuenta que en el Congreso se introdujeron bastantes enmiendas de nuestro grupo parlamentario, aunque nos abstuvimos y votamos en contra de algunos artículos. Como en el Senado no es posible hacer votación separada, valoramos el esfuerzo realizado por el grupo mayoritario del Congreso que sustenta al Gobierno, pues parte de las enmiendas presentadas por nuestro grupo fueron incorporadas al texto legal. Siendo sincero, debo reconocer que ha existido diálogo con nuestro grupo durante la tramitación de este proyecto de ley, diálogo que ha permitido subsanar errores que inicialmente tenía el proyecto de ley. Por lo tanto, el balance general nos hace pensar que es mejor votar sí a votar no por una razón fundamental: entendemos que es justo reconocer los derechos que se recogen en el proyecto de ley, pues se subsanan derechos fundamentales para muchas personas que fueron objeto de vejación y de situaciones absolutamente indignas e injustas durante el franquismo, reconocimiento de derechos con los que estamos absolutamente de acuerdo. Por otra parte, entendemos que era necesario llevar a cabo esta reparación, si bien, tal y como se ha tramitado el proyecto de ley, han tenido lugar en origen algunos errores de falta de definición por parte del Gobierno, pues desde junio de 2006, cuando se aprobó en Consejo de Ministros, hasta el día de hoy ha pasado demasiado tiempo y se ha producido una falta de decisión que ha degenerado un poco el debate de este proyecto de ley. Además, creemos que lo formulado en esta ley se podía haber resuelto por decreto. Finalmente, se restablecen situaciones que, a nuestro juicio, son justas y, por tanto, votaremos a favor.

Durante el debate de los vetos ya hicimos algunas consideraciones al respecto, pero me gustaría agradecer, tanto a la senadora Rubial como al senador Isidre Molas, el tono y el fondo de sus intervenciones. Creo que las posiciones deben formularse desde la tranquilidad y el razonamiento propio, que son legítimos —faltaría más que no fuera así—, lo cual ayuda a la hora de abordar este tipo de cuestiones sensibles, donde la memoria es muy personal y donde puede haber sensibilidades distintas que hay que respetar. Aunque nuestra obligación es reparar las injusti-

cias que se hayan podido cometer, creo que el tono ha sido positivo y constructivo. En este sentido, anteriormente me referí a ciertas manifestaciones hechas desde algún escaño socialista, pero no quisiera que con ello pudiera interpretarse que me refería a las intervenciones de los dos senadores citados, que me han parecido sensatas y profundas. Aunque en algunos temas no esté de acuerdo, la democracia significa discrepar desde la educación y la corrección, sin faltar al respeto. Faltaría más. Además, esta es la casa donde, a través de la palabra, cada uno hemos de manifestar nuestras posiciones, insisto, siempre respetándonos. Y, sobre todo, si en un tema tan sensible como este no damos ejemplo de que el debate es posible sin llegar al exabrupto, no estaremos trasladando los valores que pretendemos perseguir con esta ley. Más allá de restablecer derechos legítimos de muchas personas, es importante que a las generaciones posteriores les queden valores positivos de estos debates, valores que fomentan la concordia, la reconciliación y la convivencia en paz para enfocar el futuro. Creo que de nuestros discursos, cada uno desde su sensibilidad, tiene que proyectarse un futuro en el que podamos vivir en paz. Considero que esto ha sido así, que el debate ha ido por estos derroteros y que las intervenciones de todas sus señorías han buscado esta sensatez, aunque con distintos puntos de vista; unos podrán aprobarla y otros no, pero, al final, hemos conseguido una ley. Evidentemente, podía ser mejor y es una lástima, algo imputable a la mayoría, no haber conseguido un consenso de todos los grupos parlamentarios, que sería lo ideal y lo óptimo para una ley como esta, aunque no se ha conseguido. Yo no puedo decir por qué. Yo no soy quién para juzgar al Grupo Parlamentario Socialista. Yo lo juzgo solamente por la relación que ha tenido con mi grupo parlamentario, que ha sido positiva. Hemos conseguido introducir enmiendas en el trámite del Congreso y, por tanto, no tenemos por qué votar en contra. Lamento que no haya habido esa facilidad o que no hayan conseguido hacerlo con otros grupos parlamentarios. Pero yo he de hablar por mí. No puedo criticar en este sentido. Lamento que no haya habido un consenso general de toda la Cámara. Insisto, con nosotros el consenso sí ha sido posible, pero yo hubiera preferido que hubiese sido con todos.

Por lo demás, señorías, creo que hoy se reparan en parte derechos legítimos de muchas personas —y es que para unos es poco y para otros es demasiado—. A ver si en el futuro acabamos de resolver las cuestiones que queden pendientes, insisto, desde la ponderación y desde el traslado de los valores de paz en el futuro. Es importante y fundamental que en esas cuestiones nadie manipule la historia y que nadie haga un uso sectario de ella. Todos estos debates, hechos con espíritu de reconciliación, son positivos y ayudan a construir un futuro mejor, que creo es lo que está en el ánimo de todas sus señorías.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Etxeogoyen.

La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, ya lo he comentado antes con motivo de mi primera intervención: aprobar una ley del alcance de la que nos ocupa ha sido hasta la fecha una tarea pendiente y una deuda sin saldar para con muchas víctimas de la guerra civil y para con todos los exiliados y represaliados de la dictadura franquista. Ha llegado tarde pero todavía a tiempo, siendo una tarea que si no abordábamos ahora difícilmente hubiera podido abordarse más adelante. Es una ley que nació viciada y con el pie forzado, pero que finalmente ha llegado a esta Cámara sustancialmente mejorada a consecuencia del esfuerzo de muchos y de la convicción de la mayoría.

Mi grupo parlamentario sinceramente entiende que esta ley responde honrosamente a la demanda última de cuantos fallecieron o sufrieron represión, violencia y exilio por defender durante la guerra civil y la posterior dictadura de Franco los valores de la democracia: el pluralismo, la justicia y la libertad. Han sido muchas y muchos los condenados oficialmente al olvido en estos últimos 70 años, y todos ellos merecen, además de nuestro reconocimiento, también nuestra gratitud, por qué no. Pero no me refiero a un reconocimiento, homenaje o gratitud personales. Cada cual es libre de actuar como mejor lo considere en la esfera de sus sentimientos. Me estoy refiriendo, señorías, a un reconocimiento político y a su correspondiente amparo institucional. Y esta ley, con sus luces y sus sombras, como decía antes, cimenta dicho reconocimiento oficial y además entorna la puerta para hacer plenamente efectivas cuantas políticas públicas en reparación del daño causado a estas víctimas de la guerra y de la dictadura sean factibles y necesarias.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a votar sí decididamente a este proyecto de ley, salvedad hecha de aquellos artículos que responden a la enmienda presentada por mi grupo, artículos números 20, 21.1 y disposición adicional primera, para los cuales pedimos desde ahora votación separada.

Vamos a votar sí por una cuestión de oportunidad histórica, por el reconocimiento expreso que supone del sacrificio de muchos ciudadanos de este país relegados al olvido oficial durante demasiado tiempo. Vamos a votar a favor por lo que supone y tiene de puesta en marcha de políticas públicas concretas en la vía de la reparación de los derechos de estas víctimas.

Termino ya, pero en esta ocasión no lo voy a hacer recurriendo a versos de poetas como colofón de esta intervención, como otras veces hemos hecho, aunque bien podría porque demostrado está que pueden decirlo casi todos serenamente y además con muy pocas palabras. Hoy, sin embargo, prefiero dar voz, reivindicando además su buen nombre, a algunos de los muchos que nos dejaron un legado igual de impresionante que los Miguel Hernández, los Javier Aresti, Federico García Lorca y tantos más aunque no fueran poetas. Quiero dar voz a aquellos que nos dejaron su testimonio de hombres de fe.

Me van a permitir, señorías, que lea los nombres de los 16 religiosos vascos que fueron fusilados durante la guerra civil por la sola razón de decantarse por el bando republicano o por simpatizar con la causa nacionalista, y que al hacerlo rinda yo tributo a la entrega y al sacrificio de todos los religiosos asesinados, fusilados por los franquistas en cualquier rincón del Estado. Fueron éstos: Martín de Lekuona, Gervasio de Albizu, José de Ariztimuño Aitzol, Alejandro de Mendikute, José Adarraga, José de Arin, José Iturri Castillo, Aniceto de Eguren, José de Markiegi, Leonardo de Guridi, José Sagarna, José Peñagarikano, Celestino de Oñaindía, el padre Lupo, el padre Otano y el padre Román.

Señorías, estoy segura de que ninguno de ellos, ni tantos otros igualmente silenciados, hicieron otra cosa en su vida y en su muerte que servir al prójimo con dedicación, con decencia y con hombría de bien, pero, ¡craso error!, no comulgaron con los sublevados.

Mi padre no era un histórico socialista como el padre de nuestra compañera Lentxu Rubial pero seguramente compartiría básicamente todo, no el ideario, sino la forma de ser y la actitud ante la vida de don Ramón Rubial porque me consta que le tenía un profundo respeto. Mi padre no llegó a ser más que un viejo republicano que, paradojas de la guerra, señorías, se vio con 18 años pegando tiros en un bando que ideológicamente no era el suyo ni el de su familia. Me enseñó algunas cosas, aunque algunas de las cuales no sé si fueron una enseñanza, pero en más de una ocasión me decía: «Mira, Marilen, todos somos iguales a los ojos de Dios, pero comprobarás que para la Iglesia algunos somos menos iguales que otros».

Yo ni quito ni pongo en valor el acto del 28 de octubre pasado en El Vaticano por el que fueron beatificados 468 religiosos y religiosas muertos en la guerra civil. Pero no estaban todos. Entre ellos no había ni uno solo de los ejecutados o asesinados por orden de los franquistas que también los hubo. Y en este caso, me consta, que es, evidentemente, la Iglesia Católica quien debe explicar a que obedece este olvido. Pero faltaban esos *menos iguales* a los que se refería mi padre, como han faltado también en la memoria oficial de este país durante casi setenta años otros muchos y ésta sí que es nuestra responsabilidad: recuperar su buen nombre. Dignificar su memoria sí era y es nuestra responsabilidad, y la ley que hoy aprobamos es, a mi entender y al de mi grupo, un buen punto de partida y un sostén para seguir, pero ya no desde el olvido, sino desde la verdad.

Gracias, señorías, por su atención. Gracias, señor presidente. *Eskerrik asko.*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Yo, como comunista, como miembro del Partit Socialista Unificat de Catalunya, que sí que le dio lanzadas al toro cuando estaba vivo, les quiero decir a los miembros del

Partido Popular que el objetivo de esta ley es más amable, más democrático, más sencillo, más normal que el que ustedes plantean. Sólo queremos recuperar la dignidad, el reconocimiento del antifranquismo, de su lucha, de sus protagonistas, dotarles de derechos, recuperar la memoria y establecer un marco de pedagogía democrática. No exageren. No se toca nada ni se rompe nada.

Creo que debemos acostumbrarnos a discutir y a legislar entendiendo que estamos en una plena normalidad democrática después de treinta años de democracia y en una sociedad madura y democrática que no pide ya tuteladas de nadie. Creo que hay que ser menos dramático, que hay que tener mayor serenidad, porque si uno suma en esta legislatura todo lo que hemos ido rompiendo: familia, España, convivencia, no va a reconocer en qué sociedad estamos.

Con todo, yo quiero salir al paso de dos de los grandes argumentos que han dado los portavoces del Partido Popular. Uno es si se vulnera o no el espíritu de la transición y otro es la teoría de los dos bandos como elemento fundamental donde se argumenta el rechazo a esta ley. ¿Se rompe el espíritu de la transición? No. Yo creo que el ejemplo del debate de esta ley nos obliga a aceptar que la transición, el tránsito de una guerra civil como la española y una larga dictadura como la franquista no se resuelve ni se cierra en una sola transición, la de 1976 a 1978, la político-institucional que fue imprescindible y fundamental porque conformó el pacto democrático que permitió el paso de la dictadura a la democracia.

Hemos vivido y viviremos diferentes transiciones, por separado o juntos, así como políticas sociales: la política de reconciliación del Partido Comunista de España en 1956; el encuentro de Munich de 1962; la reforma política de 1976; la constituyente de 1978; el primer Gobierno de izquierdas de 1982; la alternancia con el Gobierno de Aznar de 1996. Todos estos son elementos que forman parte del proceso de normalización democrático de nuestro país.

No hay una única transición mítica y a sacralizar. Transiciones ha habido muchas y seguirá habiendo, más importantes o menos, más institucionales o más sociales porque la tragedia y la historia de casi medio siglo no se cierra con un pacto político. No ha pasado en ningún país y no va a pasar en España.

Cada momento de la transición ha tenido también su tiempo, sus protagonistas y su correlación de fuerzas. No quieren encerrar la historia ni las exigencias de los tiempos en lo que representaron en su tiempo los protagonistas y la correlación de fuerzas de 1977 y del llamado pacto constitucional. Hoy no hay los mismos frenos generacionales que en la transición. Mucha gente ha nacido ya en plena democracia, sin miedos, con ganas de preguntar, de saber qué pasó, por qué y por quién. Estos son los objetivos de esta ley.

Les quiero dar un dato del estado de opinión; por ejemplo, en Cataluña, con la Ley del Memorial Democrático, un 80 por ciento de la población está a favor de ese tipo de legislaciones. Estamos, pues, frente a una buena ley.

¿Se rompe el pacto constitucional? No, se rompe con el pacto del silencio; se rompe, se rechaza el pacto del silencio. Esta es la ley del silencio roto.

¿Qué es lo que rechazamos? Nosotros rechazamos la teoría de los dos bandos. Es que no había dos bandos: había la legalidad republicana y la sublevación y el golpe de estado del general Franco. Nosotros rechazamos el argumento de que fue una guerra civil en donde se produjeron excesos por ambos bandos, que hay que olvidar y superar. No, los excesos se produjeron en el bando republicano con las checas, los paseos, las patrullas de control, con la muerte de inocentes, ya sea por su condición social, por sus convicciones religiosas..., aquí es donde hubo los excesos, y nosotros no queremos pactar el silencio sobre estos excesos. Los partidos que defendimos la República, y los que nos sentimos herederos de los partidos que la defendieron, debemos hacer cuentas con nuestro pasado, ver qué pasó y cuáles son las responsabilidades en todos estos excesos. Pero es que el franquismo no fue el exceso; el franquismo fue el origen del mal, el franquismo fue el origen de todo eso, porque el franquismo quebró la legalidad republicana, quebró el orden republicano, institucionalizó una cruel y dura represión durante la guerra civil y a lo largo de cuarenta años —en la cual produjo víctimas, sobre la cual hubo una resistencia— y esto es lo que nosotros queremos reivindicar. Y esta ley nos obligará a nosotros a hablar de lo nuestro, pero sobre todo pondrá la historia en su lugar: no hubo dos bandos; hubo una república; hubo un golpe de estado y después hubo la institucionalización de una dictadura, de una represión.

Insisto en que esta ley no solo es la denuncia del franquismo, es la recuperación de la dignidad de sus víctimas, es la institucionalización de la pedagogía democrática. Yo voy a votar con plena conciencia, con serenidad, sin ningún impulso revanchista, pero sí desde el orgullo republicano, antifranquista y democrático. Y si alguien no ha entendido lo que he querido decir, señores, les recomiendo dos películas: vayan a ver *Salvador* o *Las 13 rosas* y sabrán de qué hablo.

Gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Porta.

La señora PORTA CANTONI: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista, como es evidente a estas alturas, va a apoyar claramente esta ley en los términos exactos en que ha salido dictaminada por la Comisión Constitucional. Agradezco al senador Casas la aclaración que ha hecho en esta última intervención respecto al tremendo esfuerzo que se hizo en el Congreso de los Diputados con el objeto de buscar el máximo consenso en torno al texto que al final se remitió a esta Cámara. Y les recuerdo que si precisamente un partido que está a la izquierda y otro a la derecha —y en este caso muy a la derecha— del Partido Socialista no quieren aprobarlo, probablemente eso es una prueba de que el texto es equidistante y respetuoso con todas las posiciones.

Por tanto nuestro apoyo es claro y rotundo, porque desde luego consideramos que este texto es necesario y tremendamente relevante para nuestra democracia. Lo que hoy estamos haciendo aquí simplemente es dar un paso más, un paso decisivo en la reparación a aquellas personas, a aquellos compatriotas que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil.

Esta ley es necesaria porque existen cuestiones pendientes. El propio Partido Popular lo reconoce al enmendar y mantener su apoyo a determinados artículos en los que se mejoran las indemnizaciones existentes hasta la fecha. Por tanto, existen cuestiones pendientes que después de treinta años de democracia, con la suficiente perspectiva histórica, tenemos que abordar y estamos obligados a abordar. Es necesaria porque existen colectivos que venían reclamando desde hace muchos años que se haga justicia con sus familiares y que los poderes públicos les facilitasen buscar sus restos, vivir el duelo y recuperar la dignidad y su propia —sí, señores del Partido Popular— memoria individual y familiar.

Es necesaria porque la mayoría de los españoles, incluidos los que votan al Partido Popular, creen y son conscientes de que las víctimas de la guerra civil y la dictadura han sido los grandes olvidados hasta ahora. La inmensa mayoría de los españoles sabemos que su generosidad, su gran generosidad a la hora de aplazar sus justas, justísimas peticiones en aras de servir a la transición democrática, todavía hoy, treinta años después, no han sido suficientemente reconocidas por este país.

Es necesaria porque en una nación que ha vivido una tan brutal y fratricida guerra y ha sufrido nada más y nada menos que cuarenta años de una cruenta y férrea dictadura, siempre es preciso repudiar los regímenes que alcanzan el poder a través de la sublevación e imponen sus convicciones mediante la aniquilación del adversario. Señor Muñoz-Alonso, un demócrata tiene que ser siempre, siempre, antifranquista. A los principios no se renuncia nunca, jamás.

Y es necesaria porque precisamente cumple con un mandato parlamentario, y lo hace ajustándose estrictamente a las resoluciones del Congreso de los Diputados, la del 1 de junio de 2004 y la de 20 de noviembre de 2002, que ustedes votaron a favor por unanimidad, cuando ustedes además disponían de mayoría absoluta.

¿Qué hay en esta ley que no responda a la resolución que ustedes votaron a favor en el Congreso de los Diputados? La voy a leer, señorías. Dice así el Diario de Sesiones: El Congreso acuerda reiterar que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática. ¿Se puede condenar en una resolución y no en una ley? ¿Qué diferencia hay entre el 2002 y ahora, señores del Grupo Popular? Punto tercero: el Congreso de los Diputados reafirma el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los

hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista e instamos a que cualquier iniciativa promovida por los familiares de los afectados reciba el apoyo de las instituciones. Esto exactamente es lo que estamos haciendo. Por otro lado, en ningún apartado ni en ninguna parte de la exposición de motivos se habla de un punto final ni de la utilización de la política en estos asuntos. Esas palabras fueron pronunciadas exclusivamente por el portavoz del Grupo Popular.

¿Qué hay en esta ley que rompa la convivencia en España y el consenso en torno al espíritu de la transición? Uno de los protagonistas de la transición —supongo que no me lo negarán—, Alfonso Guerra, en esa misma comisión dijo: Hay una interpretación que pretende desnaturalizar la transición española, mostrándola como un pacto para olvidar. Esta interpretación no responde a la realidad. La transición llevaba el germen de algunas renunciaciones, de ahí que hubo cierto olvido de algunas cuestiones que se deberían haber tratado, pero no hubo ningún pacto explícito o tácito. Por cierto —añadía—, sacar a la luz estos asuntos no reabre heridas, sino que ayuda a cicatrizarlas.

Y es que esto ha sido así durante estos últimos treinta años de democracia. Como se ha recordado hasta la saciedad, desde el año 1977 han sido múltiples las normas que han procurado ir reconociendo derechos y restañando heridas y las injusticias de uno de los periodos más negros de nuestra historia, como ya se ha dicho; una larga lista de disposiciones, que empezó con la Ley de Amnistía del 77, una ley que, por cierto, porque ustedes también tienen historia, Alianza Popular no votó a favor. ¿Acaso es que en estos momentos el Partido Popular está más cerca de las posiciones dubitativas que mantuvo en la época de la transición, de aquellas que ha venido manteniendo en ese eterno camino hacia el centro? ¿Es esta la explicación de la posición de hoy? Por cierto, lo han vuelto a repetir esta tarde. ¿Por qué consideran ustedes un arma arrojada declarar la ilegitimidad de los tribunales franquistas, permitir que los archivos de la represión queden a disposición de todo aquel que quiera consultarlos o estudiarlos o que la ley declare que el franquismo fue una dictadura? ¿Consideran ustedes que esto es un arma arrojada? ¿Contra quién? ¿Contra ustedes? No puedo creerlo.

La reconciliación no se rompe cuando se hace justicia y no se compadece con el olvido. Esta ley hace justicia con quienes entregaron tanto a este país, incluso su vida, por defender la libertad y la democracia. Esta ley hace justicia con quienes sufrieron el exilio por defender los valores que hoy proclama nuestra Constitución; les repara a ellos —y aquí tenemos a algunos de sus representantes—, a esos españoles del exilio para los que España fue su religión y que se vieron tratados como antiespañoles y antipatriotas al tiempo que privados de la posibilidad de volver al país que tanto amaban. Esta ley hace justicia con los que se sienten ofendidos y con los que nos sentimos dolidos cuando observamos símbolos o signos que exaltan a personas que sustentaron tanto oprobio y masacraron a sus compatriotas solo por el hecho de no pensar lo mismo que

ellos. Y esta ley también hace justicia con la historia, porque permite a los historiadores disponer de una amplia documentación convenientemente tratada para poder completar sus investigaciones.

Ni un solo artículo de esta ley, ni uno, está reescribiendo la historia, solo facilita que se conozca. ¿Alguien puede molestarse porque se llegue a saber la verdad y toda la verdad? ¿Quién se molesta por ello? Además, todo esto se hace sin faltar a una exigencia básica: la reconciliación que protagonizamos, entre otros muchos, también los socialistas en la transición política. Porque aquí no se condena a nadie, como hemos repetido hasta la saciedad.

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.

La señora PORTA CANTONI: Solo se repara a las víctimas.

Combatir el olvido es una forma poderosa de hacer justicia y eso es lo que hoy estamos haciendo.

Durante la guerra se cometieron atrocidades, desde luego, como en todas las guerras y muy especialmente en aquellas entre hermanos, pero todo nació como consecuencia de un golpe militar, cuyos dirigentes se perpetraron en el poder gracias a una brutal represión que no cesó hasta la muerte del dictador. (*El señor Ortiz Pérez: Tiempo.*)

El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya ya.

La señora PORTA CANTONI: Hubo víctimas de hechos constatados cuya reparación hemos intentado a lo largo de estos años de democracia, pero millones de españoles sufrieron durante la guerra y la posterior dictadura las consecuencias del horror.

Si me permite el señor presidente, quiero acabar con algo que corresponde a mi memoria personal porque es verdad que la memoria es la composición de los recuerdos que cada uno nos hacemos. El día que murió Franco los que estábamos más esperanzados éramos los más jóvenes. Veíamos la posibilidad de que las cosas cambiaran y empujamos para poder disfrutar de un futuro en libertad. Ese día fui a abrazar a mi padre pero él no estaba contento. Con lágrimas en los ojos solo pronunció una frase: Sí, Franco ha muerto, pero quién me va a devolver a mí la vida.

Eso, desde luego, no lo podemos hacer con una ley pero al menos podemos reparar a los que sufrieron y fueron perseguidos y a sus familias, y así mi hija, su nieta, sabrá que aquello fue un horror que nunca se debe repetir. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Van-Halen.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Señor Jorquera, la frase «los pueblos que olvidan su pasado están condenados a

repetirlo» no es de Franco, es del filósofo norteamericano de nombre español Jorge Santayana.

Pero sigamos con frases. Marcelino Camacho, al que hace poco se le dio un merecido homenaje, escribió algo así: ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos estamos matando unos a otros si no borráramos ese pasado de una vez para siempre? Cerramos una etapa y abrimos otra. Alguien acaba de decir aquí que nadie ha hablado de cerrar etapas, pero aquí tienen el testimonio de una persona emblemática.

Señora Etxegoyen, yo no le voy a leer los nombres de los 6.870 religiosos asesinados en la guerra civil española porque no podría. Usted ha leído el nombre de aquellos religiosos paisanos suyos y todos —por supuesto, el que les habla— deploramos esas muertes, como todas. Tampoco recuerdo ahora los nombres de los trece obispos asesinados en la guerra civil española, con lo cual tampoco se los puedo nombrar. Pero ha hablado usted de una cosa curiosa, dicha por una persona ajena a la Iglesia, y ha reprochado que no haya hecho santos a esos religiosos vascos. Yo, que no soy religioso y que solo pertenezco a la Iglesia militante, sé lo suficiente como para decirle que los religiosos que han sido considerados santos por la Iglesia no lo han sido por su muerte, no se equivoque; lo han sido porque han muerto en la fe y por la fe, de lo contrario 6.870 religiosos serían santos y solo lo son 498.

La diferencia es que a los que la Iglesia declara santos —se trata de una sociedad perfecta que puede hacer declaraciones según su criterio y no según el de su señoría o el mío— es porque han muerto dando testimonio de fe, no vaya usted a enseñar ahora a la Iglesia a hacer santos como nos enseña el señor Zapatero a ser españoles. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Como ya he dicho —esta es la tercera ocasión que hablo durante esta tarde—, y también decía el senador Muñoz-Alonso, esta ley no suma nada, es improcedente y obedece a esa manía del señor Zapatero de crear problemas en lugar de resolverlos, a esa manía de mirar hacia atrás en lugar de hacerlo hacia adelante.

Lo que no quisiera —y con esto termino, señor presidente— es que se cumpliera eso que apuntaba el editorial de un periódico hace unos días: No han sido los que combatieron ni sus hijos, que luego pactaron la transición, los que han reabierto heridas con más empeño que fosas, sino nietos oportunistas que por resentimiento de causas desconocidas se sintieron ajenos al esfuerzo de convivencia que alumbró la transición y que hizo la Constitución del año 1978.

Quisiera que esto que acabo de leer no fuera cierto, pero dado el tenor de algunos discursos que hemos oído esta tarde de descalificaciones e insultos, lo parece.

Muchas gracias. (*Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (*El señor Jorquera Caselas pide la palabra.*)

Tiene usted la palabra, senador Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Intervengo por el artículo 87 para hacer una precisión. Si el señor Van-Halen lee el *Diario de Sesiones* cuando esté transcrito, verá que dije que la frase no era de Franco, pero que era una de las que más repetía.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

En primer lugar, votamos las enmiendas 33 y 34, del senador Sampol.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 15; en contra, 227; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del senador Sampol, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 18; en contra, 228.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 35, del senador Jorquera, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 21; en contra, 225.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 1 a 18, del senador Urrutia, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 18; en contra, 228.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 20, del senador Tuñón, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 15; en contra, 230.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 59 y 60, del Grupo de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 17; en contra, 226; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Votamos la número 27.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 20; en contra, 226.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés números 66 a 112.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, siete; en contra, 226; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Seguidamente votamos las enmiendas números 37 a 56, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 115; en contra, 128; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, a continuación votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 127; en contra, 119.

El señor PRESIDENTE: Señorías, con el resultado de la votación queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. (*Fuertes y prolongados aplausos.*)

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las diez de la mañana.

Eran las veintiuna horas y treinta y cinco minutos.